



**“Poder estar juntos”: las prácticas que territorializan la paz en dos lugares transicionales
en Mutatá, Antioquia**

Natalia Matute Aguirre

Trabajo de investigación presentado para optar al título de Magíster en Estudios Socioespaciales

Asesor

Andrés García Sánchez, Doctor (PhD) en Antropología Social

Universidad de Antioquia
Instituto de Estudios Regionales
Maestría en Estudios Socioespaciales
Medellín, Antioquia, Colombia
2024

Cita	(Matute Aguirre, 2024)
Referencia	Matute Aguirre, N. (2024). "Poder estar juntos": las prácticas que territorializan la paz en dos lugares transicionales en Mutatá, Antioquia., [Tesis de maestría].
Estilo APA 7 (2020)	Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.



Maestría en Estudios Socioespaciales, Cohorte VIII.

Grupo de Investigación Estudios del Territorio.

Instituto de Estudios Regionales (INER).



Centro de Documentación Instituto de Estudios Regionales (INER)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

A la Zara de mi corazón.

Agradecimientos

Al amor.

Al de mis padres, que siempre me acoge.

Al de mis amigos, que siempre me impulsa.

Al de los maestros y compañeros de la cohorte VIII, que me guía.

Al de Zara, Maya y Malú que me mantiene en movimiento.

A la Universidad, que ahora sé que ha sido el amor el que la ha convertido en lugar.

Tabla de contenido

Resumen	10
Abstract	11
Introducción	12
Capítulo 1. Del concepto a la realidad: debatiendo la paz territorial y reconociendo las prácticas espaciales en los lugares transicionales de Mutatá.....	21
1.1. Un debate coyuntural: Colombia entre el enfoque territorial del acuerdo de paz y las múltiples visiones de la paz territorial.....	22
1.2. Los “lugares transicionales” una estrategia del acuerdo de paz.....	30
1.3. La emergencia de nuevas territorialidades de paz y su incidencia en la reconfiguración socioespacial a nivel local	35
1.4. El estudio de caso: un enfoque cualitativo para comprender la configuración de los lugares transicionales en Mutatá	40
1.5. La intersección de lo conceptual y lo metodológico: reflexiones sobre la puesta en práctica de esta investigación.	48
Capítulo 2. Urabá: entre el conflicto armado y la construcción de nuevas territorialidades de paz.	55
2.1. Tipo de territorialidades.	61
2.2. Mutatá: entre las geografías de la guerra y los lugares transicionales.	77
Capítulo 3. El encuentro: un análisis socioespacial de los lugares transicionales en Mutatá	86
3.1. Lugares transicionales: ZVTN, ETCR y NAR.....	88
3.2. De Gallo a San José de León: ¿incumplimientos? Las dificultades de transicionar en el PNN Nudo de Paramillo.....	97
3.3. De Santa Lucía a Becuarandó: incumplimientos y dificultades de tránsito a la paz en medio del conflicto armado.....	106
3.4. Miradas socioespaciales de los lugares transicionales de paz: mi posicionamiento.	117
4. Conclusiones.	144
Referencias	148

Lista de figuras

Figura 1 Procedimiento metodológico de la investigación	43
Figura 2 Tipo de población en Urabá.....	57
Figura 3 Divisiones político-administrativas de los municipios de Urabá.....	59
Figura 4 Conflictos y actores armados en el Urabá antioqueño 1960-1990	66
Figura 5. Zona de incidencia de los frentes de las FARC-EP en Urabá	69
Figura 6 Línea del tiempo de la conformación de los frentes de las FARC-EP.	70
Figura 7 mapa oficial del Municipio de Mutatá.....	79
Figura 8 Dinámica del desplazamiento en Mutatá 1994-2013.....	83
Figura 9 Distribución ZVTN y PTN.	89
Figura 10 Mapa de la distribución de ETCR en Colombia	91
Figura 11 Nuevas Áreas de Reincorporación en Colombia	95
Figura 12 Trayectoria Gallo-San José de León.....	100
Figura 13 Configuración espacial	133

Lista de fotografías

Fotografía 1 Río Mutatá	55
Fotografía 2. Serranía de Abibe	65
Fotografía 3. Parque Nacional Nudo del Paramillo.	65
Fotografía 4 Encuentro para realizar actividades de aseo y embellecimiento-Parque Becuarandó	86
Fotografía 5 ETCR Gallo, Tierralta, Córdoba.....	97
Fotografía 6 Vía de ingreso a San José de León, 2023	103
Fotografía 7 NAR San José de León, junio 2023.....	104
Fotografía 8 Desmonte del ETCR Santa Lucía.....	108
Fotografía 9. Trayectoria Santa Lucía-Becuarandó	111
Fotografía 10 Vía de ingreso a Becuarandó	112
Fotografía 11 Becuarandó.	113
Fotografía 12. Vivienda en construcción NAR San José de León	123
Fotografía 13. Viviendas "caserío" ETCR Mutatá (Becuarandó)	126
Fotografía 14 Participación del grupo Amaranta en el mercado campesino de Chigorodó, 2024.	140

Lista de gráficos

Gráfico 1 Hechos victimizantes en Mutatá 2020-202384

Gráfico 2 Múltiples transiciones138

Siglas, acrónimos y abreviaturas

ACCU	Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
aETCR	Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación
AFP	Acuerdo Final de Paz
ARN	Agencia para la Reincorporación y la Normalización
ART	Agencia para la Renovación del Territorio
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
CNR	Consejo Nacional de Reincorporación
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EPL	Ejército Popular de Liberación
FARC-EP	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
IM	Imaginación Moral
IPM	Índice de Pobreza Multidimensional
JAC	Junta de Acción Comunal
JEP	Jurisdicción Espacial de Paz
NAR	Nuevas Áreas de Reincorporación
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PNN	Parque Nacional Natural
PTN	Puntos Transitorios de Normalización
UP	Unión Patriótica
ZNTN	Zonas Veredales Transitorias de Normalización
ZRF	Zonas de Reserva Forestal

Resumen

En esta investigación se analiza cómo la construcción de la paz territorial en el marco del acuerdo firmado entre las FARC-EP y el gobierno en 2016 le ha implicado a los diversos actores de la sociedad, entre los que se incluyen de forma especial los excombatientes, dejar atrás los conocidos escenarios de violencia y emprender guiados por la imaginación, la creatividad y el riesgo un camino hacia el misterio de la paz. Se estudian dos lugares transicionales ubicados en Mutatá, Antioquia: NAR San José de León y ETCR Mutatá, en los que se realizan esfuerzos diarios por sostener la esperanza de una "paz duradera" ante las dificultades de la implementación del acuerdo y las tensiones propias del contexto en Urabá -región en la que persiste el conflicto armado-, y de qué manera estos esfuerzos han generado prácticas cotidianas de convivencia, reconciliación y reparación entre los actores locales y los excombatientes, que han hecho tangible la territorialización de la paz, permitido la resignificación de espacios antes asociados con la guerra y la emergencia de nuevas territorialidades de paz, que, al interactuar con las demás (socioculturales, bélicas, institucionales etc.) han contribuido a una reconfiguración a nivel local.

Palabras clave: Paz territorial, Reconfiguración socioespacial, Acuerdo de paz, Reincorporación, lugares transicionales.

Abstract

This research analyzes how the construction of territorial peace in the framework of the agreement signed between the FARC-EP and the government in 2016 has implied to the various actors of society, including especially the ex-combatants, to leave behind the known scenarios of violence and undertake guided by imagination, creativity and risk a path towards the mystery of peace. Two transitional sites located in Mutatá, Antioquia are studied: NAR San José de León and ETCR Mutatá, where daily efforts are made to sustain the hope of a "lasting peace" in the face of the difficulties of the implementation of the agreement and the tensions inherent to the context in Urabá -a region where the armed conflict persists-, and how these efforts have generated daily practices of coexistence, reconciliation and reparation among local actors and ex-combatants, which have made the territorialization of peace tangible, allowed the resignification of spaces previously associated with war and the emergence of new territorialities of peace, which, by interacting with the others (socio-cultural, warlike, institutional, etc.), have contributed to a reconfiguration at the local level.

Keywords: Territorial peace, socio-spatial reconfiguration, peace agreement, reincorporation, transitional places.

Introducción

Pensar en realizar una investigación que incluyera a *los estudios socioespaciales* me llevó a preguntarme sobre temáticas en las que, como politóloga, estudiante de maestría, profesional de las ciencias sociales y mujer colombiana quiero profundizar.

Sin duda, tener una comprensión sobre el conflicto armado interno en Colombia, sus múltiples causas y sus diversas consecuencias sociales, espaciales y económicas ha sido siempre un tema de mi interés. Desde que inicié mi proceso formativo en la Universidad en 2009, la construcción de paz y la posibilidad de la configuración de un proceso para la resolución del conflicto armado colombiano y los diversos mecanismos alternativos para la resolución de los conflictos de toda índole han sido temas que movilizan mi gusto por la investigación. Una cuestión que tiene que ver, siento, con la posibilidad como colombiana de comprender el contexto del país que habito.

Esto, me ha llevado a entender la diversidad espacial que aquí existe, y las muchas formas en que el conflicto se ha expresado en los distintos contextos, pero también, a identificar y reconocer las maneras que los actores que se han encontrado dentro de la tensión que suscita habitar la guerra han consolidado para la paz, desde la resistencia, la palabra, la negociación y la mediación.

Colombia es un espacio geográfico en el que históricamente se han evidenciado las disputas por el poder, las cuales han gestado en sí mismas un orden espacial basado en la idea colonial de configurar a la nación a partir de una dinámica centro-periferia, la cual ha sostenido unas prácticas de diferenciación, violencia y exclusión de aquellos denominados “territorios salvajes” que se encuentran fuera del núcleo de la civilización (el centro andino del país), una forma de ordenar el territorio que como lo sugiere Margarita Serje, sirve “porque es allí donde su racionalidad moderna se muestra como espejismo, donde se hacen evidentes sus ideales de seguridad, de orden social y orden estético” (Serje, 2011, 20).

En la misma línea y partiendo de la idea de que Colombia a nivel territorial ha sido configurada de forma diferencial, esto es, basada en unas particularidades geográficas, culturales, políticas, gastronómicas, etc., que han servido como base para la construcción de la diversidad nacional, debe considerarse también, como lo plantearon (García y Aramburo, 2011), que el conflicto y la violencia no se han dado de forma homogénea en el territorio nacional. Sino que, ha

sucedido bajo intensidades, actores, formas de infringir violencias y duraciones particulares, que dependen entre otros aspectos de la ubicación geográfica, las formas de poblamiento, las dinámicas económicas, la presencia institucional, las trayectorias de presencia y control de los grupos armados ilegales, etc. En este sentido, la guerra en el país ha fungido como un elemento determinante en la configuración del “ordenamiento territorial”.

Las violencias se han expresado también de forma diferencial, aconteciendo de forma más aguda en territorios *periféricos*, esto es, aquellos que se salen de las dinámicas centralistas de las grandes ciudades, convirtiendo a las regiones rurales (aunque no es que los centros urbanos hayan estado exentos de las violencias de la guerra), en los mayores receptores de las acciones realizadas en el marco del conflicto armado y por ende de las consecuencias que derivan de ellas. Todo esto, implicó el incremento allí de condiciones estructurales como la pobreza, exclusión y estigmatización de las comunidades, tanto a nivel individual como colectivo, y además posibilitó un tipo de ordenamiento territorial establecido por los actores armados en favor de las dinámicas bélicas.

La región de Urabá es un ejemplo claro de esas expresiones de la violencia exacerbada. Su configuración como región ha estado atravesada por procesos de colonización que van desde la disputa territorial entre españoles y las comunidades indígenas históricamente asentadas en este territorio en el siglo XVI, la llegada de comunidades negras en el siglo XIX y la de los campesinos con sus diversidades identitarias venideros desde Bolívar, Córdoba y el centro de Antioquia a mediados del siglo XX. Posterior a esto, se da en el centro de esta región (actualmente los municipios de Mutatá, Chigorodó, Turbó y Apartadó) la incursión de una dinámica económica que modifica la realidad social e influencia las condiciones políticas de esta. A inicios del siglo XX comenzó la instalación de monocultivos de banano que permitió el ingreso de grandes propietarios, reconfiguraron la dinámica espacial y generaron una presión que resultó en la rápida consolidación de centros poblados urbanos, además fue a partir de la consolidación de estos grandes polos de empleo que en Urabá se consolidaron los primeros y más importantes sindicatos de trabajadores de las grandes empresas bananeras, los cuales, contribuyeron de forma importante en la dinámica política posterior.

En esta región, en la década de 1960 se consolidaron frentes de las guerrillas del EPL y posteriormente de las FARC-EP, quienes introdujeron una dinámica bélica que en los 90 se intensificó con la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC. Un conflicto armado y

social que involucró cruelmente a civiles, haciendo que se dieran distintos hechos victimizantes como la extorsión, el secuestro, el asesinato y especialmente procesos de desplazamiento forzado, que a su vez dieron paso a otro factor de relevancia para comprender la dinámica bélica de esta región, esto es, el crecimiento, en especial en la zona norte (los actuales municipios de Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá) de predios de grandes extensiones, logrados gracias a la venta a muy bajo costo de pequeños y medianos predios de los campesinos desterrados (García y Aramburo, 2011).

Dentro de esta región, hubo intensidades en la violencia que también son diferenciales. En Mutatá, uno de los municipios de la zona centro, desde la década de 1970 se dio la presencia de esta guerrilla de forma particular dada la ubicación estratégica que posee, pues limita con el departamento de Córdoba, específicamente con Tierralta, y el departamento de Chocó en el municipio de Riosucio por donde se establecieron rutas fluviales directas al océano Atlántico y el Pacífico, además, dentro de sus límites geográficos se encuentra en el borde oriental el Parque Nacional Natural Paramillo, en donde se localiza la Serranía de Abibe, ambos referentes geográficos de importancia para la estrategia militar de este grupo armado.

En los años 90, con la incidencia en esta región de las AUC, en Mutatá los hechos de violencia y victimización fueron unos de los más altos en la historia del conflicto armado en Urabá, debido al interés por parte de ambos grupos (FARC-EP y AUC) de tener el dominio de este lugar con ubicación estratégica (García y Aramburo, 2011).

En medio de esta compleja realidad, en la última década del siglo pasado, ocurrieron en Colombia procesos de negociación entre el Estado y los diferentes grupos armados al margen de la ley, de los cuales algunos se han concretado en acuerdos de paz y desmovilizaciones. Ejemplo de ello son los acuerdos firmados entre el gobierno y la guerrilla del M-19, así como entre el estado colombiano y las FARC-EP, en 1990 y 2016 respectivamente, y los acuerdos de cese al fuego y desmovilización acontecidos entre 2003 y 2006, pactados por el gobierno nacional y los grupos paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En la actualidad, en Colombia se está viviendo el posacuerdo¹ luego del proceso de paz llevado a cabo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular -FARC-

¹ En esta investigación se entenderá la noción de posacuerdo, distinta a la de posconflicto. Mientras que el posacuerdo se refiere específicamente al período después de la firma de un acuerdo de paz, el posconflicto abarca un período más amplio que incluye la implementación del acuerdo y la transición hacia la paz sostenible. Considerando que el concepto

EP- y el gobierno colombiano, del que derivó el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en noviembre de 2016 luego de 4 años de negociación. Este ha sido un proceso que ha transitado por tres gobiernos distintos: Juan Manuel Santos (2010-2018), Iván Duque Márquez (2018-2022) y en la actualidad Gustavo Petro (2022-2026), cada uno con posicionamientos políticos distantes que han influenciado de forma diversa en la comprensión y en el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo. En este momento, también, hay un esfuerzo institucional por solidificar las bases de un nuevo diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, luego de que se postergara durante el gobierno de Duque, tras las negociaciones iniciadas con Juan Manuel Santos.

En la actualidad, Colombia atraviesa el camino complejo del posacuerdo. En el marco de esta negociación se definieron 6 puntos esenciales para posibilitar que el país transitara hacia la construcción de la paz. El punto 3 “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil-dejación de las armas” se enfoca en establecer las condiciones y los mecanismos para que los combatientes de esta guerrilla dejen las armas y se reincorporen a la vida civil. Este proceso implica el desarme, la reincorporación económica, social y política, y la garantía de la seguridad y la protección para los excombatientes y sus familias. Además de la disposición de lugares para llevar a cabo este proceso.

En Urabá se han realizado grandes apuestas para aportar al proceso de posacuerdo que vive Colombia. En esta región están 4 de los lugares para la transición política de los excombatientes de las FARC-EP, instalados a nivel nacional: ETCR Llano Grande en Dabeiba, ETCR Mutatá, NAR San José de León en Mutatá y NAR Godó en Dabeiba, y con ellos, ha llegado una infraestructura para la paz que ha implicado la presencia de una institucionalidad (nacional y e internacional) que ha propuesto sobre esta región otras dinámicas no violentas y más en pro de la construcción de convivencia que se ha superpuesto a las dinámicas bélicas que todavía persisten.

Los excombatientes del Frente 58 de las FARC-EP, el cual tuvo incidencia en Urabá, fueron convocados a la zona de desarme y posterior área de reincorporación ubicada en la vereda Gallo en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, en donde las condiciones de accesibilidad y restricciones ambientales imposibilitaron el cumplimiento de las condiciones mínimas para la

de paz del que se parte aquí va más allá del agotamiento del conflicto, esto es de la idea de una paz negativa (Galtung, 1969), y que tiene que ver con una construcción más profunda y estructural de la dinámica social a nivel de país, en este texto usaremos la palabra posacuerdo, que se cree ajusta más al momento histórico en el que se encuentra Colombia, particularmente tras la firma del acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP. Ver: <https://diariodepaz.com/2018/10/02/posacuerdo-no-posconflicto/>

perdurabilidad del lugar, esto es, acceso a servicios públicos y sociales básicos y a la posibilidad de ejecutar proyectos productivos que viabilizaran el bienestar económico del colectivo fariano. Por lo que, en 2018, se definió por parte de los mismos excombatientes trasladarse hacia Urabá, específicamente al municipio de Mutatá con el objetivo de encontrar un lugar en condiciones más favorables para proyectar allí el proceso colectivo de transitar hacia la vida sin armas y en convivencia con otros sectores sociales.

En Santa Lucía en Ituango, se estableció el aETCR Santa Lucía al que llegaron los excombatientes del Frente 18 (con incidencia en Urabá). Allí, aunque fue posible tener acceso a servicios públicos básicos (agua, energía, acceso a centros poblados, etc.), fue imposible para la institucionalidad garantizar la seguridad de los excombatientes, lo que ocasionó que se diera un traslado de este ETCR hacia Mutatá donde se construyó en el 2021 el ETCR Mutatá o Becuarandó.

Al interior de estos lugares, creados para viabilizar el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP, se dan prácticas cotidianas que han consolidado entornos de convivencia propicios para las múltiples transiciones que atraviesan estos hacia la vida civil, y que han aportado también al restablecimiento del tejido social, compuesto por los múltiples actores presentes en esta región (comunitarios, económicos, políticos, institucionales, etc.), tejiendo redes que han servido como la base para no desistir, a pesar de las dificultades que ha tenido la implementación del acuerdo y las complejidades propias de un proceso de reincorporación.

En este sentido, se plantea aquí que la noción de paz y su territorialización no se define únicamente desde la perspectiva institucional del deber ser o el ideal de lo imaginable. Más bien, está profundamente arraigada en las prácticas cotidianas, las decisiones tomadas y las acciones emprendidas diariamente en estos lugares y en general en los territorios donde se están realizando esfuerzos genuinos por resignificar las relaciones con el espacio y las dinámicas sociales que los constituyen en función de la armonía y la convivencia. Así pues, las prácticas de paz están directamente relacionadas con las posibilidades socioespaciales específicas de las regiones que se habitan, haciendo de estas construcciones particularizadas sustentadas en el reconocimiento, las interacciones y adaptaciones constantes entre los actores y las realidades locales.

En particular las condiciones del acuerdo dejaron abiertas las posibilidades de que las relaciones de poder, las dinámicas comunitarias, las construcciones dadas en y con el territorio fueran re-pensadas (Jiménez, 2016) y en ese sentido se iniciaría un proceso de reconfiguración en la idea esperanzadora de unas “geografías alternativas” donde sean posibles nuevas formas de

gestionar y habitar los territorios, como bien lo recoge Jiménez: “las geografías de la guerra requieren desestructurarse para abrir el horizonte hacia unas geografías de la paz. Esto es, hacia una organización del espacio que tenga como horizonte la construcción de territorios justos” (Jiménez, 2016: 61).

Respecto a las experiencias consolidadas alrededor de San José de León y Becuarandó, se realizaron algunas reflexiones que además de involucrar al proceso de construcción de paz que los sustenta se conecta también con un análisis que prioriza algunos elementos socioespaciales.

El primero, tiene que ver con la ubicación de estos, tanto los iniciales (Gallo y Santa Lucía) como los actuales (Becuarandó y San José de León), pues reflejan la pretensión de resignificar estos lugares. Mutatá (Urabá), fue una región anteriormente conocida como epicentros del conflicto armado, ahora se consideran estratégicas para la construcción de un proceso de reincorporación que contribuye a la paz. Este cambio no solo implica una nueva localización física para proteger a los excombatientes de las FARC-EP, sino que también simboliza un esfuerzo más profundo por transformar antiguos escenarios de guerra en lugares de esperanza y reconstrucción social. La resignificación espacial, en este contexto, se convierte en un elemento clave para entender cómo se están redibujando los paisajes físicos y sociales de la transición, promoviendo una nueva narrativa de convivencia y desarrollo sostenible en regiones anteriormente devastadas por la violencia.

Segundo, se ha planteado también que la construcción de una paz territorializada en Colombia, en su difusa comprensión, requerirá de unas bases democráticas y participativas amplias y estables, que posibiliten la conciliación entre las perspectivas de los distintos actores y con ello, la capacidad de imaginarse territorialidades más equilibradas en las que se logre incluir las diversas comprensiones de la vida que integran la geografía nacional (Montoya, 2017), poniendo el acento pues, en el reto y la potencia que implica pensarse en una construcción de paz que en la práctica involucre realmente a los distintos actores y sus múltiples formas de comprender e incidir en los contextos que habitan.

Y tercero, acorde a estas reflexiones, dentro del acuerdo final para la paz, se encuentra el punto 1 que integra: la reforma rural integral, el catastro multipropósito, la caracterización de municipios fuertemente afectados por el conflicto armado, la formulación de planes de desarrollo con enfoque territorial, y la jurisdicción agraria. Todo esto como resultado del entendimiento del “problema de la tierra en Colombia” como una de las causas raíz del conflicto interno.

El profesor Montoya (2017), propone que la visión de una paz territorial aparece como un esfuerzo por ampliar la discusión sobre la tenencia de la tierra y las condiciones geográficas e históricas particulares de las regiones afectadas por el conflicto armado como factores condicionantes de las acciones a implementar para construir paz. Así que la idea de una paz territorial puso a la cuestión agraria y el problema de la tierra como elementos fundamentales para la idea de construir paz y dirimir un conflicto, cuestiones que como lo sugiere el mismo autor deberán trascender la disputa de la propiedad privada y virar hacia una comprensión amplia de las diversidades culturales, étnicas, ambientales, económicas, políticas, religiosas, sexuales y de género constitutivas de nuestra sociedad (Montoya, 2017).

En definitiva, a partir de dichas negociaciones se ha dado una reconfiguración de las dinámicas propias de la guerra en vastas porciones del territorio nacional, dado que esto ha implicado no solo la desmovilización de combatientes y con ello el retiro de actores armados de los contextos en que tenían incidencia, sino también la aparición de nuevos actores armados con los intereses de cooptar el poder cedido y en paralelo, la emergencia de organizaciones y prácticas institucionales y organizativas que pretenden aportar a la continuidad de dichos procesos de negociación. Ahora, estas prácticas se han expresado de forma territorial, esto es, están atravesadas por las posibilidades espaciales que aparecen según variables como las condiciones geográficas y las complejas situaciones multidimensionales que comprometen las formas de vida de los habitantes de estas regiones.

Este contexto, y el interés precedente en estos temas, dio pie a que me propusiera indagar sobre la idea de paz y los procesos para su construcción que se han experimentado en Colombia, y particularmente en el departamento de Antioquia. Teniendo en cuenta el alcance de una investigación como esta -trabajo de investigación de maestría- y aspectos metodológicos relacionados como la posibilidad de movilidad, el acceso a la información, el recurso económico, el tiempo disponible para la realización de este estudio y el conocimiento de la región, definí focalizar mis preguntas en el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP llevado a cabo en la NAR San José de León y el aETCR Becuarandó, ubicados en la vereda La Fortuna, en el municipio de Mutatá de la región de Urabá.

Situada en estos lugares y en la temporalidad que va de 2016 hasta la actualidad, se realizó un análisis general de las diversas formas de comprender la paz, haciendo énfasis en las condiciones

en las que los excombatientes² de las FARC-EP se han vinculado al proceso de construir desde las dinámicas cotidianas un tránsito hacia una nueva realidad por fuera del combate bélico.

Para dicha comprensión interesó responder, entre otras, las siguientes preguntas: ¿cómo ha sido el proceso de reincorporación de los excombatientes a través de los lugares construidos para la transición política, en este caso, el aETCR y NAR?, y ¿de qué forma la instalación de estos en Mutatá ha implicado reconfiguraciones en la dinámica propia de las territorialidades del municipio?, ¿cómo los excombatientes comprenden, imaginan y materializan la construcción de paz?, ¿existe una concepción de paz conjunta entre ellos?, ¿estos espacios son entendidos por los excombatientes como provisionales o cuál es el tipo de relación temporal que los vincula a ellos?, ¿cuáles son las formas de “hacer” paz por parte de los excombatientes y cómo se vinculan con las de otros actores? Interrogantes que, aunque indagan por los procesos de construcción de paz, se centran esencialmente en la relevancia que en el posacuerdo tiene la producción del espacio, y con ello la capacidad de imaginar y construir unas *geografías para la paz*, que, como las de la guerra, no son homogéneas.

Para lograr indagar sobre esas cuestiones y obtener información que permitiera a la construcción de análisis propios se definió realizar un estudio de caso, y con ello implementar una metodología cualitativa que permite el acercamiento a fenómenos contemporáneos dentro de su contexto espacio-temporal, para esto, se analizaron estudios realizados en estos lugares y se revisó bibliografía académica que permitió el soporte conceptual y nutrió la capacidad reflexiva de lo que aquí se enuncia, y por supuesto, la visita a estos espacios con el fin de aplicar otras herramientas de la investigación social como la observación, las entrevistas semiestructuradas, los recorridos e inmersión en la vida cotidiana de mis interlocutores, que posibilitó captar de modo general la dinámica socioespacial que se produce en estos lugares.

La triangulación de la información obtenida por medio de la revisión bibliográfica y las actividades de campo permitió realizar una descripción de estos y de lo que acontece en ellos a la luz de los planteamientos teóricos, lo que derivó en la emergencia de ideas y reflexiones propias con las que en definitiva se estructuró esta investigación.

² En esta investigación se retoma la categoría de excombatientes para referirse a todos los miembros de las FARC-EP que han dejado de participar en la lucha armada y se han sometido al proceso de desmovilización y reincorporación, haciendo de esta una categoría jurídica y política que los vincula al acuerdo de manera individual y colectiva. Se usará esta categoría y no la de “firmante de paz”, otra forma nominal para esta población, debido a que es la forma en que con mayor recurrencia se autodenominaron las personas con las que tuve relación directa.

El presente informe de investigación se estructura en 4 capítulos. *Del concepto a la realidad: debatiendo la paz territorial y reconociendo las prácticas espaciales en los lugares transicionales de Mutatá*, en este se presentan los conceptos claves para la fundamentación teórica, a saber: paz territorial, lugares transicionales, territorialidades de paz y reconfiguración socioespacial. En este capítulo, además, se plantea al lector la ruta metodológica construida para lograr este estudio, haciendo énfasis en los retos que implica en la práctica y la forma en que se constituyó.

En el *capítulo 2. Urabá: entre el conflicto armado y la construcción de nuevas territorialidades de paz*, se presenta un contexto general de la dinámica bélica en Urabá, relacionando la presencia de los diversos actores armados con incidencia en la región, esto es, las FARC-EP, el ELN, las AUC y los momentos de negociación y reconfiguración que se han presentado. Se realizó un esfuerzo por destacar las particularidades contextuales de Mutatá, municipio que, aunque se encuentra inmerso en la dinámica regional, posee características propias de interés para esta investigación dado que es allí donde se encuentran ubicados los lugares a analizar.

En el *Capítulo 3. El encuentro: un análisis socioespacial a los lugares transicionales en Mutatá, La NAR San José de León y El aETCR Becuarandó*, se describe cada uno de los lugares objeto de esta investigación y se realizó un análisis comparativo y socioespacial de aspectos que emergieron de los procesos de re-conocer estos lugares.

Finalmente, se incluye un apartado de conclusiones donde se sintetizan las ideas clave desarrolladas a lo largo de los capítulos anteriores. El objetivo principal es cerrar las reflexiones ofreciendo una visión integradora que destaca los puntos más relevantes de la investigación y sugiere posibles implicaciones tanto teóricas como prácticas para futuras indagaciones.

Capítulo 1. Del concepto a la realidad: debatiendo la paz territorial y reconociendo las prácticas espaciales en los lugares transicionales de Mutatá

En el presente capítulo se detallarán las categorías de análisis que fundamentan este estudio, develando el marco conceptual que guía el análisis y las reflexiones construidas alrededor de los casos analizados. Se describe la propuesta metodológica, especificando los métodos y técnicas de investigación empleados para la recolección y construcción de datos, se explica cómo los instrumentos fueron seleccionados y adaptados para garantizar la validez y fiabilidad de los resultados, y cómo se estructuró el proceso de investigación para responder a las preguntas planteadas. Por último, se incluyen algunas reflexiones preliminares que surgieron durante la aplicación de estas categorías y herramientas metodológicas. Estas no solo ilustran la dinámica y los desafíos enfrentados durante el proceso, sino que también evidencian la flexibilidad y adaptabilidad de la ruta metodológica adoptada. Al compartir estas observaciones, se plantea que las rutas para la investigación no son lineales ni rígidas, sino que requieren ajustes y reconsideraciones constantes a medida que se avanza en el estudio.

Definir los horizontes conceptuales implicó, en primer lugar, establecer categorías de análisis que proporcionaran un respaldo teórico para las reflexiones resultantes. Seleccioné cuatro nociones que me ayudaron a comprender los avances conceptuales en estas áreas de conocimiento, y a construir elementos para una lectura socioespacial sobre los procesos de construcción de paz en la vida cotidiana.

“Paz territorial”, “lugares transicionales”, “territorialidades de paz” y “reconfiguración socioespacial” son los conceptos sobre los que realicé la revisión, sistematización y procesamiento de información secundaria, con el objetivo de comprender estas categorías como una red relacional que brinda herramientas explicativas, y para evidenciar algunas de las tensiones entre la teoría y la práctica inmersas en el proceso de construcción de “paz” en Colombia.

Vale la pena aclarar que este no es un estado del arte con el que se pretenda poner en evidencia “todo” lo que se ha dicho sobre la paz territorial, la construcción de paz o las territorialidades de paz, pues ese no es el interés y desborda las posibilidades de esta investigación. Por tanto, lo que aquí realicé fue una búsqueda “estratégica” guiada por los intereses de este estudio y por las categorías de análisis definidas para ayudarme en la comprensión y sustentación de los análisis que de esta derivan.

A continuación, se presentarán algunos de los postulados, significados y análisis propuestos por autores que han abordado estas categorías de análisis, para dar cuenta al lector de la ruta conceptual que he seguido y las tensiones o disputas que hay alrededor de estas categorías y conceptos.

1.1. Un debate coyuntural: Colombia entre el enfoque territorial del acuerdo de paz y las múltiples visiones de la paz territorial

Reflexionar sobre la noción de paz territorial implica comprender que en ella subyacen por lo menos tres perspectivas que, aunque parten de la necesidad de un proyecto de paz que vincule las particularidades de los diversos contextos territoriales, son diferentes. *La política*, que hace alusión a las posibilidades administrativas y las disposiciones políticas dadas dentro de la negociación para hacer efectiva y sostenible la etapa de implementación del acuerdo, *la académica*, que da cuenta de las interpretaciones y construcciones realizadas por diversos actores sobre lo que es y lo que debería contener a esta noción, y *la práctica*, en la que están contenidas las acciones cotidianas de aquellos que habitan las diversas regiones del país y le han apostado desde su capacidad organizativa y de incidencia a construir escenarios de convivencia que posibiliten la perdurabilidad del proceso.

Considerando estas perspectivas (González, 2020) ha sugerido una distinción que se retomó aquí entre *enfoque territorial del acuerdo de paz* (perspectiva política) y *paz territorial* (categoría y práctica). Según este, el primero, tiene como objetivo la construcción e implementación de políticas y estrategias que consideren las características geográficas, culturales, económicas y sociales específicas de cada localidad, y así, adaptar las intervenciones estatales a las particularidades de la región, reconociendo que las problemáticas y soluciones no son uniformes en todo el país.

Por otra parte, al referirse al concepto de paz territorial, propone que este trasciende el mero reconocimiento de las diferencias territoriales sugeridas en el enfoque, y apuesta por una construcción dada desde la base, que implique la participación de las comunidades locales en el proceso de construcción de la paz, incidiendo en la definición y ejecución de políticas de paz y desarrollo, esta deberá incluir la participación comunitaria, la reconstrucción del tejido social y la descentralización del poder, con lo que se espera transformar las dinámicas históricas de exclusión

y violencia, promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible que asegure que el proceso de construcción de paz haga parte de todas las regiones del país (González, 2020).

Mientras el enfoque territorial es pensado e implementado de manera centralizada y de “arriba hacia abajo”, es decir, hace parte de la infraestructura política diseñada desde el gobierno, que aunque considera un acercamiento institucional diferenciado y reconoce las particularidades espaciales de las regiones y las localidades, sigue limitando la capacidad de incidencia de las comunidades que habitan esas territorialidades; la paz territorial se construye de “abajo hacia arriba”, a través de la autonomía y la capacidad de construcción de las comunidades locales. De esta manera, la paz territorial no solo aborda las causas subyacentes del conflicto, sino que también trabaja para crear una paz duradera y sentida por las comunidades, lo que permite que las políticas sean verdaderamente inclusivas, diferenciadas, situadas y transformadoras.

Durante los 4 años de negociación y los 8 de implementación que ha atravesado el acuerdo de paz en Colombia, se han dado múltiples descripciones y se han realizado diversas conceptualizaciones sobre lo que es y cómo es que se hace en la práctica la paz territorial. Ni siquiera en el marco del acuerdo, entre las partes en negociación, se logró construir un único significado, como lo evidencian los discursos dados por algunos de los representantes de la negociación, los cuales se presentarán aquí para ejemplificar las distintas comprensiones de esta noción. El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo expresó al referirse a esta que:

Se trata de construir un modelo que combine la implementación de programas de reconstrucción en los territorios con movilización ciudadana en espacios para procesos de discusión y planificación participativa; acortando la distancia entre el Estado y las comunidades en zonas de conflicto, y entre los miembros de la misma sociedad; y romper la desconfianza y forzar nuestras propias instituciones para responder mucho mejor... Esa podría ser nuestra definición de paz: canalizar conflictos a través de instituciones en todo el territorio nacional (Jaramillo 2016: 16).

Por su parte, para los entonces combatientes de las FARC-EP, la paz territorial, no era entendida como la posibilidad de que el Estado lograra político-administrativamente controlar los espacios que habían sido disputados por la fuerza ilegal en el marco del conflicto armado, sino aquella que permitiría reforzar los territorios y su relación directa y permanente con quienes los habitan, comunidades campesinas o étnicas especialmente, como lo sugirió Iván Márquez:

Nosotros, desde el mismo discurso de Oslo, propusimos la necesidad de un enfoque territorial para la dinámica rural, porque no se trata simplemente de la tierra como un elemento físico, debe incluirse las relaciones socioespaciales en el territorio, la integridad, esto es, los aspectos físicos que conforman el territorio y también las comunidades que construyen el territorio. Nuestra lucha fue por los territorios, por la defensa del campesino, territorios afro y étnicos (Jiménez, 2016:108).

Así, para el gobierno, la paz se construye a través de la materialización de infraestructura pública, esto es, haciendo presencia en esos territorios donde el poder había sido cooptado por otros actores, la paz es lograr, entre otras cosas, la instauración de políticas públicas y de instrumentos políticos y gubernamentales como comandos de policía, programas o proyectos institucionales, programas educativos, proyectos de desarrollo entre otros modelos de intervención; mientras que, para las FARC-EP, la paz territorial es (re) pensarse la relación con el territorio y la ruralidad. Esta visión espera la transformación de las zonas rurales, no sólo a través de la distribución de la tierra, sino del acceso a recursos materiales e inmateriales que aseguren el bienestar de estas comunidades.

En definitiva, la construcción de paz por supuesto supera, y no porque sea un asunto mínimo, sino porque en la práctica así ha acontecido, las visiones de paz y de paz territorial propuesta conceptualmente. Como lo sugiere Cairo: “quizás uno de los mejores calificativos desde los que abordar el alcance y significado del concepto de "paz territorial" sea el de difuso y/o polisémico. Pues, significa cosas diferentes para distintos actores políticos, en gran medida porque el acuerdo no limita su significado de forma específica” (Cairo et al., 2018: 5).

Sin embargo, para esta investigación, fue importante acercarse a las ideas que sobre esta noción se ha configurado en Mutatá, por los excombatientes, y también indagar sobre el componente socioespacial de esta, si lo tuviera, para lograr contrastar estas producciones académicas con lo que ocurre en las prácticas y discursos cotidianos en los espacios estudiados.

En la búsqueda de esta respuesta hallé en lo propuesto por el profesor Montoya (2023) una visión que le atribuye elementos espaciales a la comprensión de esta categoría. Según este autor, el enfoque territorial de paz ha incorporado una mirada desde el ordenamiento territorial que ha propuesto al problema de la tierra como raíz histórica del conflicto armado en Colombia, lo que permitió abrir una reflexión sobre las condiciones geográficas particulares de las regiones, en las dinámicas de guerra y ahora en la construcción de la paz, esto, como lo sugiere Cairo (2018) es una oportunidad de “volver” a imaginar la nación.

“Territorializar la paz” implica entender el conflicto armado colombiano desde una perspectiva territorial, es decir, reconocer que las características geográficas y las condiciones socioespaciales fueron determinantes en el desarrollo de la guerra. Además, implica visualizar la paz como una oportunidad para remodelar y reinterpretar estos lugares (Montoya, 2017).

Se trata pues de entender que la paz (y la guerra) están espacialmente constituidas y no se pueden entender al margen de los lugares en los que se desarrollan, y de las prácticas espaciales globales, más o menos rígidas o estructuradas, en las que se inscriben. (Cairo, 2019)

Teniendo en cuenta el papel del territorio y, por consiguiente, de la territorialidad en la promoción de la paz, se reconoció no solo la relevancia de analizar el ordenamiento territorial como una causa del conflicto armado, sino que también se abrió paso a la idea de imaginar geográficamente la paz, lo que implica la creación de espacios propicios para la unión, la justicia social y la igualdad (Montoya, 2021).

Sobre la relevancia de la territorialidad en la paz, aquí se retomarán algunos de los planteamientos que al respecto ha construido Peña (2019), y se hará hincapié también en la visión de construcción de paz y de “imaginación moral” de Lederach (2008).

Según Peña, la paz territorial implica “un proceso de restitución de las funciones colectivas del territorio, desarrollando acciones que emergen de la *imaginación moral* y la *imaginación geográfica* de las comunidades, que transforman el paisaje económico, la relación con la naturaleza, los sentidos de lugar y la estructura territorial en sí misma” (Peña, 2019: 21). En la misma vía, (Lederach, 2008), plantea a la imaginación moral como la base de la construcción de paz, pues es mediante esta capacidad, a saber, la de imaginar que se crea, diseña y construye lo imposible, por tanto, en medio del proceso que es construir paz, resulta indispensable preguntarse ¿qué es lo que hace posible que nos imaginemos una realidad que supera las condiciones agrestes impuestas por la guerra?

La imaginación moral requiere: la capacidad de imaginarnos en una red de relaciones que incluya a nuestros enemigos; la habilidad de alimentar una curiosidad contradictoria que abarque la complejidad sin depender de una polaridad dualista; una firme creencia y la búsqueda del acto creativo; y la aceptación del riesgo inherente a avanzar hacia el misterio de lo desconocido que está más allá del demasiado conocido paisaje de la violencia. (Lederach, 2007:29)

La construcción de paz requiere la apropiación y resignificación de esos espacios en los que acontecieron violencias, para producir colectiva e individualmente nuevas dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales. Es importante, en este punto precisar que, cuando se alude a la “resignificación” de aquellos espacios históricamente en guerra, va más allá de una prescripción jurídica o técnica, se hace alusión más bien a la capacidad más que estatal, social de entenderlos no como espacios físicos que posterior al acuerdo están vacíos y en disposición para ser cooptados por la institucionalidad, sino como escenarios que pueden ser transformados a través de prácticas sociales.

El hecho de que, en Colombia, los procesos de construcción de paz se estén configurando sobre lo que antes fueron territorios de guerra, permite observar que es a través de las prácticas sociales y cotidianas que se producen espacios y que las condiciones geográficas, sociales, económicas, culturales, políticas etc., tienen implicaciones en el tipo de relaciones que se construyen entre los grupos humanos y las condiciones geográficas de un espacio.

Peña propone la paz territorial bajo la relación entre la “imaginación moral” y la “imaginación geográfica”, de la cual surge el proyecto de paz que es territorial y colectivo, el cual, busca en esencia (re) apropiarse de un espacio geográfico, en el que se ha vaciado la guerra y en el que se quiere encontrar justicia, dignidad y buen vivir. Según este autor, “la búsqueda de la paz territorial transforma la espacialidad de la guerra y las violencias. Significa que el territorio, ese espacio de vida apropiado material y simbólicamente, vuelva a cumplir o cumpla por fin las funciones colectivas que ha perdido por causa del conflicto armado” (Peña, 2018: 20).

Lo que ocurre en los espacios a analizar, la NAR San José de León y el aETCR Mutatá, se relaciona con lo sugerido por Peña, en la medida en que ejemplifica cómo en regiones como Urabá, históricamente asociadas con la guerra, se han consolidado lugares para la transición a la luz del posacuerdo. En estos, han emergido nuevas relaciones entre los diversos actores presentes, como por ejemplo la de los excombatientes y la comunidad (antes guerrilleros y víctimas) que si bien no podría decirse aquí que hay hoy una reconstrucción total del tejido social, si han implicado la resignificación de las dinámicas y las relaciones entre los actores y el territorio y ha provocado la emergencia de nuevas territorialidades de paz que al sobreponerse al resto de dinámicas presentes en la región (cultural, económica, política, bélica, social, etc.) ha generado cambios locales, cotidianos, que han incidido poco a poco en la reconfiguración socioespacial.

Para Lederach la imaginación moral -IM- es “la capacidad de imaginar algo enraizado en los retos del mundo real, pero a la vez capaz de dar luz a aquello que todavía no existe” (Lederach, 2008). Según este autor, concurren cuatro aspectos que componen a la imaginación moral: las relaciones, la curiosidad paradójica, la creatividad y el riesgo.

Con las *relaciones* se refiere a tener la comprensión de que en los procesos de construcción de paz hay interdependencias que lo soportan. Implica visualizar la sociedad como una red en la que yo (individual o colectivamente) tengo la posibilidad de incidir porque hago parte de un todo, pero también, entendiendo que esa red tiene implicaciones en mí. Nada en el mundo existe como una entidad aislada o independiente.

La importancia de las relaciones en la construcción de la paz radica en su capacidad para desentrañar los vínculos de la violencia (Lederach, 2008). En este sentido, se ha identificado como un punto crucial que alimenta la imaginación moral: la habilidad tanto de individuos como de comunidades para concebirse a sí mismos dentro de una red de relaciones que, inevitablemente incluye incluso al enemigo. Esta perspectiva invita a comprender que estos procesos son el resultado de la convergencia de diversos actores, quienes, a través de sus tensiones y colaboraciones, tejen la red de interacciones e interdependencia que deben estar siempre en el radar de quienes realizan este tipo de investigaciones. La *curiosidad paradójica*, es la capacidad que se tiene a nivel individual y también colectivo de superar la visión dualista de los acontecimientos o realidades sociales. Lederach lo expresa así:

Es decir, la imaginación moral se construye sobre una calidad de interacción con la realidad que respeta la complejidad y se niega a caer en los forzados del dualismo (yo soy bueno ellos malos, yo tengo la verdad ellos no, yo soy víctima ellos victimarios, etc.), es decir, esta imaginación está imbuida de una curiosidad paradójica. (Lederach, 2008)

Así pues, se requiere de personas capaces de interactuar con una realidad que respeta la complejidad y se niega a caer en los forzados encajonamientos de las categorías, o es esto o es lo otro, a la vez que mantiene una curiosidad permanente por los que puede mantener unidas las partes.

Reconocer la complejidad dentro de estos procesos sociales no solo nos aleja de una postura simplista, en la cual la comprensión de cualquier evento social se basa en premisas "dualistas", sino que también, desde un punto de vista metodológico, nos incita a intentar descubrir la simplicidad dentro de esa complejidad. Entre la amalgama de elementos, la profundidad y la confusión que

caracterizan un conflicto, según Lederach, siempre existe una cuestión fundamentalmente simple. ¿Cuál es esa simplicidad subyacente en este conflicto?

Según este autor, *la creatividad* debe ser uno de los componentes clave en la construcción de paz. Este tipo de procesos no son lineales, esto es, no estamos en el punto A, nos dirigimos al B para llegar al C, no es de esa forma cómo funcionan las grandes transformaciones sociales. Para soportar esto, Lederach cita a Einstein quien al respecto planteó: “la lógica te llevará de A a B. La imaginación te llevará a todas partes”(Lederach, 2008), es así cómo se construye algo nuevo.

La capacidad de imaginar es fundamental para crear nuevos escenarios, esta vez orientados hacia la paz. Para Lederach, es crucial destacar que la imaginación en los procesos de construcción de paz debe incorporar elementos como el “disfrute”, el “goce” e incluso el “ocio” en la vida cotidiana. Es decir, estos procesos no se limitan a las mesas redondas donde se reúnen académicos, víctimas, victimarios y políticos, ni a las aulas donde se realizan investigaciones, o a los auditorios donde se llevan a cabo reuniones de planificación. La construcción de la paz también se manifiesta de manera significativa fuera de estos espacios, en las transiciones diarias y en los pequeños actos cotidianos, que en última instancia constituyen la base que sustentará la idea de una paz duradera.

Como cuarto elemento que constituye la IM, Lederach menciona la *voluntad de arriesgar*, esto es, de enfrentarse a lo desconocido e iniciar con la construcción de lo nuevo e incierto. El autor sugiere que, arriesgar es adentrarse en lo desconocido sin ninguna garantía de éxito ni de seguridad. Para quienes han vivido o viven en escenarios de conflicto armado, la violencia es lo conocido y la paz es el misterio, así pues, el riesgo es en todo caso la posibilidad de imaginar y construir una nueva y misteriosa realidad.

Son todos estos elementos, la reapropiación del espacio (Peña), las relaciones, la curiosidad, la complejidad y el riesgo (Lederach), claves analíticas que se convirtieron en líneas para la construcción de un propio sentido de la paz territorial y en rutas de búsqueda para la indagación. De los planteamientos hasta aquí explorados (González, Cairo, Montoya, Peña y Lederach) hay una línea que los transversaliza y es que, para todos, la categoría de paz territorial tiene sentido solo a través de las acciones que los diversos actores han puesto en práctica en pro de la construcción de formas de relacionarse y construir escenarios de convivencia y solidaridad.

Así pues, a este estudio lo transversalizaron conceptual y metodológicamente los siguientes interrogantes, ¿cómo se entiende? Y ¿cómo se está construyendo paz en la NAR San José de León y en el ETC Becuarandó? ¿De qué manera están los excombatientes imaginándose y construyendo

sus vidas por fuera de las dinámicas violentas? ¿Se están construyendo redes con los otros actores (comunidades aledañas, institucionalidad, organizaciones internacionales, etc.) para la generación de actos de creatividad que permitan el sostenimiento del proceso de reincorporación? y ¿De qué manera se han resignificado los espacios que se habitan y qué proyectos en pro de las funciones colectivas han configurado?

Las reflexiones que emergieron del análisis de los lugares transicionales objeto de estudio a la luz de los elementos antes sugeridos, han dado cuenta, en concordancia con lo sugerido por estos autores, que la paz y la territorialización de esta se construye a partir de las prácticas cotidianas de los actores que habitan un espacio específico, teniendo en cuenta sus propias fortalezas y necesidades, y no se trata solo de llevar a cabo un proyecto político en un contexto local, esto es, en términos de (González, 2020), no puede limitarse a la proyección de una implantación de políticas a nivel micro (enfoque territorial); en el proyecto de la paz territorial, es crucial garantizar la participación activa y la influencia de los actores locales en los procesos de construcción que deben ser inclusivos y representar genuinamente las necesidades y aspiraciones de los habitantes, asegurando que sus voces y experiencias sean integradas en cada etapa del camino hacia la paz.

Así pues, este es un proceso que implica como lo sugiere Cairo la *descentralización* del poder y el pensamiento. Permitir el fortalecimiento de las estructuras locales como las administraciones municipales y las organizaciones sociales y/o civiles, que son además las que más afectación han recibido de la dinámica del conflicto, para lograr la consolidación de un escenario ideal para abordar transformaciones estructurales y culturales mucho más profundas (Cairo et al., 2018).

Luego de haber realizado el análisis de estas perspectivas a la luz de los lugares transicionales aquí a estudiar (NAR San José de León y ETCR Becuarandó), resulta pertinente acotar, primero que, la noción de paz territorial que propone este trabajo da cuenta de una visión que supera a lo institucional o las políticas pensadas en el marco del enfoque territorial del acuerdo, es decir, aunque se vincula a lo que el acuerdo y algunos autores han referido, esta da cuenta en mayor medida a la construcción de un significado de paz que se está construyendo a diario, en la práctica en las regiones – en este caso en Mutatá-Antioquia- por los excombatientes, y en la capacidad de estos tejer relaciones con otros actores como las comunidades circundantes, la institucionalidad local, las organizaciones locales e internacionales que los rodean.

Así, para esta investigación la paz territorial es entendida más como una práctica que como categoría o una política. Ésta vincula la potencia de las redes sociales, la capacidad de imaginarse formas distintas a las de la guerra de habitar los territorios y la posibilidad de concretarlo mediante la generación de dinámicas no violentas, que implican la resignificación, apropiación y producción de nuevos espacios, así como las relaciones de solidaridad con otros grupos sociales. Que responde a la posibilidad de que los diversos actores (comunitarios, institucionales, excombatientes, empresariales, internacionales, etc.) situados en un contexto particular, en este caso en Mutatá, logren en el marco del posacuerdo: primero, la reapropiación del territorio que habitan, segundo, la reconstrucción del tejido social, que incluye a los excombatientes, y tercero, la gestión de procesos que lleven a la identificación de las necesidades y también las potencias propias del contexto que habita, es decir, que a partir de las realidades sociales, espaciales, culturales, económicas, políticas, etc., específicas de cada lugar se logre la materialización de procesos que aporten a la vida en convivencia y con ello al sostenimiento de una paz duradera.

La conexión entre las prácticas de paz y las posibilidades y necesidades propias de cada región radica en asumir los retos de transformar las relaciones entre los actores y la forma en que se habita el territorio. En el caso específico de Urabá y Mutatá, esto implica pasar de entender esta región por sus características geográficas, que favorecen la guerra, a reconocerlas como lugares donde se puede construir una vida en convivencia. Este cambio de perspectiva es lo que territorializa la paz. Son prácticas y realidades que están construyéndose desde la base, que está sucediendo a pequeña escala, que se sostiene en los excombatientes y en las comunidades que los acoge y no en los discursos retóricos o en las ideas institucionales y verticalizadas expuestas en el marco de la firma del AFP.

1.2. Los “lugares transicionales” una estrategia del acuerdo de paz

De la firma del acuerdo en Colombia derivó la esperanza de una nación en condiciones distintas, lo que implicó pensarse en escenarios transicionales que permitieran dejar “atrás” el conflicto e iniciar en una “nueva” realidad, la de la paz. Sin embargo, esta visión del tiempo y la naturaleza de los procesos lineales distorsiona la complejidad propia de categorías como *memoria*, *reparación*, *verdad* y *reconciliación*. Estas aparecen como parte de la promesa de un futuro que desconoce el pasado violento que antecede este momento histórico, y la existencia de un conflicto

que persiste hoy en distintas formas y niveles debido a la reconfiguración dada por la aparición de nuevos actores, la permanencia de los negocios ilícitos, el avance de economías extractivas que socavan los modos de vida de las comunidades locales, etc.

En este sentido, resulta importante proponer una visión de la implementación del acuerdo de paz y lo transicional, tanto práctica como discursivamente, que sea crítica y que esté basada en el supuesto de la existencia de unas “viejas nuevas violencias” (Castillejo, 2017).

De la importancia del concepto “*transición*” para analizar el proceso de reincorporación que viven los excombatientes de las FARC-EP en Colombia, derivó otra de las categorías analíticas propuestas en esta investigación: los *lugares transicionales*. Su formulación ha partido de lo planteado por Castillejo (Castillejo, 2017) sobre los escenarios transicionales, según el cual:

Hablar de “escenario transicional” es hacer referencia a los espacios sociales (y sus dispositivos legales, geográficos, productivos, imaginarios y sensoriales) que se gestan como producto de la aplicación de leyes de unidad nacional y reconciliación, y que se caracterizan por una serie de ensambles de prácticas institucionales, conocimientos expertos y discursos globales que se entrecruzan en un contexto histórico concreto con el objeto de enfrentar graves violaciones a los derechos humanos y otras modalidades de violencia. (Castillejo, 2017:25)

Según este autor, el "escenario transicional" es un marco diseñado para manejar la incertidumbre y se desarrolla a través de tres fases principales. La primera fase es lo inimaginable: el encuentro entre antiguos adversarios, la construcción de nuevas confianzas, el posible arrepentimiento y la disposición para enfrentar las devastadoras consecuencias de la guerra. La segunda fase, denominada lo posible, introduce la idea de lo transicional y contempla la potencialidad del futuro y las nuevas formas de sociabilidad. Esto se refiere, por ejemplo, a los detalles del acuerdo para la implementación que, aunque cuestionable, estableció un marco de lo que era posible. Por último, Castillejo propone lo realizable, que abarca aquello que puede llevarse a cabo tanto política como socialmente (Castillejo, 2017).

En el marco de un proceso de paz, se producen movimientos a nivel moral, ético y material que, para una sociedad como la colombiana, sujeta a realidades tan conflictivas, parecen imposibles de imaginar. Durante la consolidación y firma de un acuerdo se establece lo posible a nivel político, social y económico. En la fase de implementación, surge lo realizable, aquello que ha sido posible materializar, que se ha ejecutado en pro de viabilizar el posacuerdo; es la puesta en marcha de lo

que se ha denominado por Castillejo como *infraestructura de la paz*, entre lo que se encuentran los que acá denomino *lugares transicionales*.

En ese sentido, “lo transicional, más allá de un lenguaje formalizado y codificado que constituye el campo hegemónico de la Justicia Transicional, hace referencia un fenómeno cultural y social en la medida en que las categorías que constituyen el mundo o las categorías en las que lo habitamos se derrumban para producir otras. Y nuevas socialidades emergen” (Castillejo, 2021:2) Así pues, lo que ocurre cotidianamente en estos lugares transicionales, esta entre lo que el autor ha planteado como *lo posible y lo realizable*. Es allí donde se están imaginando y construyendo esas nuevas realidades para la vida de los excombatientes, que, implica un desmonte en la naturalización del *cuerpo*, el *espacio* y en el *lenguaje* como herramientas que eran para la guerra, y la configuración de nuevas socialidades (Castillejo, 2021).

Castillejo, amplía dicha idea al argumentar que, lo nominal se refiere a la manera en que las categorías y los términos utilizados en los discursos transicionales configuran la comprensión y la interpretación de la realidad postconflicto. Lo espacial se relaciona con la reconfiguración de los espacios físicos y simbólicos que acompañan a los procesos de transición, destacando cómo estos espacios son transformados y resignificados por las nuevas dinámicas sociales y políticas. Por último, lo corporal implica una atención a los cuerpos de los individuos afectados por la violencia y el conflicto, enfatizando cómo las experiencias físicas y emocionales son centrales para entender las transiciones hacia nuevas formas de socialidad. Subraya que estos tres elementos están profundamente entrelazados y son fundamentales para comprender la complejidad y las múltiples dimensiones de los procesos transicionales.

La NAR de San José de León y el ETCR Mutatá (Becuarandó), hacen parte de las infraestructuras dispuestas para la administración de la incertidumbre (Castillejo, 2021), allí se han dado nuevas *corporalidades*, esto es, han ocurrido transformaciones en los cuerpos de los excombatientes debido a la nueva realidad que los ha alejado del entrenamiento, las extensas caminadas, y el movimiento continuo que les implicó estar en la guerra, a los cuerpos femeninos los ha atravesado la maternidad, que les ha posibilitado no solo la gestación sino la posibilidad de amamantar y criar a sus hijos e hijas. También se han transformado las *espacialidades*, de ello da cuenta la conformación de estos lugares transicionales, la construcción de viviendas y el sentido de lugar que se ha configurado allí; existen formas nuevas de *nominación*, empezando por el cambio identitario y político que alberga el hecho de auto nominarse con la categoría jurídica de

excombatiente o firmante de paz, y no más como guerrillero, camarada, comándante, etc. Han cambiado las formas de nombrar y dirigirse a otros actores (comunidades e institucionales) y han regresado a enunciar sus nombres de nacimiento y no sólo o exclusivamente los usados en combate.

Ahora, en concreto, aquí, esta NAR y el aETCR serán entendidos como *lugares transicionales*, partiendo de la categoría de escenarios transicionales de Castillejo, esto es, que son marcos en los que se instala toda una infraestructura material, simbólica e institucional para posibilitar la transición hacia la vida civil de los excombatientes y de la noción de *lugar* construida por Doreen Massey, quien plantea que: “Los lugares pueden ser imaginados como articulaciones particulares de estas relaciones sociales, incluyendo las relaciones locales dentro del lugar y las muchas conexiones que se extienden más allá del mismo. Y todas estas embebidas en complejas y estratificadas historias” (Massey, 1994:18)³, esto es, de una perspectiva dinámica en la que se reconoce que los lugares son nodos en una red de relaciones que se extienden más allá de sus fronteras geográficas inmediatas, en los que se integran influencias y flujos (locales y globales) que los hace configurarse y reconfigurarse de manera constante.

Según esta, el espacio se concibe como un ámbito donde coexisten múltiples narrativas, resultado de relaciones sociales impregnadas de poder. Esta perspectiva destaca la construcción social del espacio y su inevitabilidad de estar permeado por dinámicas de poder. El lugar se entiende como un espacio abierto, poroso y híbrido, donde se encuentran y entrelazan diferentes historias. Así que, la singularidad de un lugar no proviene de sus orígenes míticos o su aislamiento histórico, sino de la singular combinación de influencias que convergen en él, forjando su identidad única.

San José de León y Becuarandó, han servido como nodos de conexión, en estos se encuentran diversas prácticas sociales que los ha nutrido de complejidad pero que ha servido como base para la construcción de un sentido de apropiación e identidad. Como se verá, y en concordancia con lo expuesto por Massey, estos son lugares plurales, dinámicos, en los que coexisten múltiples voces y experiencias y en los que ha sido clave para su constitución y duración la interconexión con actores y dinámicas externas, nacionales e incluso globales.

Estos lugares transicionales, fueron construidos en el marco del AFP con el objetivo de facilitar el tránsito hacia la vida civil de los excombatientes, en los que se han dispuesto infraestructuras (materiales y sociales) para posibilitar el proceso de reincorporación. Durante el

proceso de implementación llevado a cabo hasta la actualidad, estos se han ido transformando. Inicialmente, fueron concebidos como puntos de concentración (previos a la dejación formal de armas), que luego se denominaron Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y, posteriormente y hasta la actualidad son concebidos como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y Nuevas Áreas de Reincorporación. Estos han sido construidos en contextos estratégicos que han determinado tanto las posibilidades como las limitaciones de esta idea de paz territorial. La selección de los lugares para la reincorporación ha estado influenciada por una idea territorial de la guerra. Determinar su ubicación implicó garantizar la permanencia de los excombatientes en un país que, aunque está dejando atrás el conflicto histórico entre las FARC-EP y el Estado, sigue enfrentando conflictividades económicas y políticas con otros actores.

Según lo planteado por Ñoño, excombatiente entrevistado en el marco de esta investigación en febrero de 2024, la definición de los ETCR se dio bajo las siguientes consideraciones. En primer lugar, se decidió ubicarlos en zonas “conocidas”, es decir, áreas que habían formado parte de la vida pasada de los excombatientes, que habían sido transitadas por ellos y donde reconocían la dinámica bélica, social, política y económica.

En segundo lugar, siguiendo las dinámicas de guerra. Estos lugares fueron seleccionados tomando en cuenta las condiciones sociales. Esto implicó prever que las comunidades circundantes permitieran la incorporación de esta población a la dinámica territorial, que las autoridades municipales e incluso departamentales estuvieran dispuestas técnica y políticamente para recibirlos, y que la dinámica bélica que persiste hoy en Colombia, especialmente en esas regiones rurales, con la presencia de otros actores armados, permitiera la instalación de estas infraestructuras. Todo esto con el entendimiento de la reconfiguración socioespacial que iba a implicar la llegada de “la paz”.

Estos lugares transicionales son infraestructuras creadas para la paz, en donde puede identificarse lo realizable del AFP. Allí pueden observarse las tensiones entre las fuerzas ejercidas por la institucionalidad, en este caso representados en los funcionarios de la ARN, la alcaldía de Mutatá, en los procedimientos legales que acompañan al proceso de reincorporación etc., y las divisiones sociales, los opositores al proceso de paz, las injusticias ocultas y las dificultades de llevar a cabo todo lo que en el acuerdo fue establecido como posible. En este tipo de lugares, aparece lo realizable, que “es, en esencia, un arreglo de complejidades diarias” (Castillejo, 2021, p. 4).

Al interior de estos lugares en particular, puede advertirse la liminalidad referida por Castillejo. En ellos, es tangible el momento de transición en el que se encuentran los excombatientes, quienes no han abandonado completamente el estado anterior, y no han asumido totalmente el nuevo, situación que los mantiene en un estado de incertidumbre, de ambigüedad entre la separación de la guerra y la integración de la paz (Castillejo, 2021).

Dentro de estos lugares se dan transformaciones cotidianas que han contribuido a la construcción de un sentido de pertenencia, de una nueva identidad, de unas redes sociales que responden a diario a los retos del posacuerdo. En su interior se dan cotidianamente múltiples transiciones políticas, emocionales, económicas, familiares, gastronómicas, sociales, etc. que hacen virar lo que allí acontece entre lo posible y lo realizable, situando a estos lugares transicionales en un espacio intermedio donde ocurre la verdadera transformación.

En últimas, la transaccionalidad de estos lugares debe ser entendida como una “yuxtaposición” de encuentro y desencuentro de discursos, conceptos, procedimientos, prácticas, marcos jurídicos y normativos establecidos globalmente (por parte del Estado y la cooperación internacional), y su puesta en marcha en contextos locales a través de instituciones, burocracias y dispositivos que son asumidos, adaptados, cuestionados, modificados y/o rechazados en la experiencia social por quienes son “objeto” de los mismos.

1.3. La emergencia de nuevas territorialidades de paz y su incidencia en la reconfiguración socioespacial a nivel local

Según García y Aramburo (2011), una territorialidad es una realidad histórica configurada por grupos sociales y culturales en determinado espacio geográfico. Allí, se materializan las formas de representación y prácticas sociales y políticas en relación con el espacio. Ahora, no existe una única territorialidad, sino múltiples, estas en un mismo espacio han marcado fronteras y diferencias territoriales sin que esto quiera decir que internamente sean homogéneas, toda vez que, las comportan divergencias y disensos intrínsecos (entre generaciones, clases, géneros y entre interpretaciones sobre lo que originan estos conflictos), que son los factores que impulsan la reinvencción de las territorialidades. De acuerdo con las tres claves elegidas de Soja y Sack, citados por García y Aramburo:

Las territorialidades son aquellos espacios donde se puede identificar: 1. un “sentimiento de pertenencia a una porción particular de tierra sobre la que se tienen derechos exclusivos”; 2. un “modo de comportamiento en el interior de esa entidad”; y 3. “una conducta humana que intenta influir, afectar o controlar acciones mediante el establecimiento de un control sobre un área geográfica específica: el territorio” (García et al., 2011: 282).

Esta perspectiva de la territorialidad, primero, prescinde de la noción tradicional del Estado soberano que desconoce la multiculturalidad y que se gesta en la visión de una nación homogénea. Segundo, liga la diversidad de la cultura con las particulares circunstancias de lugar, modo y tiempo desde donde hablan, piensan e interactúan los grupos poblacionales, y, por último, rechaza el determinismo geográfico, es decir, comprende que desde la cultura se producen propias espacialidades.

Existen pues en un mismo espacio diversos tipos de territorialidades, para seguir a García y Aramburo, en Urabá se encuentran las socioculturales (étnicas, urbanas, de acaparamiento, etc.), institucionales, bélicas y de paz. Sobre las características de cada una de estas se hablará más adelante, en este apartado, vale la pena detenerse en las denominadas como: *territorialidades de paz*, las cuales son entendidas como una configuración socioespacial en la que se espacializan acciones y procesos concretos, donde se promueve la reconciliación, se fomenta la convivencia pacífica, se reconstruyen los lazos comunes como resultado de procesos de resistencia civil, frente a las condiciones violentas de los contextos donde opera el conflicto armado. Son procesos que parten de la autonomía, la autoorganización y la construcción de identidades por parte de los ciudadanos y han tenido como objetivo la reconstrucción del tejido social en contextos donde la guerra lo ha debilitado (García et al., 2011).

Por lo general, en el contexto colombiano, la aparición de estas territorialidades de paz ha sido consolidadas por procesos civiles, que en el marco del conflicto debieron reconfigurar las formas organizativas para defender el derecho a la vida y al trabajo, la titulación de tierras, la paz de los territorios, el cese de proyectos extractivistas, la provisión de comida, la atención de la salud, el mejoramiento de las condiciones de vida en general, el desbloqueo económico de las zonas, etc. (García et al., 2011).

En los años 90 del siglo XX, en Urabá estas territorialidades de paz implicaron cambios en la concepción del territorio, creando comunidades de paz⁴ y zonas humanitarias⁵ como excepciones en la generalidad bélica de la región. En la actualidad, algo similar ha sucedido con la configuración de estos lugares transicionales, donde los excombatientes han emprendido un proceso de reincorporación, que de muchas formas ha significado resistirse a la posibilidad de regresar a la guerra y los esfuerzos por reconstruir las relaciones sociales con sus familias, las comunidades vecinas, los actores institucionales, entre otras cosas.

En el punto 3.2.2: Reincorporación económica y social de AFP, se definió la creación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización -ZVTN- y Puntos Transitorios de Normalización-PTN- (a partir de 2017 denominados Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación), como una estrategia para garantizar el cese al fuego y de hostilidades bilaterales, y la dejación de las armas definitivamente, además por supuesto con el objetivo de dar inicio allí al proceso de preparación para la reincorporación. Este proceso de reincorporación -en lo político, lo social y lo económico- busca facilitar la transformación de las FARC-EP y sus integrantes en actores dentro del sistema democrático y en general el tránsito a la vida civil.

Según la Agencia para la Reincorporación y Normalización -ARN-, la reincorporación es un proceso que busca estabilizar socioeconómicamente a los firmantes del acuerdo de paz que entregaron sus armas. El gobierno de Colombia se ha comprometido a implementar el acuerdo con un enfoque colectivo y rural, con el objetivo de que los exmiembros de las FARC-EP alcancen la inmersión en la vida civil. Además, buscan fortalecer la convivencia, la reconciliación, el desarrollo de actividades productivas y el tejido social en las regiones afectadas. Para garantizar el enfoque co-construido, todas las acciones de reincorporación se planifican y acuerdan de manera conjunta, principalmente a través del Consejo Nacional de Reincorporación -CNR-.

En este sentido, la instalación de San José de León y Becuarandó y la idea de reincorporación que los sostiene, parte de las acciones dadas en estos lugares transicionales, que han producido una nueva forma de relacionarse con el espacio; la consolidación de otras formas de vincularse con los demás actores presentes en la región, la aparición de una dinámica propia,

⁴ En la propuesta de comunidad de paz es la comunidad la que determina ser neutral y no declarar el territorio como neutra dada la imposibilidad de sus pobladores de controlar situaciones externas a ella (García et al., 2011).

⁵ En las zonas humanitarias, las comunidades son las que delimitan un territorio para dejarlo libre de la guerra y expresar así su deseo de apartarse de ésta. Estos procesos están guiados por principios transversales de lucha por el territorio, autodeterminación, exclusión del conflicto armado, independencia frente a las partes enfrentadas y negativa a colaborar con alguna de ellas (García et al., 2011).

configurada alrededor de la idea de construir paz; y, además, la posibilidad de incidir sobre la dinámica territorial, aspectos que derivan, según lo antes planteado por (García y Aramburo, 2011) en la configuración de una nueva territorialidad de paz. Es clave advertir que, estas se han instalado en un espacio complejo en el que históricamente confluyen otros tipos de territorialidades (socioculturales, bélicas, acaparamiento, institucionales, económicas, etc.) con las que se encuentran hoy en relaciones de tensión, cooperación y en todo caso de superposición.

La emergencia de estas espacialidades y la superposición que implica su instauración en Mutatá con los otros tipos de territorialidades, y por supuesto con los actores que las producen, ha implicado sin duda, modificaciones en las dinámicas económicas, sociales y políticas, que en este caso se han dado a escala local. Estas transformaciones, son lo que en esta investigación se entiende como *reconfiguración socioespacial a nivel local*, una categoría, asociada directamente a la emergencia de una nueva territorialidad, en la medida en que los cambios producidos en la dinámica municipal o veredal se deben no solo a la aparición de nuevos actores en la región sino a los procesos de asentamiento, apropiación, identificación y producción del espacio que emergen de ellos.

En la práctica, la incorporación de estos lugares transicionales en Mutatá ha implicado no solo la producción de nuevos espacios sino también la resignificación de los mismos, no solo por parte de quienes tenían una lectura geográfica de esta región desde la guerra y ahora como el lugar en el que puede construirse una vida civil, sino también para las comunidades aledañas quienes han encontrado en la llegada de estos la posibilidad de restablecer las relaciones con estos y pensarse nuevamente en dinámicas organizativas en donde habitan; en otros casos, ha implicado la reacción violenta por parte de actores armados que han entendido como amenazante para su dominio territorial la llegada de excombatientes de las FACR-EP y de la institucionalidad que acompaña estos procesos de reincorporación y/o ha sido vista como la posibilidad político-administrativa de llenar espacios que se concebían por fuera del control institucional, en definitiva, todos estos, son movimientos que no solo representan reacomodaciones a nivel espacial, sino sobre todo nuevas formas de relacionarse en tensión y cooperación entre quienes habitan un mismo territorio, implicando así reconfiguraciones socioespaciales a nivel local.

Así pues, la emergencia de una nueva territorialidad implica necesariamente la resignificación y construcción de nuevos espacios, que respondan a sus necesidades, y en los que se creen lazos identitarios con el territorio. García y Aramburo señalaron que:

Ese proceso paulatino de asentamiento, apropiación, identificación y producción del espacio construyó sentimientos de identidad, mostró diferentes formas de instalación de los pobladores de cada oleada colonizadora, forzó la definición de comportamientos para el entendimiento entre grupos diferentes y formas de control sobre áreas geográficas específicas. Todos estos elementos fueron diseñando distintas territorialidades (García et al., 2011: 279).

En el marco de la implementación del AFP, específicamente con el proceso de reincorporación en Mutatá se dio el *asentamiento* de excombatientes y sus familias, que ha significado una *apropiación e identificación*, asuntos que se ampliarán en el capítulo 3, en el que se analiza cómo, el proceso transicional que sostiene a la reincorporación ha estado atravesado por el re-conocimiento y la apropiación de nuevas formas de habitar esta región en particular, además de cómo se ha sostenido la identidad de excombatientes, como un asunto que jurídicamente los mantiene dentro del proceso y que a nivel social les ha permitido permanecer en una idea de colectividad.

Por supuesto, que existe tanto desde una perspectiva material y tangible como desde las construcciones sociales, una *producción de espacio*. La existencia de estos lugares transicionales implicó, en términos de Castillejo, la disposición de una infraestructura para la paz, que va desde la construcción de viviendas, vías, escuelas, la conectividad a servicios públicos y sociales, es decir, el acondicionamiento de los espacios en términos de habitabilidad, hasta la estructuración de procesos de acompañamiento que han permitido la transición a nivel económico, político, social y emocional de los excombatientes hacia la vida sin armas, cuestión que ha implicado el esfuerzo institucional por proveer un acompañamiento.

Así pues, no sólo se han producido lugares con unas dinámicas sociales particulares, sino que, además, estos han entrado en relación con los otros actores y las realidades propias del contexto (Urabá, Mutatá, La Fortuna), lo cual ha implicado la emergencia de una nueva territorialidad y con esta una reconfiguración socioespacial, en la medida en que ha modificado las formas de producir el territorio y de identificarse con él.

Vale la pena destacar que el concepto de "*territorialidades*", desarrollado por García y Aramburo, proviene de un análisis socioespacial de Urabá realizado hasta la primera década del siglo XXI. Sin embargo, en este trabajo, ha servido, primero, como recurso principal para

comprender la región entre 1960 y 2011, y, segundo, como un referente para consolidar la idea de territorialidades de paz, abordada aquí a partir de la realidad actual de estos lugares transicionales.

Analizarlos desde la perspectiva de estas autoras permitió analíticamente generar reflexiones articuladas y revelar al lector la importancia, por un lado, de comprender la particularidad y diversidad de los actores presentes en un determinado lugar. De otro lado, comprender que son las relaciones entre estos actores las que configuran los espacios, pues, aunque existen distintas “territorialidades” que han establecido límites que las diferencian unas de las otras, en la práctica, estas se encuentran en constante interconexión, interdependencia e incluso superposición, lo que genera relaciones de tensiones y cooperación que van transformándose con el tiempo y con la variación misma que acontece dentro de las territorialidades.

A partir de esta base conceptual, en torno a la cual giran las reflexiones de esta investigación, se presenta la ruta metodológica, esto es, a la descripción de los procedimientos y técnicas que utilicé para construir y analizar los datos, con el fin de responder a las preguntas de investigación y alcanzar los objetivos propuestos.

1.4. El estudio de caso: un enfoque cualitativo para comprender la configuración de los lugares transicionales en Mutatá

La etnografía, desde lejos (desde una politóloga como yo) implica una inmersión a profundidad en el tema de estudio, que hacía más retadora, profunda y “completa” la forma de investigar. Pasar semanas seguidas en cada uno de estos lugares transicionales, lograr observar de primera mano las dinámicas cotidianas que los atraviesa, encontrar en charlas nocturnas, quizás, la conceptualización perfecta de la paz territorial, y percibir en los encuentros entre excombatientes, comunidades e institucionalidad las reconfiguraciones socioespaciales que se están dando en La Fortuna y en Mutatá, en fin, estar ahí de forma permanente durante unos meses, y lograr luego, de las muchas notas tomadas en mi diario de campo las líneas claves para el despliegue del entramado analítico y reflexivo de esta tesis. Así pensé y planteé inicialmente realizar esta investigación, como un trabajo etnográfico. La etnografía, es un enfoque de investigación cualitativo usado para estudiar y comprender las culturas y comunidades humanas, mediante la implementación predominante de la observación directa y la participación en la vida cotidiana de un grupo de personas determinado (Hammersley & Atkinson, 2007).

Esto, basada en la relevancia que para esta investigación tuvo desde su concepción el trabajo en campo, y el relacionamiento directo con las comunidades objeto de estudio, en este caso, los excombatientes de las FARC-EP asentados en Mutatá, un acercamiento que permitiría la aplicación de entrevistas, los recorridos de observación y la construcción conjunta de mapeos; técnicas de construcción de información que me permitirían la comprensión de las prácticas cotidianas; del *relacionamiento* de estos con los otros actores presentes en el municipio (institucionales, comunitarios, etc.), y de la producción de unas nuevas espacialidades y su incidencia o no en la reconfiguración de las territorialidades bélicas presentes aún hoy en este municipio.

Aunque todas estas técnicas para la investigación hicieron parte de la elaboración de este informe, mi inmersión en campo, esto es, mis estadías en Becuarandó y San José de León no fueron tan extensas como lo deseaba. Esto se debió a las posibilidades de mi ser como investigadora, a los alcances de esta investigación (materiales y temporales) e incluso a las disposiciones de quienes habitan esos lugares transicionales. Debido a ello, aunque realicé varias visitas, mi estadía al interior de estos, fueron cortas.

Las realidades económicas que sostienen este tipo de investigaciones cuando se realizan con recursos propios, las limitaciones en tiempo, tanto de los períodos propuestos por los calendarios de los programas académicos, como los tiempos de dedicación posibles para quien no está abocado exclusivamente al ejercicio de investigar, la distancia entre Medellín (lugar en el que resido) y Mutatá (donde se ubican los lugares), las dinámicas propias de los lugares en los que no siempre se está en disposición de recibir a una estudiante, la situación de orden público de la región, entre otras, son algunas de las variables que limitaron el desarrollo de un ejercicio etnográfico como se concibió durante la formulación del proyecto de investigación.

Fueron apareciendo, de forma orgánica y como un resultado propio de este proceso, algunas transformaciones en esa pretensión metodológica inicial. Aunque continué, por supuesto, implementando técnicas propias de una metodología de investigación cualitativa, en la que se diseñaron y aplicaron entrevistas semiestructuradas, recorridos de observación, y la revisión de fuentes documentales, como herramientas claves para explorar los lugares transicionales dentro de su contexto real, y comprender las particularidades, dinámicas y complejidades de estos lugares y su incidencia en las transformaciones de su entorno, esta investigación dejó de ser una etnografía para convertirse en un estudio de caso.

Para comprender lo que se entiende aquí por estudio de caso, se retomó a (Yin, 1994), el cual plantea que, los estudios de caso hacen parte de las metodologías del enfoque cualitativo, por lo que, son ampliamente utilizados en las ciencias sociales para examinar fenómenos contemporáneos dentro de su contexto, pues permiten abordar preguntas sobre estos de tipo “cómo” y “por qué”. Textualmente, Yin comenta:

Estas son investigaciones empíricas que estudian un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos” (Yin, 1994:13).

Yin considera que el estudio de caso es particularmente apropiado para temas prácticamente nuevos y destaca que, en estos, además de examinar fenómenos contemporáneos en su entorno real, las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes, se usa para estos estudios la consulta de múltiples fuentes de datos, y estos pueden abarcar un caso único o múltiples casos.

Sobre esto último, el mismo autor sugiere que los estudios de caso pueden abordar el fenómeno desde diferentes configuraciones de unidades de análisis, los estudios de caso(s) pueden ser simples o múltiples, dependiendo del número de casos que se vaya a estudiar. Sin embargo, Yin (1989:28) propone una tipología que establece cuatro tipos básicos, dependiendo del número de casos y de los diferentes niveles de análisis. Así, se identifica:

- Caso único o unidad de análisis.
- Caso único con unidad principal y una o más subunidades.
- Casos múltiples con unidad principal de análisis.
- Casos múltiples con unidad principal y una o más subunidades dentro de la principal.

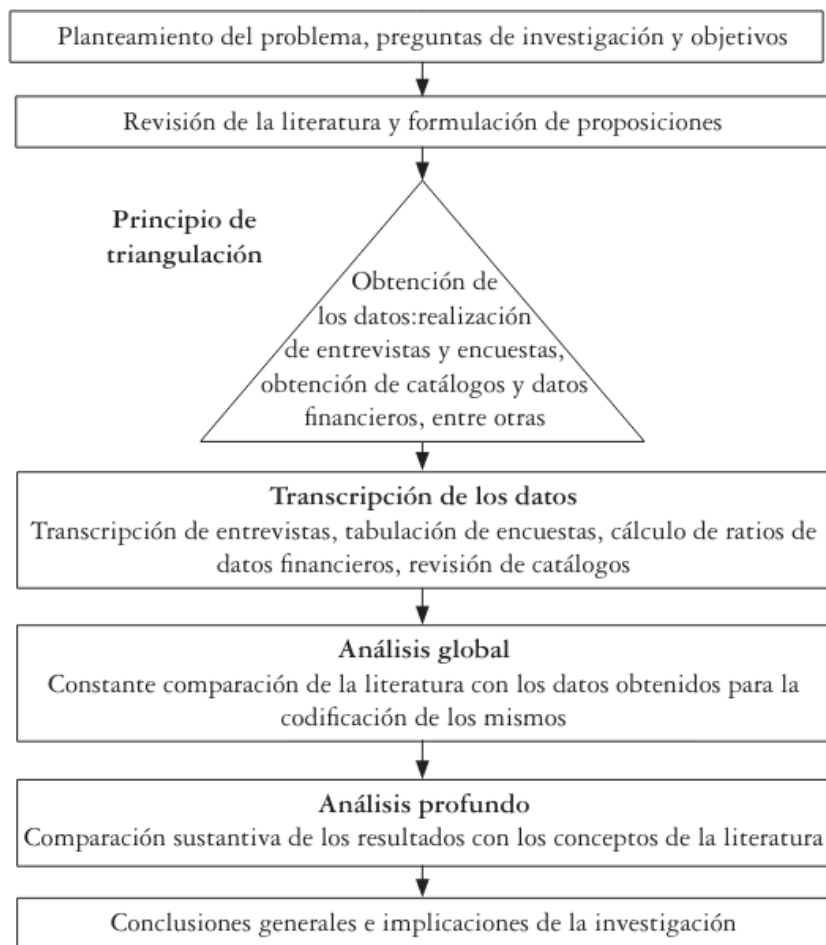
En cuanto a la forma de construir información, en el marco de un estudio de este tipo, (Yin, 1989) sugiere emplear diversas fuentes de datos y adherirse al principio de triangulación para asegurar la validez interna de la investigación. Este enfoque permite comprobar si los datos

recopilados de distintas fuentes están interrelacionados, es decir, si las diversas perspectivas coinciden en los efectos observados en el fenómeno estudiado. Por lo tanto, el investigador puede utilizar múltiples fuentes de información, como bases de datos, internet, entrevistas con expertos en el área, organismos públicos o privados, así como documentos y estadísticas relevantes al fenómeno investigado.

(Martínez, 2007), quien retoma los postulados de Yin, realiza además un despliegue del paso a paso seguido en el proceso metodológico propio de una investigación de estudio de caso, el cual resulta apropiado traer a colación. (Ver Figura 1)

Figura 1

Procedimiento metodológico de la investigación



Fuente: elaboración propia, basada en Shaw (1999:65).

Nota: Fuente: tomado de Cristina Martínez, 2007

Considerando lo planteado por Yin y la ruta propuesta por Martínez, metodológicamente es claro que esta investigación desarrolló un estudio de caso, primero, porque es este el estudio de una realidad contemporánea, segundo porque se ha definido como objeto de análisis a dos lugares transicionales concretos que fungen como casos múltiples con unidad principal de análisis, pues, la NAR san José de León y el ETCR Mutatá son cada uno un caso diferente, aunque cada uno es considerado como una unidad principal.

Tercero, porque implicó la triangulación de fuentes de información para la generación de un análisis no solo descriptivo sino también explicativo, y cuarto porque siguió la ruta de análisis de datos que se ha propuesto para este tipo de metodología, es decir, durante el proceso de consolidación de este estudio se realizó un planteamiento del problema en el que se estableció el tema a trabajar, la localización de los casos, las preguntas de investigación que guiarían el análisis y los objetivos a desarrollar. Además, se llevó a cabo la revisión de literatura relacionada con el tema, los lugares transicionales y las categorías de análisis definidas y se construyeron reflexiones a partir de la aplicación de herramientas de investigación como (entrevistas y recorridos de observación). Posterior a esto se dio un proceso de sistematización de la información y un análisis que permitió la emergencia de unas conclusiones.

A continuación, se amplía más sobre los principales momentos metodológicos de esta investigación.

- La construcción de información.

En el momento denominado como de construcción de la información, la revisión documental (libros, artículos, investigaciones, etc.) ocupó un lugar de relevancia, pues desde allí se fundamentó teórica y conceptualmente esta investigación. Para esto se consultaron bases de datos digitales tales como: el OPAC de la Universidad de Antioquia, la biblioteca digital Universidad Nacional de Colombia (SINAB), Scopus, Science direct, además de referencias directas realizadas en los diversos espacios académicos a los que asistí durante este tiempo (clases, asesorías, coloquios, etc.), en las que se encontraron 20.000 resultados entre artículos de revista, libros, investigaciones de ONG y universidades, tesis, además de una gran cantidad de producciones audiovisuales (cortometrajes, largometrajes, guiones, documentales, películas, etc.).

Ante esta gran cantidad de información, definí centrarme en aquellos textos que, 1) abordan el conflicto armado y se centran en el caso particular del Urabá antioqueño, 2) conceptualizan, analizan y/o problematizan alguna o varias de las categorías de análisis definidas antes y 3) refieren información sobre los dos casos específicos a analizar (NAR San José de León y Becuarandó), esta definición temática fue una estrategia metodológica que permitió la reducción de la cantidad de información a consultar.

Igualmente, fue importante la construcción de información por medio de la observación de las prácticas espaciales y dinámicas de los excombatientes en los lugares transicionales, y las interlocuciones con actores como excombatientes, comunidad aledaña, profesionales de la Alcaldía Municipal de Mutatá, profesionales de la ARN, de la organización Juntos Construyendo Futuro y del Instituto Kroc, mediante la aplicación de las entrevistas semiestructuradas y las conversaciones informales. Para esto, realicé varias visitas a estos lugares, que implicaron el establecimiento de contactos claves en la región, en lo que ayudó de forma especial la red académica del INER y de otros docentes de la Universidad de Antioquia vinculados a estos lugares, y la disposición física, temporal y económica de quien investiga, para esto último, y siendo lo financiero un condicionante poco mencionado pero principal en la oportunidad de efectuar este tipo de investigaciones, fue vital el apoyo económico realizado por el Grupo Estudios del Territorio- GET del INER.

Toda esa información, la escrita, la contada y la percibida durante las cinco (5) visitas realizadas a Mutatá entre junio del 22 y septiembre del 2023, en las que asistí a encuentros institucionales como los CTR, a talleres realizados por organizaciones que acompañan el proceso de reincorporación; participe en actividades convocadas por los excombatientes dentro de los lugares de transición, y recorridos de reconocimiento y de observación, durante los cuales aplique algunas de las entrevistas realizadas a excombatientes (fueron 5 efectuadas en campo y sobre las que obtuve el permiso para grabar), fue cruzada en un diálogo constante de fuentes, a partir del cual logré la construcción conjunta de conocimiento, que me permitió describir, contrastar y analizar la información, para finalmente presentar algunos resultados hallados respecto a los interrogantes inicialmente planteados.

Para la construcción y el análisis de datos construí los siguientes instrumentos:

-Entrevistas semiestructuradas: este tipo de instrumento es ampliamente utilizado en las investigaciones cualitativas y estudios sociales. Aunque, para su aplicación se lleva una guía de preguntas, hay también una flexibilidad en el diálogo que hace posible para el entrevistador captar

información a profundidad sobre las percepciones, opiniones y/o experiencias de quien es entrevistado. En este tipo de entrevistas no se dirige o condiciona la respuesta, se permite que la entrevista fluya entre los temas y las percepciones que proponga quien es entrevistado (Guber, 2012)

En este caso, *posibilitó la identificación* de algunos aspectos sobre las prácticas y discursos cotidianos que acontecen en los lugares transicionales. Las entrevistas diseñadas, considerando el enfoque relacional que transversaliza esta investigación, se dirigieron tanto a los excombatientes de las FARC-EP que habitan estos espacios, como a las comunidades vecinas y algunos actores institucionales claves, con la finalidad de construir información que da cuenta de las características del relacionamiento entre los actores y los cambios que ha suscitado el emplazamiento de estos espacios en este territorio específico.

Se diseñó también, una entrevista para expertos como investigadores y profesionales de organizaciones nacionales o internacionales y de la Alcaldía de Mutatá y Gobernación de Antioquia, que por sus proyectos académicos o experiencia profesional han estado relacionados con estos espacios, y que apoyaron el proceso de entrada a la fase de campo de esta investigación.

En concreto, realicé 7 entrevistas a quienes nombre como académicos (profesores e investigadores), 6 entrevistas a aquellos que he definido como expertos porque se encuentran o realizaron actividades laborales relacionadas con los procesos de reincorporación en Urabá (ARN, I Kroc, Alcaldía, juntos construyendo futuro). Vale la pena anotar aquí, que las más complejas de realizar, por lo menos “formalmente”, fueron aquellas dirigidas a las personas de las comunidades La Fortuna y/o San José de León y a las y los excombatientes. Obtuve en total, 2 entrevistas de la comunidad, y 6 de excombatientes.

Identificar la “resistencia” a participar en entrevistas grupales y/o individuales, me permitió intuir que, respecto a este tipo de estudios relacionados con la paz, existe hoy en esos lugares, primero, una resistencia relacionada con la estigmatización y segundo un desgaste por la cantidad de estudios realizados allí, con distintos objetivos, desde su llegada. Haciendo que orgánicamente, y entendiéndolo como una guía investigativa dada por las condiciones propias de estos espacios, me valiera de otras estrategias como las conversaciones “informales” y la escucha “activa”, que sin duda, fueron creando hilos de información que me permitieron una comprensión de fondo de San José y Becuarandó.

En este ejercicio, fue clave la identificación de actores que fueran claves en el tipo y calidad de información que ofrecían. Además, fue fundamental, la implementación de la “escucha activa”, esto es, aquella que no se limita a transcribir literalmente lo que el otro plantea verbalmente como respuesta, sino que también logra captar aquello que no se dice con palabras pero que es expresado con el lenguaje corporal o con el silencio mismo.

Respecto a la información construida a partir de la aplicación de estas entrevistas, debo mencionar, en calidad de la ética de este trabajo que, aunque ninguno de los interlocutores a quienes se las realicé solicito de forma explícita que su identidad fuera cubierta, no lo nombrara o que usara seudónimos para la exposición de los apartados que aquí se traen, considerando que este es un proceso en curso, inacabado, que la información brindada al respecto es delicada y susceptible a múltiples interpretaciones, y que, en general la seguridad de los y las excombatientes es sin duda uno de los aspectos de mayor cuidado dentro del proceso de reincorporación, en este trabajo, al realizar referencias a expresiones, ideas o apartados textuales extraídas de las entrevistas aplicadas a excombatientes, usé nombres distintos, en pro de cubrir su identidad y velar por su seguridad.

-Recorridos de observación: la observación, es una técnica, que, según Guber, ubica al investigador fuera de la sociedad, para realizar su descripción con un registro detallado de cuanto ve y escucha, así pues, este deberá estar siempre alerta, incluso aunque participe, lo hace con el fin de observar y registrar los distintos momentos y eventos de la vida social (Guber, 2012). En este sentido, fue un elemento fundamental en la recolección de datos, pues desde allí, fue posible la construcción de una visión de la dinámica interna de los espacios de transición y su relación con las distintas territorialidades yuxtapuestas en este municipio.

La observación, como técnica, transversalizó los diversos momentos en que se tuvo contacto con los espacios y los actores objeto de esta investigación, como la participación de espacios como Comités Territoriales de Reincorporación -CTR-, en las visitas a los espacios, en los recorridos por la vereda La Fortuna, en las estadías en el municipio de Mutatá y en la realización de las entrevistas en los convites con excombatientes en los que participé.

Durante el desarrollo de la fase de campo en general, y durante la realización de estos recorridos en particular fue clave el registro de estas sensaciones provocadas por la observación, las cuales, en el momento de escritura, sirvieron como guía y se convirtieron también en información, ideas, percepciones y datos de relevancia.

- Análisis global

Para el procesamiento y análisis de la información obtenida en el proceso de investigación, se construyó una matriz con el objetivo de condensar allí tanto la información obtenida a través de la revisión de la bibliografía, como la procedente de la aplicación de los instrumentos para la construcción de datos en campo. A partir de lo consignado, se realizó un análisis de contenido, crítico y/o textual, con el fin de identificar la pertinencia de lo allí escrito en relación con los objetivos y categorías de análisis, que permitió una triangulación a partir de la cual se construyeron los resultados.

Por otra parte, los soportes de esta investigación, los documentos consultados, los registros fotográficos y fílmicos realizados, los audios de las entrevistas y demás archivos, los sistematicé por capítulo, en una carpeta creada en *onedrive*, con su respectiva categorización, esto tanto para facilitar el proceso de búsqueda propia del proceso de análisis y escritura, como para entregar como respaldo del trabajo realizado a la hora de formalizar la investigación.

- Análisis profundo.

El análisis realizado a los datos recolectados durante esta investigación transitó entre lo textual y lo discursivo. Analizar las visiones diversas que existen hoy sobre la noción en disputa de “paz territorial”, implicó identificar las relaciones entre el poder y el discurso que pueden verse materializadas en un espacio concreto como el que he definido para mi investigación; esto significó en todo caso realizar un análisis espacial y no exclusivamente retórico, es decir, no solo se realizó en la revisión documental sino también en los momentos de observación de los lugares y de aplicación de instrumentos para la recolección de información, poniendo especial atención a los focos de enunciación y los lugares desde donde se realizan los planteamientos, poniendo en evidencia lo contextual de los discursos y como esto en su conjunto se relaciona con la producción de lugares.

1.5. La intersección de lo conceptual y lo metodológico: reflexiones sobre la puesta en práctica de esta investigación.

Exponer conjuntamente el marco conceptual y la ruta metodológica en un mismo capítulo no es un asunto de mera forma, para este trabajo esto tiene un sentido lógico y profundo, ya que la definición de las categorías de análisis y la elaboración de la metodología de investigación se realizaron de manera simultánea. Esta integración fue fundamental no solo para viabilizar la construcción de una ruta coherente para este trabajo, sino también porque representó el momento más complejo del proceso. Unificar ambos aspectos en un solo apartado permite al lector comprender, de manera clara, desde dónde (marco conceptual) y cómo (metodología) se desarrolló esta investigación. De esta manera, se proporciona una visión integral del enfoque adoptado, facilitando una mejor comprensión de la lógica y coherencia interna de este trabajo.

Lo conceptual y metodológico, podría decirse es el marco que sitúa, no solo temáticamente un trabajo de este tipo, sino que refiere los alcances reales para quien está investigando, una cuestión clave para el afincamiento del tema, por lo que, son dos cuestiones que en la cotidianidad de la investigación nunca corrieron por separado. Así como hubo variaciones, en la definición de la metodología a implementar y cambios en los instrumentos de acuerdo con las exigencias que la realidad iba planteando, las categorías de análisis y las preguntas que guiaron este proceso fueron también transformándose y emergiendo, hasta lograr consolidar esa red, que me permitió finalmente tener un marco para el análisis.

Este trabajo fue mutando de acuerdo con la realidad, no solo del objeto de investigación sino a las posibilidades materiales de realizar una investigación de maestría y de quien investiga, y en la que se permitió transitar en esas variaciones que a veces se sienten como retrocesos, pero, que van siempre en bien, de garantizar la veracidad de lo que aquí se plantea. En concreto, nunca se forzó el tema a concordar dentro del marco de lo que había definido conceptual o metodológicamente, por el contrario, se fueron adaptando tanto los instrumentos como el método a la realidad que se iba develando.

Es por esto que, aunque se inició creyendo que lo propio era realizar aquí una etnografía, las posibilidades reales, de tiempo, recursos económicos, recursos humanos, disposición de quien investiga y los interlocutores, la dinámica de orden público, etc., implicó variaciones sobre todo en términos del tiempo que me fue posible permanecer en San José de León y Becuarandó, lo que limitó las posibilidades de profundizar en la descripción y me permitió más un análisis comparado que responde a un estudio de caso.

Otro ejemplo de esta flexibilidad metodológica, es la emergencia orgánica de un interrogante que, aunque no estuvo contemplado inicialmente, se fue construyendo en la medida en que se iban realizando los acercamientos conceptuales y contextuales y que fue fundamental no solo en la lectura analítica de los lugares transicionales sino también en la construcción del contexto y en dilucidar una mirada más socioespacial a un trabajo que a veces parecía hacer parte exclusivamente de los estudios de construcción de paz.

Aunque la investigación se planteó en Mutatá y ello implicaba por supuesto realizar un contexto y reflexiones que vincularan a este municipio, no se había propuesto aquí por lo menos de forma definitiva indagar sobre ¿Por qué estos lugares se construyeron en Mutatá y no en otro lugar?, ¿Por qué en ambos casos, luego de procesos inconclusos en Ituango (Santa Lucía) y Tierralta-Córdoba (Gallo) definieron reasentarse en Mutatá? Permitir la emergencia de estas preguntas y hacerlas parte del proceso, sin duda me ayudaron a agudizar mi análisis socioespacial y a comprender no solo el contexto del conflicto armado en Urabá, sino también las razones por las que en una región tan compleja como esta se apuesta por unas formas distintas de habitarla.

Además de ese posicionamiento digamos flexible, que permitió el tránsito entre diversas metodologías y la emergencia de categorías y preguntas de investigación dadas por los contextos prácticos y reales de lo que se ha definido como objeto de estudio, han surgido también, algunas reflexiones desde las complejidades de adentrarse en una investigación que me parece clave mencionar aunque podrían no aportar directamente al desarrollo temático de este trabajo, pues transversalizaron la experiencia, aportaron metodológicamente y me parece le dan un sentido más propio a lo que aquí se presenta.

Primero, y aquí, me permitiré el uso de la primera persona, pues implica situar a quién investiga: una mujer. Es usual en el marco de los estudios propios de las ciencias sociales, la producción de investigaciones que impliquen los instrumentos para la construcción de información aquí referidos, que suponen el contacto con las realidades sociales que se están estudiando, esto es, la generación de contactos directos con personas, los encuentros con estos para el desarrollo de las entrevistas, grupos focales, recorridos, talleres, etc., y el desplazamiento hasta el lugar donde está situada la investigación.

Todos estos, son concebidos como actividades normales dentro del desarrollo de este tipo de estudios, y aunque como se ha dicho ya, es muy importante, pues de allí suelen derivar datos fundamentales para el posterior análisis, existen alrededor de estas acciones, situaciones que

podrían poner en riesgo a quien investiga, en especial cuando se es mujer, una realidad que suele ser menospreciada en la academia.

Concorde al momento que vive hoy la Universidad, encuentro pertinente referir dentro de este escrito, la relevancia de llevar las reflexiones acerca de las Violencias Basadas en Género-VBG-, ejercidas sobre los cuerpos femeninos en ámbitos académicos, al contexto de las investigaciones de posgrado. La posibilidad de la ocurrencia de estas no debería pasar desapercibidas, ni por las investigadoras de posgrado que emprendemos este viaje, ni por la red de apoyo que en este caso deberían ser los docentes y los institutos a los que nos encontramos adscritas.

La experiencia de campo fue particularmente solitaria. No logré construir o sentirme dentro de una red que me permitiera una percepción de seguridad en las actividades que desarrollé, teniendo en cuenta, primero, las complejidades de orden público de la región y el municipio (Urabá y Mutatá) y segundo que a los lugares a los que ingresé siguen siendo masculinizados y con diversos tipos de resistencia a la llegada de personas externas.

Aunque, no me vi expuesta en la práctica a ningún tipo de peligro directo, preguntarse por el conflicto armado en contextos donde este continua, sigue siendo una cuestión riesgosa en la que hay una percepción permanente de intimidación, de ser observada, de estar sola, y no tener respaldo, haciendo que me atravesara siempre de forma muy particular la sensación de vulnerabilidad. Aunque, en la comunicación constante y directa establecida con mi asesor durante los casi dos años de acompañamiento, me permitieron mantenerlo informado de mis proyectos de viaje y las agendas establecidas durante estos, realizar recorridos en rutas de zonas rurales que no conozco, sin compañía, sin vehículos o conductores de confianza, no poseer una estrategia para el resguardo en caso de una situación de peligro, no haber establecido estrategias de comunicación que me hicieran sentir acompañada de alguna forma, entre otros aspectos, me permitieron reflexionar sobre lo solitario que son estos procesos de investigar, lo inseguro que puede llegar a ser, y la importancia de que en lo académico se reflexione sobre estas cuestiones, que son pues, puramente metodológicas.

Las facultades y los institutos, en especial en aquellos que hay cotidianamente actividades que implican el contacto con comunidades externas a las universitarias debería proponerse la construcción de rutas administrativas y redes de apoyo que hagan de estas acciones más seguras. No se trata pues, de garantizar un acompañamiento presencial y permanente de docentes por

ejemplo en el desarrollo de estas actividades, pero si, llevar a reflexiones que permitan en conjunto la construcción de estrategias que hagan de estos procesos más en compañía.

Otra reflexión realizada alrededor de la puesta en marcha de este trabajo tiene que ver, con como por más que se quiera acortar la distancia entre quien estudia y lo que o a quienes se estudia, siguen apareciendo en el camino de investigar cuestiones que las reafirman. Al iniciar con la definición de un tema para la investigación en el marco de la realización de la maestría, fue recurrente escuchar sobre la “pertinencia” y “relevancia” de esta. Una vez logré no solo definir el tema, sino también la pregunta y el lugar donde realizaría el estudio, los comentarios recibidos por los docentes e investigadores validaron esos dos aspectos fundamentales para continuar.

Sin embargo, al iniciar con la puesta en práctica de las estrategias metodológicas para generar los primeros acercamientos con los excombatientes que habitan la NAR San José de León y el aETCR Mutatá-Becuarandó, la consecución de contactos fue compleja, debido principalmente a la “sobre intervención” esto es, a la existencia de una gran cantidad de entidades (públicas y privadas) y con ellas de profesionales, entre los que se encontraban estudiantes de pregrado, maestría y doctorado de distintas universidades con intereses en desarrollar investigaciones muchas veces redundantes (para ellos) en estos espacios en concreto. Además, reiterativamente, en las conversaciones informales se expresó el malestar debido a los múltiples incumplimientos -a nivel individual y colectivo- que los profesionales y/o investigadores han tenido, en torno a los alcances y devoluciones de las investigaciones y proyectos realizados allí.

Aunque finalmente se logró el establecimiento de contactos y realizar las visitas, metodológicamente fue complejo lograr construir una base datos que me permitiera el acercamiento telefónico a los excombatientes para iniciar con las visitas a los lugares, no solo porque estos tuvieran resistencia a volver a participar en proyectos que realicen las “mismas” preguntas sobre la paz, sino porque incluso, los profesionales que los conocían, aunque me ayudaron de forma fundamental en las conversaciones y las entrevista realizadas, de donde extraje información sumamente valiosa, al final nunca me pusieron en contacto directo con uno de ellos argumentando en su mayoría la misma razón que luego resonó en los comentarios de los excombatientes: “ellos están cansados”, “quién sabe si te reciben” “debes venderles tu proyecto de investigación para que te permitan estar ahí”.

Realicé la investigación, visité los lugares, fui bien recibida, y las entrevistas que realicé fueron amenas y llevadas a cabo con tranquilidad. Sin embargo, esta situación me generó un

interrogante sobre los tipos de investigación y los atributos que se le asignan desde la academia y las distancias que estas siguen teniendo con las pertinencias prácticas o reales para quienes se vinculan a estos procesos desde otros lugares, así que, aunque se ha dicho muchas veces ya, en muchos contextos y desde muchas voces, no deja de ser relevante dentro del quehacer investigativo, preguntarnos siempre ¿pertinente para quién o para qué?

Por supuesto que el tema de la construcción de paz en el marco de un posacuerdo, la generación de reflexiones espaciales alrededor de la implementación de estos lugares transicionales son asuntos pertinentes para la profundización y ampliación del conocimiento a nivel conceptual y argumentativo en la academia, sin embargo, esto no siempre se corresponde con las necesidades que poseen las comunidades con las que conectamos entre las que se están generando cada vez más, posicionamientos críticos y resistencias a ser objeto de análisis para la extracción de información que poco les aporta en su vida cotidiana.

De esta situación, surgió además una reflexión adicional. La pertinencia, en términos prácticos podría vincularse de forma directa con los sentidos (beneficios) que se le da a una investigación de este tipo desde ambas perspectivas (la del investigador y la de los investigados), razón por la cual, resulta importante crear acuerdos con las comunidades sobre las devoluciones a realizar. Primero, con el objetivo de no generar expectativas mayores a las del alcance, en este caso de un proyecto de investigación para obtener el título de maestría, segundo, para a partir de allí lograr concretar las formas en que es posible realizar una devolución o articularse a algún proceso interno que aporte a la comunidad, en este caso a los lugares transicionales.

Esto evita darles continuidad a procesos extractivistas que van en beneficio único de quien investiga en los institutos, escuelas o facultades a las que nos inscribimos. La información que construimos debe ser accesible realmente para quienes nos otorgaron el conocimiento, debemos garantizar rutas o estrategias de divulgación interna (para ellos y ellas).

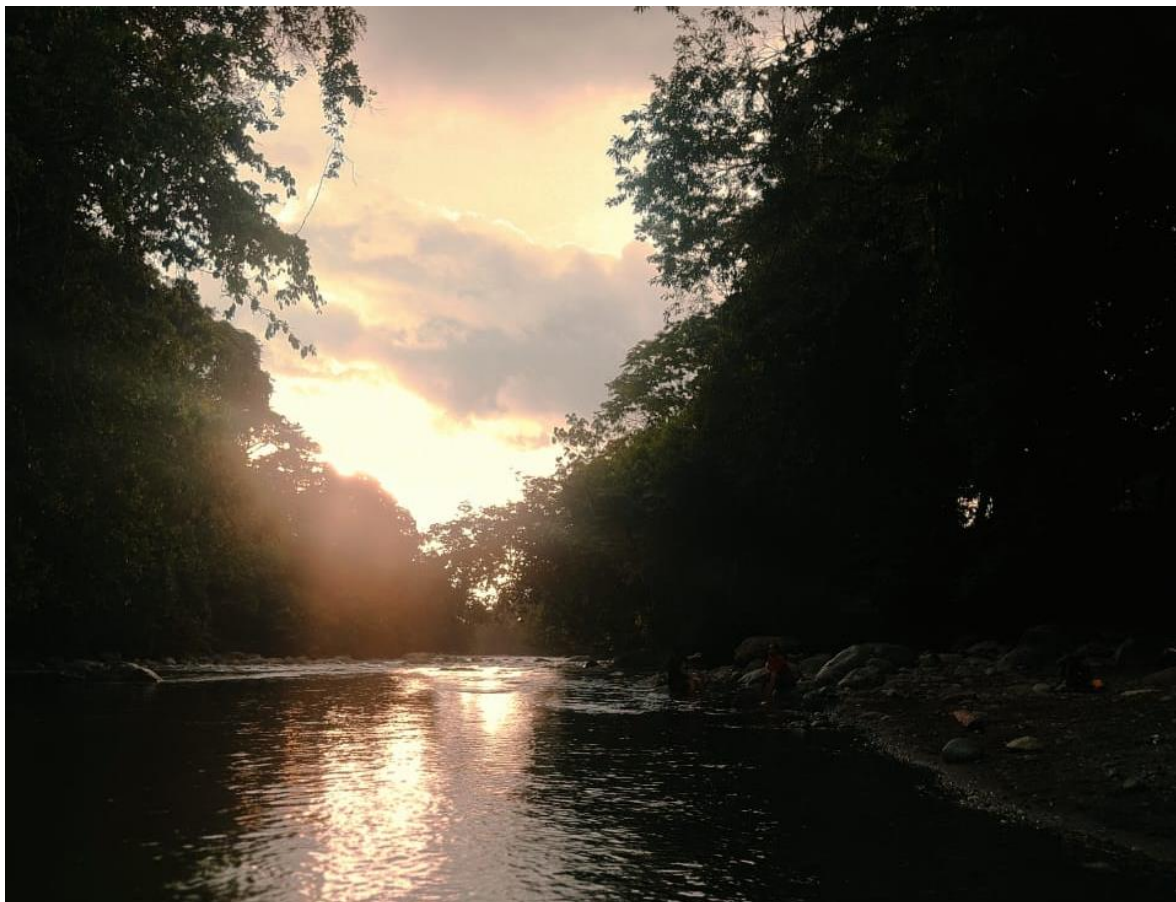
Este tipo de investigaciones, que implican el encuentro entre personas y la posibilidad de generar movimientos en los procesos a nivel individual o colectivo, deben siempre involucrar, no como una consideración final, sino como una línea que transversalice el sentido mismo de la investigación, una *ética del regreso*. Esto implica el diseño consciente, incluso concertado, de la manera en que estos ejercicios investigativos pueden aportar no solo al investigador o a la academia, sino también conectarse con las realidades de los contextos para gestionar los procesos que se llevan a cabo dentro de las comunidades. Esta ética no solo hace horizontal la relación entre

el investigador y la comunidad, sino que potencia la posibilidad de revestir de un sentido práctico a la investigación, proporcionando beneficios tangibles y relevantes para las comunidades involucradas.

En este caso, se espera lograr la devolución de la información aquí generada, especialmente las cartografías y las reflexiones finales en un espacio participativo en el que se pueda reflexionar y seguir nutriendo mi proceso de aprendizaje y el de re-conocimiento de los excombatientes. En algunas reuniones, se logró pensar en la construcción de centros de documentación en cada uno de estos lugares en los que pueda disponerse todo el conocimiento que durante estos años se ha generado a partir de su vinculación en proyectos de investigación o intervención, con lo cual podría hacer útil toda la información construida durante estos años de “sobre intervención” y potenciar una gestión del conocimiento al interior de estos lugares.

En últimas, dentro del proceso de investigar, los esfuerzos por construir las preguntas de investigación deben ser iguales a los que realizamos en torno a interrogantes metodológicos, para este caso, aunque podría decir que se dio de forma tardía, ha sido indispensable pensarse en ¿qué implica preguntarse por la paz cuando el conflicto continúa?, ¿qué significa ser investigadora en un contexto patriarcal de violencias en campo (y también en la academia)? ¿cómo esta investigación da respuestas o aportes que trasciendan la enunciación técnica o académica?, no solo porque han nutrido este proyecto sino porque son cuestiones que invitan a repensarse críticamente las “formas” de estudiar y de proyectar nuestras investigaciones, en contextos donde parece que todo está establecido ya.

Capítulo 2. Urabá: entre el conflicto armado y la construcción de nuevas territorialidades de paz.



Fotografía 1 Río Mutatá

Fuente: registro propio, 2024.

Reflexionar sobre la implementación del acuerdo de paz en Colombia o sobre la paz en sí misma implicó ahondar en el proceso de la configuración histórica del Estado-Nación, y reconocer el papel determinante que en este han jugado las relaciones entre la política, la guerra, la economía y la geografía. El conflicto armado en Colombia, no se ha dado de forma homogénea en el territorio nacional, sino bajo intensidades, actores, despliegues espaciales, formas de infringir violencias y duraciones particulares, en este sentido, la guerra en el país ha fungido como un elemento determinante en la configuración del “ordenamiento territorial”, por tanto, la geografía debe comprenderse en dos sentidos, desde el papel imperante que en ella ha jugado el conflicto armado *como un agente de producción socioespacial* y al mismo tiempo, cómo las condiciones geográficas propias de los territorios posibilitaron una dinámica de guerra particular.

En esta investigación, se realizó un análisis de la dinámica de guerra acontecida en Urabá, con el objetivo de comprender el porqué de las condiciones socioespaciales actuales, las cuales han hecho posible que, posterior al acuerdo se conformaran allí dos de los lugares para la recepción de excombatientes de las FARC-EP en el proceso de reincorporación. También, reconocer el contexto histórico y bélico de la región permitió el establecimiento de un piso que sustentara las preguntas sobre por qué se construyeron estos lugares en Mutatá y si a la luz de la actualidad, esto ha implicado algún tipo de reconfiguración espacial.

Urabá posee unas condiciones socioespaciales especiales. Esta es una región compuesta por porciones de los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, cada uno de ellos configurado cultural, económica y políticamente muy distinto; además posee una ubicación estratégica, pues allí se encuentra el límite con Panamá lo que lo convierte en uno de los lugares de paso de Suramérica a Centroamérica y es donde se encuentra el cruce entre el Océano Pacífico y el Atlántico.

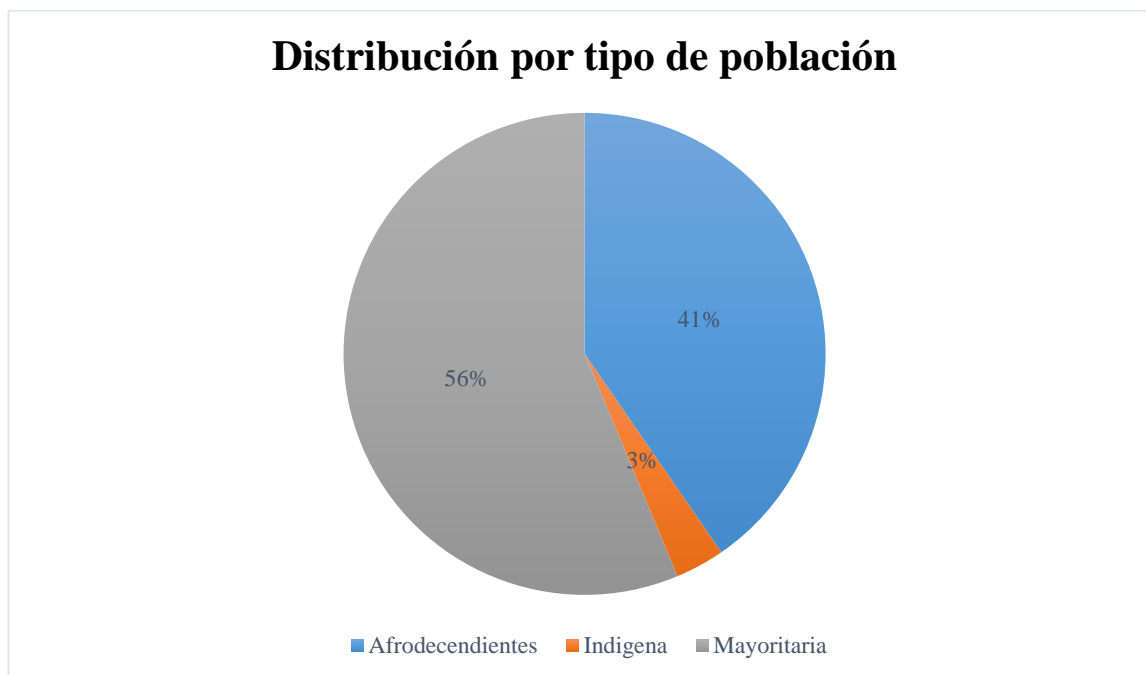
Esta región es ecológicamente determinante no solo para Antioquia, sino para todo el país. Cuenta con cerca de 61,214 hectáreas de cuerpos de agua, destacándose grandes zonas de pantano, manglares y drenajes dobles, como el río Sucio y el río Atrato. El 0.2% del área de los parques nacionales naturales del país se localizan allí, siendo el Parque Nacional Natural Paramillo el más grande de la subregión con aproximadamente 14,591 hectáreas. Además, hay cerca de 90,000 hectáreas en esta zona declaradas como áreas protegidas bajo la categoría de Zonas de Reserva Forestal (ZRF), destinadas al desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre (*Parque Nacional Natural Paramillo*, s. f.).

En cuanto a las condiciones demográficas de Urabá, según la Agencia de la Renovación del Territorio –ART- para el año 2023, la población total ascendió a 383, 911 habitantes, con un 49% ubicado en la zona urbana y un 51% en la zona rural. Según la ART, la mayoría de la población urbana está ubicada en los municipios de Apartadó y Turbo, y son estos los que más han crecido desde el censo realizado por el DANE en 2005, 6,3% y 5,5%, respectivamente.

El informe de la serie de documentos regionales de la ART en 2023 sugiere un equilibrio entre la población femenina, que representa el 51.2%, y la masculina, que representa el 48.8%. Sobre la presencia de comunidades étnicas, se encontró que el 40,6% de la población asentada en esta región se identifica como afrodescendiente y el 3,3% como indígena, así que, el 56,3% se auto reconoce como población mayoritaria.

Figura 2

Tipo de población en Urabá



Nota. Elaboración propia basada en ART (2023).

Los datos referidos en la Figura 2, son importantes para el análisis, pues, como se describe más adelante, deja entrever la relevancia que en la consolidación de la dinámica de esta región ha tenido la presencia de las diversas poblaciones, y que según los datos presentados aún persisten en Urabá. Según la pirámide poblacional registrada en este informe, existe una tendencia al envejecimiento de los habitantes, pues mientras la población en edad productiva, esto es, entre los 18 y 60 años representa el 56.05%, los más jóvenes, es decir, aquellos que se encuentran entre los 0 y 11 años, son el 24%.

Respecto a la dimensión económica, Urabá es una región con gran potencial agrícola, por lo que las actividades económicas principales, según la Cámara de Comercio de Urabá, son la agroindustria, ganadería, caza, silvicultura y pesca. En estas se concentra el 72.8% de los activos (Cámara de Comercio de Urabá, 2020).

En cuanto a las condiciones socioeconómicas, el Índice de Pobreza Multidimensional – IPM-, según el Departamento Nacional de Planeación –DNP-, es un concepto que va más allá de la falta de ingresos y recursos económicos. Se refiere a una situación en la que las personas carecen

de las múltiples dimensiones del bienestar humano como la salud, educación, vivienda adecuada, seguridad alimentaria, acceso a servicios básicos y la participación en la vida comunitaria (DNP, 2022). En Urabá, para el año 2023, este tipo de pobreza fue de 24,3 %. Un porcentaje muy alto, si se tiene en cuenta que, para el mismo año, el IPM para Colombia, según el DANE fue de 12.1 %. Se evidencia que esta región continúa siendo lo que sugirió Serje (2011), como uno de esos territorios “otros” o periféricos, en el que se dan carencias en múltiples dimensiones del bienestar humano, en comparación con el promedio de la población del país en su conjunto.

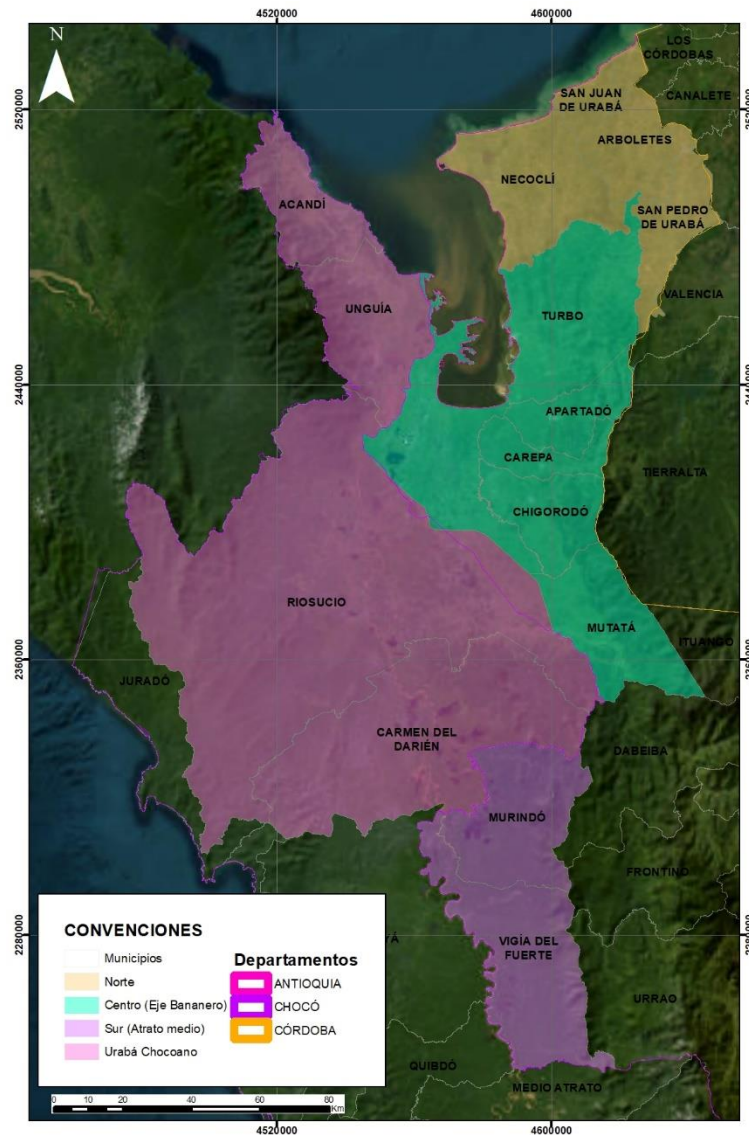
Sin embargo, y contraste con esto, Urabá, en la actualidad, es la región con uno de los más altos PIB de Antioquia, con una gran presencia institucional, y en la que, se adelantan grandes inversiones económicas para proyectos de infraestructuras como vías y puertos. Así pues, existen tensiones entre esas condiciones periféricas que enraízan los ciclos de la pobreza de la región y esas acciones a nivel local y global que la han puesto en el centro de la intervención, rebatiendo así esa noción de “periferia”.

Estas condiciones geográficas, económicas y sociales han hecho que esta región haya sido objeto de alto interés para los actores armados, económicos y políticos, quienes han puesto en marcha dinámicas de guerra, han instaurado corredores para el tráfico de productos que hacen parte de la economía ilícita como la marihuana, cocaína y armas, y se han construido megaproyectos viales, portuarios, energéticos, y agroindustriales como la producción a gran escala de banano, madera (teca) y recientemente piña (Álvarez, 2021).

Para comprender esta región en términos geográficos y bélicos, es relevante reconocer la subdivisión que se le ha dado a esta entre, el *Urabá chocoano* compuesto por los municipios de Acandí, Carmen del Darién, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía y el *Urabá antioqueño* conformado por once municipios divididos en tres zonas: Norte (Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá); Centro o eje bananero (Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo); y Sur o Atrato medio (Murindó y Vigía del Fuerte) (García et al., 2011) (Ver Figura 3).

Figura 3

Divisiones político-administrativas de los municipios de Urabá.



Nota. Elaboración propia, 2024.

Las dinámicas territoriales del conflicto armado en Urabá (ver Figura 4), según García y Aramburo (García et al., 2011) se dieron durante tres ciclos de violencia: el primero, entre 1988-1991, caracterizado por los enfrentamientos entre las FARC-EP y el Ejército Popular de Liberación –EPL-. El segundo, entre 1992-1998, período en el que se intensificó la violencia debido a la disputa territorial entre las guerrillas y los recién conformados grupos paramilitares – Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-; y una tercera entre 2004-2007, época en la que se dio la

desmovilización del grupo paramilitar, hecho que implicó una transformación en las condiciones políticas y bélicas pues con la “desaparición” de este grupo armado, se dio entrada a otros poderes económicos y bélicos asociados al narcotráfico y su disputa territorial con las guerrillas.

En esta investigación se realiza un recuento de estos tres ciclos de violencia en la región. El primero entre 1960 y 1988, en el que se presenta la conformación de las “territorialidades insurgentes” (EPL y FARC-EP), el segundo entre 1988 y 2007 en el que se expone la aparición del grupo paramilitar, la disputa por el dominio político y geográfico de la región con las FARC-EP y la desmovilización de las AUC, y un tercero, en el que se presenta brevemente la dinámica en Urabá luego de las desmovilizaciones de las AUC y la aparición en la región de otros actores armados, esto, entre el 2007 y el 2012. En este último se hace referencia a las dinámicas de Urabá entre el 2012 y la actualidad, período en el que se dieron las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, se logró la firma del acuerdo, se avanza en la implementación, entre otros, a través de la instalación en Mutatá de los lugares para la transición política de excombatientes.

En el proceso de comprender la dinámica bélica de esta región, se realizó una cartografía, ver **Figura 5**, en la que se espacializaron algunos de los elementos que se consideran de mayor relevancia luego de cruzar la información encontrada en (García et al., 2011), y otra información retomada de entrevistas, documentales y testimonios realizados en el marco de las indagatorias ante la JEP. Este, fue un ejercicio metodológico que permitió pasar del recuento descriptivo hacia la construcción de planteamientos analíticos para identificar las razones por las que se ha realizado un esfuerzo institucional, social y político por consolidar en una región históricamente asociada a dinámicas de guerra espacios e infraestructuras para la paz.

Para la construcción de este apartado, se consideró la categoría de *territorialidad* propuesta por (García y Aramburo, 2011), pues permite la comprensión no sólo de los múltiples actores presentes allí, sino también de las formas en que las relaciones y tensiones entre estos ha ido configurando la dinámica socioespacial propia de Urabá.

Las territorialidades representan realidades que han sido moldeadas por grupos sociales y culturales en un espacio específico, impregnando allí las formas propias de representación y las prácticas sociales. Existen múltiples territorialidades según (García et al., 2011), a continuación se presenta cada una de estas y se profundiza en las territorialidades bélicas, centrales para

comprender las dinámicas propias de Urabá y en las territorialidades de paz, relevantes para esta investigación.

2.1. Tipo de territorialidades.

2.1.1. Territorialidades socioculturales.

Las territorialidades socioculturales se configuraron mediante el proceso propio de poblamiento de esta región. En esta se agrupan sectores poblacionales diversos que han incidido en la construcción de Urabá; podría decirse que el proceso vivido por cada uno de estos implicó una resignificación y construcción de nuevos espacios que respondieran a sus necesidades, pero además que crearan lazos identitarios con los territorios. Como se plantea en el texto:

Ese proceso paulatino de asentamiento, apropiación, identificación y producción del espacio construyó sentimientos de identidad, mostró diferentes formas de instalación de los pobladores de cada oleada colonizadora, forzó la definición de comportamientos para el entendimiento entre grupos diferentes y formas de control sobre áreas geográficas específicas. Todos estos elementos fueron diseñando distintas territorialidades. (García et al., 2011: 279)

El proceso de poblamiento y colonización de esta región inicio con las comunidades indígenas quienes se asentaron allí antes que cualquier proceso colonizador, y las comunidades negras llegadas en el siglo XIX luego de los primeros procesos de liberación tras el período esclavista. También por los colonizadores, que llegaron en la segunda mitad del siglo XX provenientes de los departamentos Bolívar, el centro del país y principalmente Córdoba, convirtiendo a esta parte de Antioquia en un receptor político, económico y social (García et al., 2011).

A la territorialidad sociocultural se suman además otros tres tipos de población. Primero, está la *territorialidad empresarial*, se refiere a la destinación de miles de hectáreas para la producción de monocultivos en la zona centro de Urabá (en ese momento de banano predominantemente), la cual se instauró sin la regulación estatal. Esto tuvo implicaciones fundamentales en la dinámica de esta región, dado que, primero, hizo que se diera una concentración demográfica en los centros urbanos, y segundo, produjo una transformación en el tipo de cultivos, de los transitorios a los permanentes.

La llegada de esta agroindustria a la región significó la creación de grandes brechas económicas e intensificó las desigualdades. Existieron y aún hoy se reflejan en Urabá grandes diferencias en el nivel de “desarrollo” y bienestar de las zonas sur y norte, respecto a la del centro. Mientras en esta última fueron configurándose centros poblados urbanos que demandaron la aparición de servicios públicos, sociales y económicos que fue convirtiendo especialmente a Apartadó y Turbo en polos o centros de desarrollo para la región, en el sur y el norte las condiciones de pobreza no se han transformado tan profunda ni tan rápidamente. Puede decirse entonces que, aquí el ordenamiento territorial estuvo direccionado por la fuerza industrial y económica más que la estatal o institucional, haciendo de Urabá una región fragmentada.

De la anterior, deriva la *territorialidad urbana*, pues, aunque su configuración no puede ceñirse única y exclusivamente a la aparición de la agroindustria, si hay relaciones en la aparición de esta y la dinámica económica y social establecida en Urabá luego de la consolidación de los grandes cultivos de banano, especialmente de centros urbanos en el eje bananero como Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, donde se han concentrado el desarrollo de infraestructuras de servicios públicos, privados y comerciales.

La conformación de estas centralidades implicó un crecimiento exponencial que derivó en demandas tanto a la institucionalidad como a los empresarios, por tanto, las reconfiguraciones necesarias a nivel espacial para la apertura de esta dinámica urbana, implicó la creación de organizaciones cívicas y ciudadanas que ejercieron presiones tanto al Estado como a los empresarios para el cumplimiento de sus necesidades, organizaciones que se sostuvieron en el tiempo y que posteriormente, algunas se vincularon con la realidad política, esto es, se establecieron relaciones con los partidos políticos (Partido Comunista) y con las guerrillas (FARC y EPL).

En relación con la dinámica que impuso en esta región las territorialidades antes mencionadas, se configura también la *institucional*, la cual está en relación directa con la estatalidad y la economía en la región. Derivado de la instauración de la dinámica económica de monocultivo desde los años 60 del siglo XX en el eje bananero, se dio un mayor despliegue económico y con este una alta presencia institucional. Este tipo de territorialidad institucional se ha confrontado con las de los demás grupos sociales (principalmente comunidades étnicas y campesinas) quienes durante décadas han sido desplazados forzosamente no sólo por los intereses empresariales del centro de la región sino también por los terratenientes ubicados mayoritariamente

en el norte y por los nuevos extensos negocios de extracción de recursos agroindustriales de la palma, como aconteció en su momento en el Sur (García et al., 2011).

Por otra parte, en el norte de Urabá, persisten *territorialidades de acaparamiento* (García et al., 2011). Esto se refiere a la adquisición extensiva de terrenos, inicialmente por inversionistas ausentes en búsqueda de oportunidades económicas, o por narcotraficantes que identificaron en esta área una ubicación estratégica para establecer corredores funcionales a sus negocios.

Durante los años 90 del siglo XX, con la llegada del paramilitarismo a la región, esta dinámica se intensificó, pues el recrudecimiento del conflicto entre paramilitares y guerrillas posibilitó un incremento en el acaparamiento, haciendo cada vez más extensos los predios de un mismo dueño. En este período muchos de los campesinos y con ellos pequeños y medianos propietarios fueron obligados a desplazarse, lo que significó un incremento en la venta de predios a bajos costos debido a la presión de la violencia, haciendo de los grandes predios latifundios. La tenencia de la tierra a este respecto tiene un sentido particularmente utilitarista, que está más ligado a las estrategias del conflicto que a la producción económica.

Este breve recuento por las diversas territorialidades socioculturales permite tener un contexto del proceso de configuración de esta región, para realizar una lectura con mayor profundidad de las dinámicas bélicas ocurridas allí, desde una perspectiva de las relaciones de poder. A continuación, se profundiza en las territorialidades bélicas, haciendo hincapié en la presencia de las FACR-EP en esta región.

2.1.2. Territorialidades bélicas

-Territorialidades insurgentes, 1960-1988

Las territorialidades bélicas se han desplegado por la presencia en esta región de grupos armados que han incidido en el funcionamiento de Urabá. La configuración de esta territorialidad inició en el decenio de 1960 con la instauración en la región de las guerrillas del EPL y FARC-EP y tuvo un momento de “reconfiguración” en 1990 con la aparición del paramilitarismo que implicó un cambio en cómo ejercen control y violencia estos grupos armados en Urabá. Así pues, las territorialidades bélicas son espacios donde los grupos armados, construyeron una relación de

identidad e identificación con el territorio, establecieron formas específicas de comportamiento y ejercieron o tienen sobre éste algún tipo de dominio y control (García et al., 2011: 298).

En la década de 1960, las guerrillas (EPL y FARC) llegaron a Urabá con un proyecto ideológico sustentado en la lucha revolucionaria concebida inicialmente para áreas rurales. Las ideas políticas que las sostenían estaban asociadas a la intención de contribuir en la resolución de un problema estructural del país, a saber, la tenencia dispar de la tierra entre campesinos, latifundistas, concesionarios de explotaciones y agroexportadores (García et al., 2011). La lucha revolucionaria se realizaba en las zonas rurales y con el campesinado, por lo que la presencia de esta territorialidad insurgente contribuyó de forma importante en el proceso de colonización de esta región (Uribe de Hincapié, 1992).

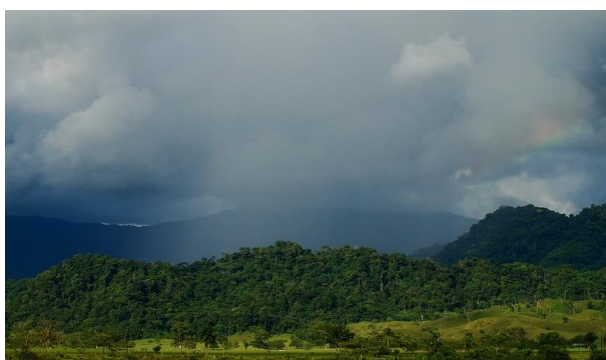
Esta reconstrucción contextual, además de basarse en la revisión de fuentes secundarias, se complementa con algunos de los relatos expuestos durante las indagatorias dadas en el marco de la versión colectiva del Frente Quinto de las FARC-EP en el Caso 04, llevada a cabo en Urabá el 17 de junio de 2021⁶. Esta es una fuente de análisis que proporcionó información valiosa no solo para la reconstrucción de la línea de tiempo de la dinámica de las FARC-EP en esta parte de Antioquia, sino también para comprender la relación estrecha que existe entre la estrategia bélica de esta organización y las condiciones geográficas y sociales de esta región.

Durante estos procesos judiciales, los excombatientes de las FARC-EP han dado testimonios esenciales para el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la búsqueda de justicia. En estas, se relatan hechos, describen estructuras organizativas, identifican a otros responsables y revelan las dinámicas internas de la organización. Este proceso busca no solo la rendición de cuentas, sino también la contribución a la construcción de una memoria histórica y la reconciliación nacional.

Durante el primer encuentro de este Caso 04, Martín Cruz, excombatiente de las FARC-EP comentó que, las pretensiones ideológicas de proponer este proyecto político en Urabá estuvieron

⁶ Posterior al AFP, se creó en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo que dirige los denominados macro-casos, que abarcan un amplio espectro de violaciones de derechos humanos y al DIH que ocurrieron durante el conflicto armado en Colombia y son parte de los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Su propósito principal es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en el país, tanto por parte de miembros de las FARC-EP como por agentes del Estado y otros actores involucrados. En el marco de esto se han dado procesos amplios de indagatorias a los que han asistido excombatientes de las FARC-EP, del ejército y víctimas. En el día 1 de la versión colectiva del Frente Quinto de las FARC-EP en el caso 04, llevada a cabo en Urabá el 17 de junio de 2021, a la que asistió el excombatiente Martín Cruz. Recuperado de (*Versión colectiva del Frente 5 de las FARC- EP en el Caso 04 (Urabá) Junio 17 de 2021*, s. f.).

ligadas a dos consideraciones fundamentales, una geográfica y otra social. Sobre la primera afirmó que la llegada de las FARC-EP a Urabá fue una decisión basada en el plan estratégico militar, mediante el cual se definieron zonas estratégicas, por las condiciones geográficas y la “calidad de lucha”. Esta región fue concebida como relevante para la guerra porque es la entrada a América del Sur, y su vez, una salida los océanos Pacífico y Atlántico, además, posee un potencial natural que le dan las serranías, humedales y las tierras bajas del litoral del río Atrato, las sábanas y su abanico aluvial y permite por sus canales acuáticos (ríos) y por las zonas boscosas (Serranía Abibe y Nudo del Paramillo) transitar del sur al norte de la región.



Fotografía 2. Serranía de Abibe

Fuente⁷: Tomado del Blog Mauricio Agudelo, 2024.



Fotografía 3. Parque Nacional Nudo del Paramillo.

Fuente⁸: Tomado de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2024.

La Serranía de Abibe (Ver Fotografía 2) y el Parque Nacional Nudo del paramillo (Ver Fotografía 3), son además de dos grandes referentes geográficos, dos condicionantes espaciales que viabilizaron el despliegue de una dinámica de guerra en esta región. Las condiciones geográficas le permitieron a las FARC-EP y luego a otros actores armados con incidencia en Urabá, establecer rutas de conexión entre los departamentos de Córdoba, Chocó y Antioquia, al interior de estos, se establecieron rutas fluviales que servían para la movilización de los grupos de combatientes, y principalmente de elementos como armas, municiones, ropa, medicamentos y también droga ilícita con salida al mar. Son, además, dos espacios que sirvieron como zona de repliegue, para la guerrilla de las FARC-EP.

⁷ Tomado de (<https://www.flickr.com/photos/mauricioagudelo/5114904935>) consultado en mayo de 2024.

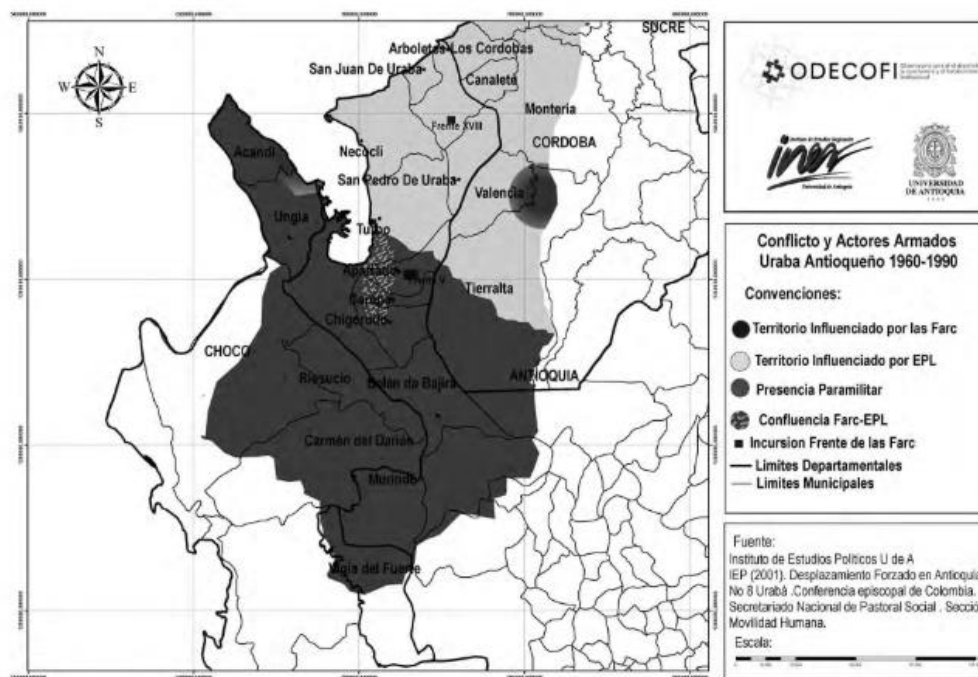
⁸ Tomado de (<https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-paramillo/>) consultado en mayo de 2024.

En cuanto a las condiciones sociales, se sabe que, las guerrillas desde su llegada apuntaron al establecimiento de relaciones y alianzas con el Partido Comunista –PC-, con las organizaciones y movimientos agrarios, con los partidos políticos alternativos (García et al., 2011). En este mismo sentido, Martín Cruz, mencionó que, todas esas emergencias, consolidaciones de procesos sindicales, movimientos sociales de izquierda y estructuras políticas de la misma línea política permitió el establecimiento de unas condiciones sociales óptimas para la organización recién conformada y el proyecto político que la sostenía con su ideal de la toma del poder (*Versión colectiva del Frente 5 de las Farc- EP en el Caso 04 (Urabá) Junio 17 de 2021*).

Con la presencia de ambas organizaciones armadas, y teniendo en cuenta que, el área de mayor incidencia del EPL era el norte de Urabá (Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá), las FARC-EP iniciaron con estrategias de control hacia el sur de la región, en Mutatá y la planicie del Atrato en dirección a Murindó (García et al., 2011). (Ver Figura 4).

Figura 4

Conflictos y actores armados en el Urabá antioqueño 1960-1990



Nota. Tomado de García y Aramburo, 2011, p.311.

Además de dicha división en las áreas de incidencia de cada una de estas guerrillas, en Urabá se dieron distintas formas de interacción entre las territorialidades socioculturales y las

insurgentes, las cuales dependieron del interés de cada una de las partes. Para ampliar esto, García y Aramburo, acogen lo expresado por (Pizarro Leongómez, 1991), quien sugirió la existencia de grandes disparidades en el comportamiento de la guerrilla con los campesinos, los sindicalistas, los empresarios y los grupos étnicos, proponiendo tres tipos de interacción: la societal, la partisana y la militar. Aunque este no es el foco de esta investigación, por tanto, no se profundizó en ello, parece importante destacarlo, pues como se dijo antes, da cuenta no solo de la relación de interdependencia que existe entre los múltiples actores y diversas territorialidades, sino que plantea que es mediante la creación de estas dinámicas relacionales como se configuran socioespacialmente un lugar.

Durante las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, el sostenimiento y expansión de estas fuerzas de izquierda en la región, estuvieron relacionadas con algunas decisiones del gobierno central, entre las que se destaca la tregua de 1984 dirigida por el expresidente Belisario Betancur. Esta estuvo dada por los acuerdos entre el gobierno y los grupos guerrilleros el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Autodefensas Obreras (ADO). En el marco de este proceso se pactó, entre otras cosas, el cese al fuego, la condena de acciones terroristas y la posibilidad de organizarse políticamente, todo esto, contribuyó al fortalecimiento de las organizaciones sindicales, pues, con esta tregua, los movimientos de izquierda pudieron realizar proselitismo, tener voceros públicos y hacer convocatorias abiertas. (Verdad Abierta, 2012)

Fue en esta misma década, que el EPL y las FARC-EP iniciaron la expansión hacia el eje bananero donde se concentraba la alta productividad económica y el desarrollo empresarial, así como la consolidación de la urbanización. Este movimiento en el espacio geográfico en la región implicó que las guerrillas transitaran hacia la interacción ya no con campesinos sino con los obreros de las agroindustrias, una transformación en su capacidad de incidir política e ideológicamente en los centros urbanos y con ello en áreas de mayor desarrollo. Esto implicó la ampliación de incidencia y no en el abandono de las causas agraristas planteadas inicialmente (García et al., 2011).

En 1985, pese a los esfuerzos de diálogos y a la “tregua” pactada, las presiones generadas por nuevos actores armados al margen de la ley vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo en Colombia, además de la falta de cumplimiento de los términos pactados y la poca credibilidad en los procesos de negociación por parte la sociedad civil, la mayor parte de los acuerdos se rompieron. Sin embargo, como una propuesta de paz en el marco del proceso de negociación, el

28 de mayo de 1985, entre las FARC-EP y el Partido Comunista de Colombia, y en atención a la opción para la participación política se conformó un nuevo partido político: Unión Patriótica –UP- (*Frente 5 de las Farc, protagonista de la guerra*, 2012).

En Urabá la mayor parte de los políticos militantes del partido comunista se adhirieron a la UP, conformando una base fuerte y sólida en la región. En las elecciones de 1986, este partido obtuvo la mayoría de los votos para concejos municipales en Apartadó y Mutatá. En 1988, en la primera elección popular de alcaldes, ganó las alcaldías de estos dos municipios y la mayoría de las curules en el Concejo de Arboletes. Con el dominio de la izquierda, tanto a nivel político como militar se da un crecimiento y despliegue de las FARC-EP (*Frente 5 de las Farc, protagonista de la guerra*, 2012).

Para hacer referencia a esto María Teresa Uribe planteó:

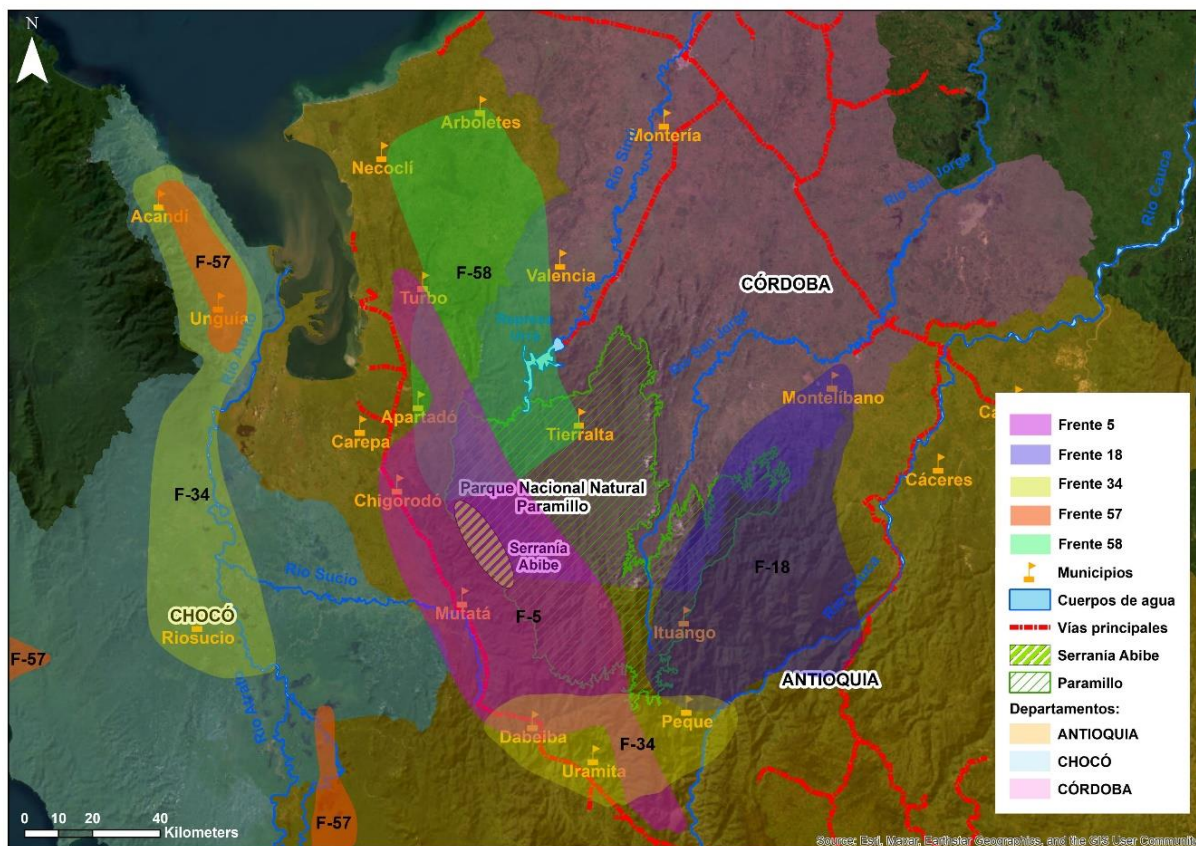
En las áreas por ellos controladas (son) un verdadero poder; dirimen los conflictos, manejan el orden público, aplican un modelo primario de justicia y reciben un apoyo real de los pobladores, quienes los reconocen como Estado, es decir, como principio de orden y organización (Uribe de Hincapié, 1992: 67)

Es en este período cuando inician los “desdoblamientos” del hasta entonces único frente de esta guerrilla en esta región: el Frente Quinto. Estos, fueron unas divisiones o fragmentaciones estratégicas y territoriales realizadas dentro de la organización con el objetivo de lograr un mayor control. La subdivisión en porciones de la región más pequeñas permitiría a los líderes tener una mayor capacidad de maniobra. Estas, indican no solo el crecimiento de la fuerza y recursos de la organización en la región sino también un despliegue militar más estratégico para la contención de la llegada de nuevos grupos armados. Estos desdoblamientos respondían casi que exclusivamente a un asunto de estrategia militar y geográfica, pues, el financiamiento de los frentes nacientes continuaba dependiendo del centro económico de la organización.

El Frente Quinto comandado por Alias Efraín Guzmán, y los que surgieron de su “desdoblamiento”, tuvieron desde los 70 hasta los 2000 incidencia entre el municipio de Tierralta en el departamento de Córdoba hasta el sur y el occidente del Urabá antioqueño, así como en algunas zonas del Urabá chocoano (Ver *Figura 5*).

Figura 5.

Zona de incidencia de los frentes de las FARC-EP en Urabá



Nota. Elaboración propia, 2023.

Es interesante, como se observa en la Figura 5, que las fronteras político-administrativas que se han impuesto institucionalmente para distinguir a un municipio de otro o a un departamento de otro, son desbordados por la concepción de las FARC-EP, quienes han construido territorialidades de facto que los excede y que se han configurado considerando los límites naturales y la geografía en torno a las dinámicas bélicas, esto es, a la posibilidad de conectar territorios de importancia, de replegarse hacia lugares de su dominio o la salida hacia nuevas áreas.

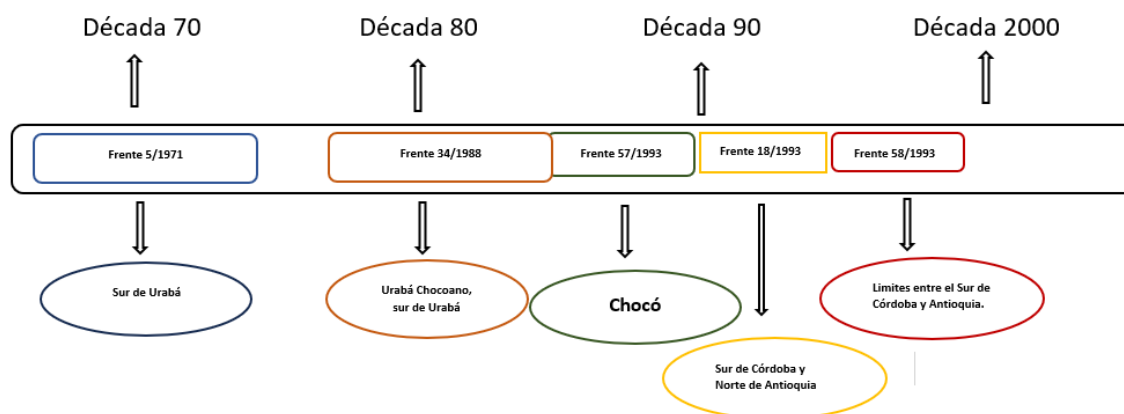
Existe una correspondencia entre las Figura 4 y Figura 5, en la medida en que, dan cuenta de que la incidencia inicial de las FARC-EP en Urabá se dio en la parte sur y centro, en donde el Frente Quinto estuvo hasta el desarme entre 2016 y 2017. Durante esta investigación, se plantea la ampliación del área de incidencia de las FARC-EP, que, respecto al planteado por García y Aramburo, da cuenta de la cooptación de un espacio que antes de los 90 era del dominio del EPL,

reafirmando como históricamente la salida o ingreso de un nuevo actor a un contexto determinado implica transformaciones que derivan en reconfiguraciones socioespaciales.

Es a partir de la década de 1990, época que coincide con la desmovilización del EPL y la llegada a esta región de los grupos paramilitares cuando se presenta una mayor expansión de las fuerzas de las FARC en Urabá, con la creación en 1993 de los Frentes 57, 58 y 18. A continuación, en la Figura 6 se presenta en forma sintética la información recopilada de los comparecientes en el *Caso 04* ante la JEP, en los que se dio cuenta de la incidencia territorial que los bloques de las FARC-EP con presencia histórica en el “Gran Urabá”.

Figura 6

Línea del tiempo de la conformación de los frentes de las FARC-EP.



Nota. Elaboración propia, 2024.

-Territorialidades paramilitares, 1988-2007.

A finales de la década de los 80, iniciaron las negociaciones entre el gobierno de César Gaviria y el Ejército Popular de Liberación-EPL-, lo que derivó en 1991 en un acuerdo que llevó a la desmovilización de esta organización guerrillera y del cual resultó la conformación del Movimiento Político Esperanza, Paz y Libertad, para garantizar la participación política y no armada de quienes hicieron parte del EPL.

Según el texto, *Las contribuciones a la verdad. Urabá: Laboratorio de guerra y paz (2021)*, en el marco de esta desmovilización se creó un grupo disidente que nació primero en respuesta a la falta de garantías para el cumplimiento del acuerdo, y segundo, a la pretensión de los disidentes

del EPL de defenderse ante los ataques cometidos por las FARC-EP, quienes habían arremetido contra los excombatientes argumentando “traición a la revolución”. En medio del recrudecimiento de las tensiones entre estos dos grupos guerrilleros, la indiferencia del gobierno y una inoperancia institucional al no otorgar la protección necesaria a los desmovilizados se dio al finalizar la década del ochenta, la entrada por el norte de Urabá, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), luego denominadas, Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, comandadas por Fidel Castaño.

La conformación de los grupos paramilitares, según (Uribe de Hincapié, 1992), se dio por tres razones principales. En primer lugar, surgieron como una reacción autodefensiva de los propietarios de grandes y pequeños terrenos, quienes buscaban poner fin a la presión y extorsión ejercida por los grupos guerrilleros. En segundo lugar, debido a las necesidades de grupos dedicados al narcotráfico, que también se declararon anticomunistas y requerían control territorial, lo que los llevó a enfrentarse a los grupos insurgentes para controlar militarmente la región. En tercer lugar, se formaron grupos al servicio del Estado, con el objetivo de lograr el control de la región.

Según Cruz (uno de los excombatientes compareciente), en la indagatoria ante la JEP, el paramilitarismo llega, cuando hay una fuerza más que militar, política y de izquierda desplegada en Urabá. Se tienen alcaldías, y muchos políticos de la Unión Patriótica (*Versión colectiva del Frente 5 de las Farc- EP en el Caso 04 (Urabá) Junio 17 de 2021*, 2021). La inmersión de un grupo armado, con una ideología radicalmente contraria a un contexto como este, agudizó la guerra frontal y acrecentó el nivel de masacres (La Chinita, masacres en las haciendas Honduras y La Negra) en las que se asesinaron combatientes de las guerrillas, el ejército, las autodefensas, y se perdieron vidas de la sociedad civil (campesinos, comunidad indígena, sindicalistas, líderes políticos y comunitarios), esta exacerbación del conflicto ocasionó, además, el desplazamiento de cientos de personas hasta dejar, incluso, sectores deshabitados (*Frente 5 de las Farc, protagonista de la guerra*, 2012). Según explicó Gerardo Vega:

Ahí empezó un nuevo momento para la guerrilla. Las FARC comenzaron a actuar muy fuerte en lo militar desde el norte de Urabá hacia Córdoba. Su nueva estrategia fue la consolidación del territorio, la defensa de este ante los ataques de las autodefensas y el establecimiento de grandes bases, posicionando campamentos con un mando centralizado (*Frente 5 de las Farc, protagonista de la guerra*, 2012)

Para lograr la toma de esta región, este grupo paramilitar, política y militarmente arremetió donde la guerrilla había establecido lazos sociales con las comunidades, movimientos sociales y políticos. Por otra parte, llegaron a proteger esos lugares que habían sufrido hasta entonces los ataques más frontales realizados por las guerrillas, efectuando así la estrategia de guerra que Carl Schmitt, en el texto, *El concepto de lo político* (Schmitt, 1932), denominó amigo-enemigo⁹, esto es, atacar a los amigos de la guerrilla y proteger a los enemigos de esta para convertirlos en sus propios aliados.

Por otra parte, en respuesta a su proyecto económico, controlaron inicialmente y con el fin de lograr establecer allí los corredores para el narcotráfico y/o incorporar en esos territorios la estructura productiva nacional, las definidas antes como territorialidades étnicas: resguardos y territorios colectivos (García et al., 2011).

La década entre 1988 y 1998 fue una de las de mayor violencia en Urabá. Luego de haberse establecido en la región, los objetivos militares y políticos de esta organización paramilitar, inició una nueva lógica de guerra. A mediados de la década del 90 estos ingresaron al eje bananero, e iniciaron desde el norte (estaban asentados en los municipios de Valencia (Córdoba) y Arboletes (Antioquia) desde 1992 y 1993) haciendo “un barrido” hacia el centro. Esto, implicó por supuesto una lucha por el dominio territorial entre las FARC-EP y esta nueva fuerza. Las entonces denominadas ACC, iniciaron con el asesinato de guerrilleros, simpatizantes, colaboradores, milicias bolivarianas, hasta que consiguieron el repliegue de la guerrilla hacia los confines de la región. La incursión de estos a Urabá la describen bien, García y Aramburo:

Este arrasamiento de norte a sur, acompañado de métodos destinados a provocar el miedo, el silencio y la lealtad de la población, además de sus estrategias militares, cambió la distribución de los actores armados en la geografía de la guerra (las FARC fueron arrinconadas) y agredió de manera violenta los distintos modos culturales de concebir, vivir y reproducir la vida de cinco etnias indígenas (zenú, tule, embera-chamí, embera-katío y waunan), de afrocolombianos de los territorios del andén del Pacífico, de mestizos sabaneros y de numerosas gentes del interior, es decir, cambió las pautas de

⁹ Para Schmitt, el enemigo no debe entenderse en términos morales o éticos, sino como un oponente existencial que representa una amenaza existencial para uno mismo o para la comunidad política. La relación amigo-enemigo implica una distinción clara y definida entre aquellos que son considerados dentro del grupo político (amigos) y aquellos que están fuera o en contra del grupo (enemigos) (Schmitt, 1932).

comportamiento y control de las territorialidades bélicas insurgentes y socioculturales. (García et al., 2011)

En el mismo sentido, en el documento de la Comisión de la Verdad, *Validación del informe analítico sobre el paramilitarismo en el Urabá Antioqueño, el sur de Córdoba, el bajo Atrato y el Darién*, Mario Agudelo Vásquez, exalcalde de Apartadó y exdiputado de Antioquia, describe el proceso de expansión y consolidación de las ACCU en el período de 1994 y 1997, así:

El casi absoluto control que llegaron a tener las ACCU en el norte de Urabá y el Eje Bananero, en una región que por años estuvo dominada en su mayor parte por la guerrilla, fue fruto de una estrategia que requirió la atención de varios frentes de ataque y la incorporación de toda una variedad de actores armados y población civil. Las ACCU buscaron en sus inicios controlar el Eje Bananero y la salida al mar en Urabá. Eliminar la guerrilla, traficar drogas y poder adquirir terrenos para ganadería, producción de banano y otro tipo de cultivos, hicieron del control de esta zona el objetivo principal de los paramilitares. (Validación del informe analítico sobre el paramilitarismo en el Urabá Antioqueño, el sur de Córdoba, el bajo Atrato y el Darién, s. f.)

Esta organización se dividió en varios frentes que dieron lugar a las estructuras conocidas como los Bloques Bananero, Elmer Cárdenas (1998) y Héroes de Tolová, grupos que ejercieron la violencia paramilitar en la región entre 1994 y 2006 (Validación del informe analítico sobre el paramilitarismo en el Urabá Antioqueño, el sur de Córdoba, el bajo Atrato y el Darién, s. f.)

En medio de esta tensión entre las FARC-EP y las AUC, el gobierno colombiano fue reafirmando su presencia militar en la zona. En 1993 se instauró el Comando Especial Contraguerrilla que se enfrentó en Turbo con el Frente Quinto. Ese mismo año se crearon nuevas unidades de Fiscalía regional y del Cuerpo Técnico de Investigación en Apartadó, Turbo, Valencia, Unguía y Carepa.

En la perspectiva de García y Aramburo, este fue un grupo paramilitar y narcotraficante que se escudó en la lucha contrainsurgente y en la defensa del Estado y del bienestar económico y agroindustrial pero que, en realidad, iba por el dominio de una región, que como se ha dicho ya, es rica en recursos naturales y que posee una ubicación estratégica, tanto para la economía como para la guerra pues posee múltiples conexiones.

En términos comprensivos, puede decirse luego de lo enunciado hasta aquí que, durante la última mitad de la década de los 80 y la de los 90, hubo una reconfiguración socio militar de esta

región, debido, primero a la desmovilización y tensión entre el EPL y las FARC-EP, segundo, a la incorporación de un nuevo actor beligerante en la zona y sus estrategias de dominio territorial, y tercero al robustecimiento de las fuerzas militares estatales, cuestiones que en su conjunto hicieron que las FARC-EP perdieran dominio territorial y se replegaran hacia el sur de la región (el Atrato medio chocono, Juradó, Mutatá, Riosucio y hacia la Serranía de Abibe).

Bajo esta nueva dinámica política y militar en la región entre el año 2002 y hasta el 2006 se dio el proceso de negociación, desarme, desmovilización y reintegración de las estructuras paramilitares. Este fue un proceso que, según el Informe de la Comisión de la Verdad, tuvo varias controversias e irregularidades, pues estuvo marcado por tensiones al interior de las AUC.

Según lo sugerido en el mismo informe, compilado en el marco del proceso de la Comisión, la forma como se desarrolló el proceso de desmovilización de las AUC no contribuyó a que se desmantelaran las dinámicas de conflictividad y violencia en el territorio. Así se expresa de forma textual:

Por el contrario, propició que los espacios controlados por las estructuras que se desmantelaron inicialmente fueran cooptados otras estructuras de las AUC que adelantan negociaciones o por nuevas organizaciones que se conformaron por quienes no decidieron hacer parte del proceso (Validación del informe analítico sobre el paramilitarismo en el Urabá Antioqueño, el sur de Córdoba, el bajo Atrato y el Darién, s. f.)

2.1.3. Territorialidades de paz.

Aunque el interés aquí es mostrar cómo a partir de los acuerdos establecidos entre el gobierno colombiano y los grupos armados en Urabá han emergido nuevas territorialidades de paz, lo que nos sitúa en una temporalidad más reciente (2007-2012-2016), en este apartado es importante señalar que las territorialidades de paz son configuraciones socioespaciales que han estado presentes a lo largo de la historia dentro del conflicto armado en Urabá. Sostenidas en la capacidad de resistencia, organización y valentía de las comunidades, que son, en todo caso, experiencias que expresan las diversas formas en que es posible relacionarse con el espacio y en esa medida responder al relacionamiento entre las diversas territorialidades.

Las territorialidades de paz han sido producidas por las familias y comunidades que se resistieron a la participación en los grupos armados, o a los procesos de desplazamiento forzado,

también por los y las campesinas que se mantuvieron en las actividades productivas tradicionales (agricultura, minería artesanal), en las organizaciones de la sociedad civil que permanecieron y las que se conformaron en respuesta a las violencias ejercidas por los distintos grupos armados.

Según García y Aramburo, los procesos de resistencia civil en Urabá responden a una “lógica de acción colectiva que se orienta contra toda forma de poder, explotación u opresión. Esta lógica es agenciada por actores colectivos y se expresa no bajo una, sino bajo las más variadas formas de acción colectiva” (García et al., 2011:434). Esta es también la expresión en autonomía, capacidad de gestión y de construcción de una identidad ciudadana y de lo colectivo que supera las tensiones bélicas.

En medio de las tensiones vividas en Urabá por la presencia de diversos actores armados en disputa por el dominio territorial y en respuesta a esto, las poblaciones que se resistieron a los procesos de desplazamiento y aquellos que retornaron iniciaron con procesos en pro de la reconstrucción del tejido social y la creación y fortalecimiento de las formas de relacionarse con la institucionalidad que proponía la superación de las diferencias con el estado colombiano (García et al., 2011). Algunos de los ejemplos de esas experiencias de resistencia civil organizada son la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, las Zonas Humanitarias¹⁰ del Curvaradó y Jiguamiandó, La Organización Campesina del Bajo Atrato (Ocaba) y la Asociación de Campesinos del Municipio de Riosucio (Acamuri), la Comisión Negociadora y el Comité de Representantes de las comunidades y por supuesto las Juntas de Acción Comunal.

En tiempos más recientes y como resultado de los acuerdos (Estado-AUCC y Estado-FARC-EP) y la desmovilización de los combatientes que conformaban las organizaciones armadas que controlaban o tenían el dominio sobre la dinámica económica, bélica, social y política de zonas estratégicas, la no ocupación de esos espacios por la institucionalidad, y las irregularidades dentro de este proceso antes comentadas, se dio pie a que se generaran nuevos grupos posdesmovilización que han mutado con el tiempo y continúan haciendo presencia en Urabá, en la actualidad con otros nombres, estructuras, y formas de financiación.

¹⁰ Vale la pena realizar una precisión sobre una distinción de fondo entre la comunidad de paz y las zonas humanitarias, dos formas de resistencia presentes en Urabá. Mientras en la primera, es la propia comunidad la que decide ser neutral y abstenerse de declarar su territorio como tal, debido a los habitantes para controlar situaciones externas, en las últimas (zonas humanitarias), son las comunidades quienes demarcan un territorio específico con el fin de mantenerlo libre de la guerra y expresar su deseo de apartarse de ella (García y Aramburo, 2011).

En concreto, pese a la desmovilización de las AUC, luego de 2006 en Urabá continuó la tensión y disputa por el poder y el dominio territorial entre varios actores armados, esto es, las FARC-EP, los grupos disidentes de las AUC denominados ahora como Clan del Golfo, las nuevas bandas criminales asociadas al narcotráfico, y las fuerzas estatales (*Plan Marco para la Paz: un paso adelante, dos atrás*, 2017).

En el marco de esta nueva dinámica del conflicto, en 2012 inician públicamente las negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia (expresidente Juan Manuel Santos), las cuales dieron paso al proceso de paz del que derivó la firma del AFP, en noviembre de 2016. En este documento, se consignaron 6 puntos, como reflejo de los acuerdos primarios que deberían garantizar un período de posacuerdo que conduzca hacia una paz perdurable.

Punto 1- Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral.

Punto 2- Participación política: apertura democrática para construir la paz.

Punto 3- Fin del Conflicto.

Punto 4- Solución al problema de las drogas ilícitas.

Punto 5- Acuerdo sobre las víctimas del conflicto.

Punto 6- Implementación, verificación y refrendación (*Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*, 2016).

Considerar la idea de paz planteada en el AFP, que parte del reconocimiento de las particularidades territoriales y de la relevancia de la participación y la capacidad de incidencia que deben tener las comunidades en la implementación del acuerdo, da cuenta de una visión territorial y si se quiere socioespacial del país. El profesor Montoya, como lo han sugerido múltiples autores en décadas de estudio sobre el conflicto en este país, advierte que, esta es, además, una visión que pone al “problema de la tierra en Colombia” como una de las causas raíz del conflicto interno (Montoya, 2023). Según él mismo, esté AFP y la visión de una paz territorial que lo sustenta aparece como un esfuerzo por ampliar la discusión sobre: a) la tenencia de la tierra, b) las condiciones geográficas e históricas particulares de las regiones afectadas por el conflicto armado como factores condicionantes de las acciones a implementar para construir paz (Montoya, 2023).

Al igual que ocurrió posterior a la desmovilización de las AUC en la primera década de los 2000, en el 2016, luego de la firma del AFP entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, en Urabá se dio una modificación en el escenario bélico que podría ser comprendido como un nuevo

ciclo de violencias, del que hacen parte las bandas criminales, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC-.

Además de la continuación de las tensiones bélicas, en Urabá han emergido también otros tipos de procesos de convivencia que hacen más grandes esas territorialidades de paz presentes en la región desde los años 90, esta vez, teniendo como protagonistas además de las múltiples organizaciones de víctimas a los grupos de excombatientes de las FARC-EP. En Mutatá y Dabeiba se han construido nuevos lugares transicionales creados para la reincorporación a la vida civil de los excombatientes, el ETCR Llano Grande, la NAR San José de Apartadó, Godó, el aETCR Mutatá y la NAR San José de León, alrededor de los cuales se han construido no solo procesos políticos, sociales y económicos que han reconfigurado esas dinámicas de guerra y van en pro del sostenimiento del posacuerdo, sino que también han permitido la consolidación de redes sociales que evocan un sentido de comunidad entre los diversos actores presentes en esta región, esto es, ha aportado a la reconciliación, transformación y consecución de una vida en convivencia.

Así pues, la configuración histórica de Urabá ha estado altamente influenciada por la presencia del conflicto armado y los múltiples actores armados ilegales y legales que se han disputado el dominio territorial. Sin embargo, para el objeto de esta investigación, que centra su interés en los procesos de construcción de paz, y en cómo las estrategias derivadas del AFP han generado reconfiguraciones socioespaciales, este contexto permite realizar un análisis entendiendo la potencia que en la producción del espacio tienen las prácticas sociales, esto es, cómo la capacidad de imaginar y construir unas geografías para la paz, mediante la construcción de lugares para la transición política de los excombatientes como los que aquí se abordan, logran transformaciones sutiles y también estructurales, que como las de la guerra no son homogéneas.

2.2. Mutatá: entre las geografías de la guerra y los lugares transicionales.

Considerando que los lugares transicionales a analizar aquí se encuentran ubicados específicamente en este municipio, se hace necesario destacar su especificidad alcanzando una mejor profundidad y aportando algunos elementos para comprender la relevancia de la ubicación estratégica de estos espacios y su incidencia en la emergencia de nuevas territorialidades de paz y en la reconfiguración socioespacial.

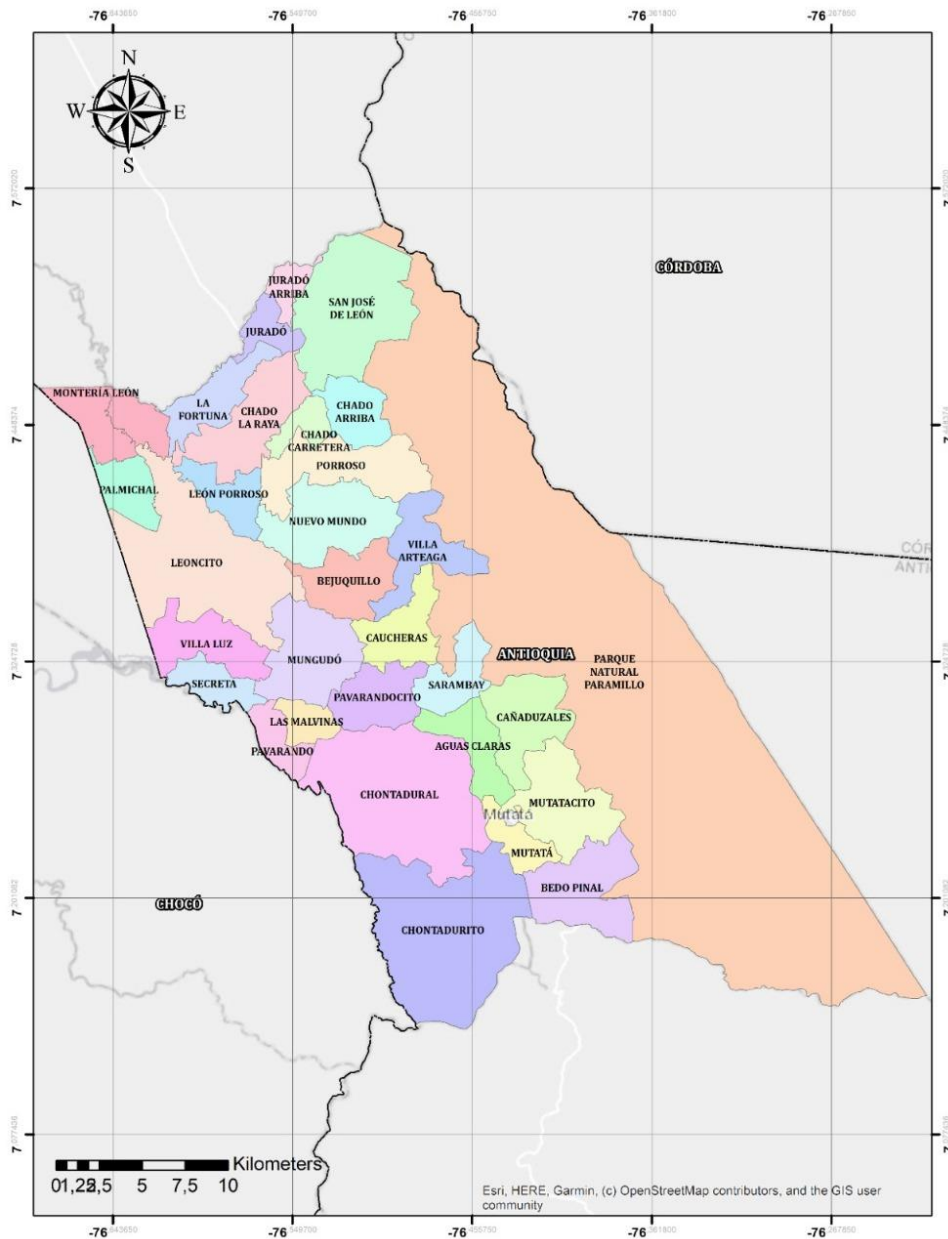
¿Por qué Mutatá? Es un interrogante que podría decirse orgánico de esta investigación, pues fue emergiendo en la medida en que se profundizaba en el análisis y vinculaba las características propias de estos espacios con el contexto complejo de Urabá, lo cual como se verá más adelante aportó a la generación de análisis socioespacial.

2.2.1. Municipio Mutatá.

Mutatá es uno de los municipios del eje bananero del Urabá antioqueño. Posee una ubicación geográfica particularmente valiosa: limita al norte con el Distrito de Turbo, al oeste con Chigorodó y al oriente con Ituango y al sur con Dabeiba y con el departamento del Chocó (ver **Figura 7**). Comparte fronteras con el departamento de Córdoba, específicamente con Tierralta, y el departamento de Chocó en el municipio de Riosucio, lo que le otorga acceso tanto al océano Atlántico como al Pacífico.

Figura 7

Mapa oficial del Municipio de Mutatá.



Nota. Elaboración propia, Fuente IGAC, 2024.

Dentro de sus límites geográficos se encuentra en el borde oriental el Parque Nacional Natural Paramillo, en donde se localiza la Serranía de Abibe. Políticamente administrativamente está

compuesto por cuarenta y dos veredas y cuatro corregimientos: Pavarandó Grande, Pavarandocito, Bejuquillo y Bajirá. Ver **Figura 7**.

Demográficamente, según las proyecciones del DANE para el 2023, en Mutatá había 14.904 personas de los cuales 7.544 (50,6%) son hombres y 7.360 (49,4%) mujeres. Además, según la pirámide poblacional, en este municipio hay una base de niños, niñas, adolescentes y jóvenes amplia que da cuenta del relevo generación a corto y mediano plazo, además, sugiere en la proyección que, para el mismo año, allí el 60,3% del total de la población se encuentra dentro de la edad productiva (de 12 a 64 años), la cual dinamiza económicamente el municipio.

Mutatá está conformado por una diversidad étnica que configura su dinámica sociocultural, relacionada con las distintas fases de colonización que todavía hoy experimenta nuevos ciclos. Según los datos del DANE para 2023, se identifica una población de 1.312 de indígenas, en su mayoría del pueblo Emberá Eyabida, la cual representa aproximadamente el 14% del municipio, mientras que 1.447 se reconocen como afrodescendientes que representa el 15%, para un total de 2.761 personas de comunidades étnicas que representan el 28.55% de la población total.

Se ha dado un crecimiento poblacional en las últimas décadas que ha aumentado la cantidad de habitantes asentados en la zona urbana la cual representa el 39.3%. Según el Plan de Desarrollo Municipal de Mutatá, *Mutatá se transforma* (2020-2023), en los últimos años se ha venido presentando una disminución significativa de la población rural, y un incremento en los núcleos poblados y municipios limítrofes, en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades laborales. Sin embargo, este sigue siendo un municipio en el que la mayoría de la población, el 60,7%, permanece en la zona rural.

El hecho de que en la zona rural se haya estado incrementando el uso de predios de gran extensión para haciendas, ha modificado las prácticas económicas tradicionales de la agricultura y minería tradicional, por lo que pequeños y medianos propietarios han perdido la propiedad de las tierras.

En el texto *Expropiación y conflictos por el uso del suelo en el municipio de Mutatá, subregión de Urabá* (Castañeda & González, 2016), sugirieron que la economía de Mutatá presenta una dualidad marcada por la coexistencia de actividades económicas a gran escala y economías tradicionales de pequeña escala. A inicios del siglo XIX el caucho y la explotación maderera, de tagua y raicilla fueron actividades importantes para la configuración del municipio. Posteriormente esta actividad fue reemplazada por la plantación de extensos monocultivos de banano. Mutatá

además se ha vinculado con los proyectos económicos regionales consolidados tras la construcción de la Carretera al Mar, las actividades extractivas de distintos recursos naturales, y en los últimos lustros, con las infraestructuras viales y portuarias que se consolidan en Urabá.

En Mutatá se desarrolla la inversión de empresarios en actividades como la minería a gran escala y proyectos geoestratégicos como vías de conexión comandada por agentes privados que realizan una explotación intensiva del suelo y subsuelo. Por otro lado, se mantienen economías tradicionales de comunidades campesinas y étnicas basadas en la agricultura, la pesca y la explotación de madera a pequeña escala. Estas actividades que son fundamentalmente de subsistencia para muchas comunidades locales, se han visto desplazadas por la agroindustria, la minería y las infraestructuras de transporte provocando tensiones sociales y conflictos ambientales por sus diversos impactos (Castañeda & González, 2016).

El caso del corregimiento Pavarandó Grande, ha sido históricamente representativo por las afectaciones ecológicas, étnicas y sociales producidas por la agroindustria, la explotación de materiales para construcción, la minería, que se han superpuesto a las afectaciones causadas a las comunidades en el marco del conflicto armado de las últimas tres décadas. En este corregimiento y sus distintas veredas conforman un circuito minero que vincula a otros municipios de frontera como son Dabeiba y Murindó en Antioquia y Riosucio y Carmen del Darién en Chocó. Estos últimos municipios cuentan con la mayoría de las tierras tituladas en territorios colectivos étnicos, sobre las cuales se han establecido concesiones de explotación, entre ellos, como el proyecto Mandé Norte de la empresa multinacional Muriel Mining Company.

En Mutatá ha habido presencia de grupos guerrilleros y paramilitares que en la lucha por el control territorial y los recursos naturales han generado violencias, desplazamiento forzado y otras violaciones de los derechos humanos. A inicios de la década del 70, se creó el Frente Quinto de las FARC-EP en San José de Apartadó, ubicación estratégica cerca del piedemonte de la Serranía de Abibe, que le daba además la posibilidad para avanzar hacia Turbo, Mutatá, Riosucio, Peque e Ituango. En Urabá la guerrilla EPL ejercía control al norte de la región, mientras que el dominio de las FARC-EP se consolidaba inicialmente en los límites con Chocó (Acandí, Riosucio y Unguía) y el sur en Chigorodó, Mutatá, Murindó y Vigía del Fuerte.

Según García y Aramburo (2011), el mayor número de eventos armados para Mutatá se presentan entre 1995 y 1998. En 1998 se presentaron 15 eventos armados, casi el doble de los

reportados en el período de mayor sevicia del conflicto en la zona centro de Urabá (1992-1996), cuando la cifra fue de 7,6. (véase la

Figura 8). Las violencias acontecidas en este municipio han sido múltiples: desaparición forzada, violencias sexuales, secuestros, asesinatos y el desplazamiento masivo. Las tierras de Mutatá y los demás municipios de Urabá se han visto afectados por el conflicto armado debido a tres situaciones,

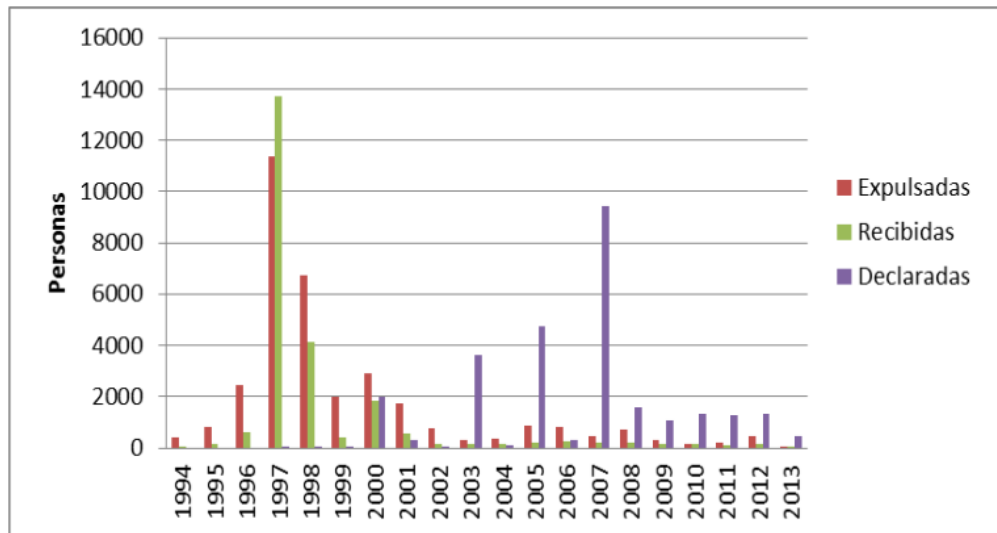
Según (García et al., 2011): a) *especulación*, esto es la adquisición estratégica para el comercio del futuro. b) *producción*, para la explotación agrícola, y c) *control* dada la importancia que tienen estas propiedades para las actividades de contrabando de armas, comercio de drogas y de acceso a los sitios de transporte y embarque de estas.

La relevancia a nivel económico y político de esta región en el marco de la guerra y la economía extractiva, ha hecho que entre 1997 y 2005, Urabá se configure como la segunda región de Antioquia, después del Oriente, con mayores índices de desplazamiento forzado y de tierras abandonadas (García et al., 2011). Urabá presentaba 3.336,4 hectáreas abandonadas particularmente en los municipios de Mutatá, Apartadó y Turbo, extensión equivalente al 15,2% del total de tierras abandonadas en el departamento, generando la concentración de latifundios mientras disminuyó la propiedad en manos de medianos y pequeños propietarios. Según estas autoras, los latifundios pasaron de representar el 24,2% en 1995 al 35% para 2004, coincidiendo

con el período de predominio del control social y espacial del paramilitarismo (García et al., 2011).

Figura 8

Dinámica del desplazamiento en Mutatá 1994-2013.



Nota. Elaboración propia a partir de los datos de la Red Nacional de Información, 2024.

Según esta misma fuente, García y Aramburo, afirman que para finales de los 90 e inicios de los 2000, los paramilitares estaban ya consolidados en Urabá, y las FARC-EP se encontraban replegadas en los límites con Chocó, en el Urabá chocoano al otro lado del Atrato, el sur de Urabá cerca a la Serranía del Abibe, y en el Nudo del Paramillo. Sin embargo, dada la relevancia para la estrategia militar de los grupos confrontados y las economías ilícitas, estos municipios experimentaron la crudeza de las confrontaciones entre las FARC-EP, el Ejército y los paramilitares.

En paralelo a los hechos de violencia acontecidos en Mutatá, este municipio durante 1997 fue el mayor receptor de campesinos y grupos étnicos desplazados principalmente de municipios como Riosucio y otros del Atrato y el Urabá chocoano (García et al., 2011). Con la huida de las primeras poblaciones, otras comunidades continuaron el éxodo con la intención de llegar a Mutatá y negociar allí con el gobierno un retorno con garantías de seguridad. Sin embargo, el Ejército frenó este éxodo en Pavarandó, donde terminaron por asentarse unas 49 comunidades.

Según los datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las víctimas (ver Gráfico 1), en Mutatá para el 2016 el 93% de la población es reconocida como víctima del conflicto armado, registrando 19.497 víctimas. Según el PDM Mutatá 2020-2023, el hecho victimizante de mayor ocurrencia en este municipio ha sido el desplazamiento forzado:



Gráfico 1 Hechos victimizantes en Mutatá 2020-2023.

Fuente: Información del PDM, 2024.

Respecto a las implicaciones socioespaciales producidas por el desplazamiento, García y Aramburo plantearon:

Los cambios demográficos que originó el conflicto se reflejaron en el decrecimiento del campo y en el engrosamiento de las cabeceras municipales, que son las que constituyen la territorialidad urbana, cuyas características y complejidad se fueron incrementando en la medida en que se sucedían las distintas fases del conflicto. El desplazamiento cambió la composición demográfica de muchos de los municipios del gran Urabá, ejerció fuertes presiones sobre la disponibilidad de servicios públicos y planteó un problema social y político (García et al., 2011).

En Mutatá el desplazamiento forzado de comunidades rurales llevó al aumento de la población en la cabecera municipal y otros centros poblados, generando mayor presión sobre los servicios públicos y la infraestructura local, profundizando las desigualdades sociales para los sectores campesinos y étnicos.

En la actualidad, derivado del AFP en Mutatá, la presencia de firmantes de paz ha implicado la conformación de nuevas territorialidades de paz. Allí se encuentran ubicados tres lugares transicionales para la reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las FARC-EP: las NAR San José de León y Godó y el aETCR Mutatá. Según el Séptimo Informe del Instituto Kroc, para el 31 de diciembre de 2023, en Urabá había 423 firmantes del acuerdo de paz. De éstos, 126, el 38%, permanecían en los aETCR de Mutatá (64) y Dabeiba (62), y los 261 restantes, el 62%, estaban distribuidos en siete municipios de la región (Echavarría Álvarez, 2022).

En conclusión, el análisis del contexto de Urabá y Mutatá revela como las geografías de la guerra establecidas desde la década de 1960 en esa región han ido reconfigurándose, por la promesa de la paz y la producción de estos lugares como transicionales, que si bien, han estado tejiéndose en el marco de constantes tensiones debido a la influencia continua de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las economías ilegales y las prácticas extractivistas, todo estos, factores que amenazan la estabilidad y continuidad de la implementación del proceso de paz, pone en vilo el cumplimiento pleno de los derechos de las víctimas del conflicto armado y del proceso de reincorporación de los excombatientes, han permitido la configuración de redes sociales y de prácticas de paz desde las que se han configurado unas nuevas territorialidades de paz.

Capítulo 3. El encuentro: un análisis socioespacial de los lugares transicionales en Mutatá



Fotografía 4 Encuentro para realizar actividades de aseo y embellecimiento-Parque Becuarandó

Fuente: registro propio, 2024.

En este capítulo, nuevamente se realizó una “intersección” entre la fundamentación conceptual expuesta antes y la información construida a partir del conocimiento de estos lugares transicionales, para lograr una descripción que le permita a quien lee, a partir del relato, reconocer algunos aspectos claves identificados en la Nueva Área de Reincorporación (NAR) San José de León y el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (aETCR) Mutatá, nombrado generalmente como Becuarandó. Para esto, me permito, como parte de la experiencia metodológica valerme no solo de la aplicación de los instrumentos para la recolección de información como lo son los recorridos de observación, las entrevistas efectuadas y las conversaciones informales con excombatientes y funcionarios, sino también de la posibilidad que tuve de experimentar estos lugares con mi propia corporalidad, están puestas pues, en las siguientes líneas, las consideraciones surgidas de mi experiencia sensorial.

Asistir a estos lugares, me permitió ver las dinámicas propias de cada uno, observar el tipo de interacciones que suceden entre quienes los habitan, escuchar la música que prefieren los excombatientes y sus familias, hacer parte de algunas de las conversaciones que sostienen a diario, por fuera de los espacios educativos, políticos u organizativos liderados por las distintas instituciones presentes en los lugares, también, logré notar los silencios que se prolongan ante ciertas preguntas, y las reflexiones repentinas que se van dando cuando entre ellos se habla sobre la idea del futuro, que para la mayoría, está cargado de incertidumbres. Participé de algunas actividades comunitarias que hicieron que por horas me sintiera parte de un objetivo común: el de embellecer el parque de Becuarandó, o resignificar las masculinidades en San José de León, cuando asistí al taller realizado por la Organización Juntos Construyendo Futuro. Pero, en retrospectiva, hubo algo que me atravesó todo el tiempo, fue sentirme de afuera, de otro lugar. Estar allí implicó sentirme observada, seguida con la mirada y analizada por mis interlocutores, sensaciones que reflejan que se ha constituido una idea de “nosotros” de la que yo como investigadora no hago parte.

La identidad colectiva construida desde “el monte” entre los excombatientes y ahora entre ellos y sus familias puede percibirse viviendo el lugar, se ha dado allí una pausa en el movimiento constante que implicó la guerra, un alto en el camino que como lo sugiere (Tuan, 1972) ha contribuido a la configuración, incluso en medio de la transición política, social y económica de sentidos de pertenencia e identidad, lo que ha configurado aquí, sin duda, un sentido de lugar.

En las caracterizaciones de la NAR y el aETCR, se reflejan también las experiencias de los “otros”, que me ayudaron a reconocer estos lugares desde la perspectiva socioespacial y a trazar una línea de tiempo que me permitió reconstruir la historia de conformación y transformación de estos desde 2016 hasta hoy. Aquí se encuentran mis interpretaciones y algunas consideraciones planteadas dentro de las tesis, investigaciones, documentos institucionales, notas periodísticas, y las indagatorias revisadas, además de la información construida a partir de las entrevistas realizadas a expertos, particularmente a funcionarios del gobierno local y departamental, la institucionalidad nacional e internacional, la academia y la comunidad aledaña. Fue a partir del encuentro de todas estas fuentes de información, que se realizaron las descripciones y reflexiones planteadas en este capítulo, como último paso metodológico de esta investigación.

3.1. Lugares transicionales: ZVTN, ETCR y NAR

Por lugares transicionales entiendo los lugares construidos en el marco del AFP con el objetivo de posibilitar la transición política y hacia la vida civil de los excombatientes. En medio de la concertación de los acuerdos entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, y para garantizar el cumplimiento del AFP que incluye la reincorporación económica, política y social de los excombatientes. Estos espacios, han variado tanto nominal como funcionalmente (y continuará ocurriendo) durante los 7 años de posacuerdo, de Zonas Veredales Transitorias de Normalización a Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y Nuevas Áreas de Reincorporación. A continuación, una explicación sobre el objetivo de su conformación y la ruta de transformación.

- **Zonas Veredales Transitorias de Normalización.**

En el subpunto 2 del punto 3 del AFP, se acordó el establecimiento de 20 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN)(«Zonas Veredales Transitorias de Normalización», s. f.)¹¹ y 7 Puntos Transitorios de Normalización (PTN)¹². Estos, como puede observarse en la

Figura 9, se distribuyeron en 14 de los 32 departamentos de Colombia. Siendo Antioquia en el que se instala una mayor cantidad. Las Zonas veredales: Carrizal en Remedios, Llano Grande en Dabeiba, Santa Lucía en Ituango; y los Puntos de Normalización: La Plancha en Anorí y Vidrú en Vigía del fuerte. Vale aclarar que, esta fue la localización inicial, y no corresponde con la que se da en el momento en que es desarrollada esta investigación.

¹¹ Según la ARN, Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización (PTN) son aquellas áreas de ubicación temporal hasta la culminación del proceso de dejación de armas; en estas se requiere contar con el talento humano necesario para la atención en salud de todas las personas allí presentes. («Plazas Zonas Veredales Transitorias de Normalización», s. f.).

¹² Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, con la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización el 15 de agosto del 2017, se iniciaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los cuales son administrados por la ARN. En los aETCR se realizan actividades de capacitación y reincorporación temprana con las cuales se pretende facilitar las fases iniciales de adaptación de los miembros de las Farc-Ep a la vida civil. De igual forma, se pretende que con estas acciones se pueda aportar positivamente a las comunidades aledañas («Agencia para la Reincorporación y la Normalización», s. f.).

Figura 9

Distribución ZVTN y PTN.



Nota: Biblioteca Abierta del Proceso de Paz colombiano, s. f

Aunque hasta aquí, por ser la región de interés, se ha hecho solo alusión a la presencia de las FARC-EP en Urabá, la incidencia de esta guerrilla se desplegó por gran parte de Antioquia, convirtiéndolo en uno de los departamentos, con mayor victimización por sus formas de violencia y control social y territorial. Todo esto explica, en parte, la cantidad de lugares transicionales instalados allí. El establecimiento de estas zonas de concentración en esta región permitió que una gran cantidad de combatientes con presencia en áreas cercanas iniciaran con el proceso de desmovilización y reintegración; logísticamente, esto aportó a que, en varias partes de la región tanto las comunidades locales como las administraciones municipales se dispusieran a recibir a los excombatientes tras la dejación de las armas.

Urabá al igual que en Anorí (Norte) y Remedios (Nordeste de Antioquia), poseen una ubicación estratégica para las acciones bélicas y también unas condiciones ecológicas y sociales que viabilizan la instauración allí de grupos armados. En definitiva, y aunque estos otros dos municipios no son objeto de esta investigación y no se detallarán las condiciones que las caracterizan, vale la pena anotar que, en Antioquia, los 5 puntos definidos para la instalación de estas Zonas Veredales y Puntos de Normalización hacen parte de lo que (García et al., 2011)

precisaron como geografías de la guerra, así que, parece ser una estrategia, ahora en el posacuerdo, resignificar estas regiones, llevando allí la infraestructura de paz (Castillejo, 2017) y con ello la promoción de la emergencia de nuevas territorialidades, en este caso de paz.

Antioquia es el segundo departamento más importante a nivel económico del país (PND). Medellín, su capital, es un importante centro comercial, industrial y financiero que ha servido como polo de desarrollo para otros departamentos como Caldas, Santander y el Valle del Cauca. Es, por tanto, uno de los departamentos que mejor infraestructura y logística posee, cuestión que influyó su selección como receptor de estos lugares.

Para viabilizar el proceso de reincorporación, esto es, la puesta en marcha de las estrategias diseñadas dentro del AFP para apoyar la reintegración de los excombatientes de las FARC-EP, en el Punto 3 del acuerdo, se desarrolló la ruta a seguir para lograr el fin del conflicto, basado en el “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”. En este Punto se especifica la creación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización, los cuales tenían como objeto inicial la concentración, desarme y desmovilización de los combatientes de las FARC-EP; una vez terminada esta etapa, estos espacios dieron paso a la configuración y puesta en marcha de las estrategias de reincorporación a la vida civil como la creación de redes que posibilitaran un acompañamiento constante a los excombatientes en la proyección de construir proyectos productivos, en procesos sicosociales y de orientación vocacional y de nivelación en educación, y garantizar el acceso a servicios públicos y sociales esenciales como salud y alimentación. («Agencia para la Reincorporación y la Normalización», s. f.).

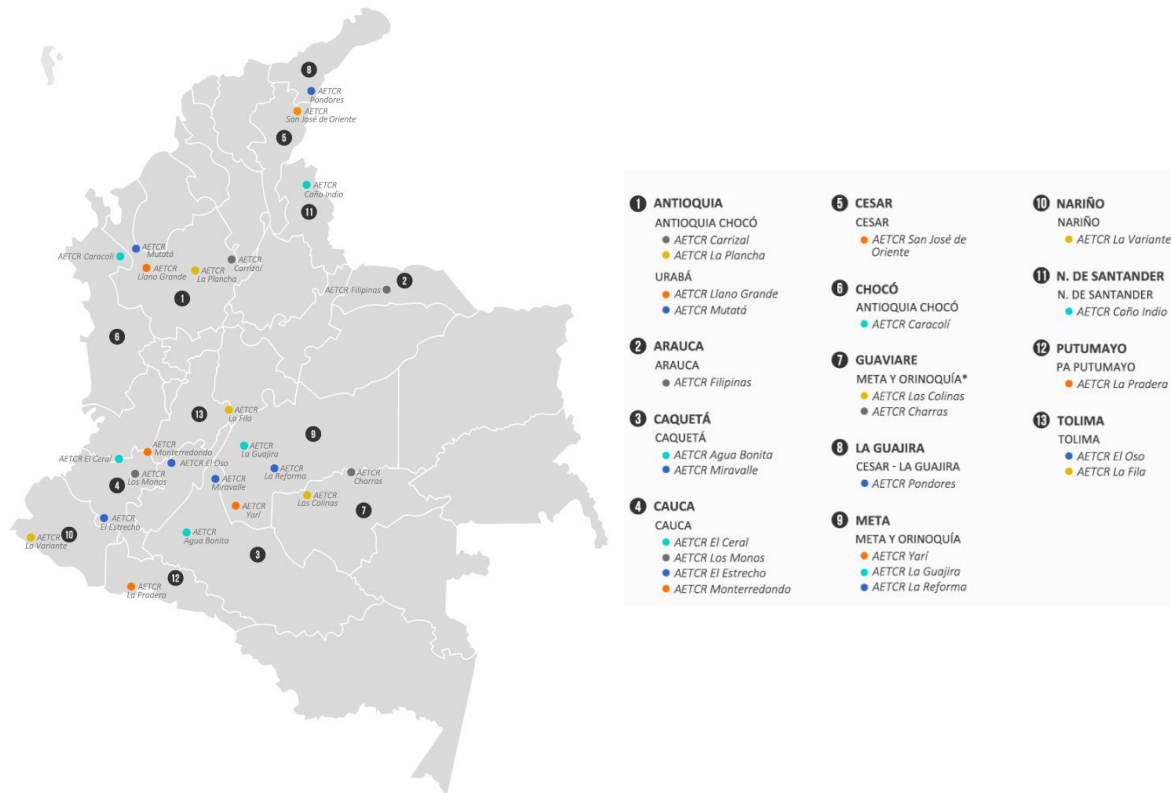
-Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Aproximadamente un año después, y como fue definido por decreto, el 15 de agosto del 2017 se dio la terminación de estas ZVTN. En este momento se le asignó un recurso individual a cada uno de los excombatientes de 2.000.000 de pesos, y se iniciaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los cuales son administrados por la Agencia para la

Reincorporación y la Normalización¹³ -ARN-. Estos se distribuyeron por el territorio nacional así (Ver Figura 10)

Figura 10

Mapa de la distribución de ETCR en Colombia



Nota. Fuente https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/mapa_etcr_prb

La nueva duración de estos ETCR fue propuesta en el marco del acuerdo con un período de 24 meses, es decir, que el 15 de agosto de 2019 terminó su figura *jurídica transitoria*. Sin embargo, según lo concebido en el marco de lo pactado durante la negociación, la finalización de este tiempo no implicaba necesariamente la desaparición o desalojo de los hasta entonces 24 espacios habitados por los excombatientes y sus familias. Para ese momento en Antioquia, 445 excombatientes seguían haciendo parte del proceso colectivo de reincorporación, según Montoya (Montoya, 2023) citando a los informes expedidos por los Ex FARC-EP, 78 excombatientes permanecían en el

¹³ La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) es la entidad de Presidencia de la República que desde 2003 acompaña y brinda asesoría permanente a quienes le apuestan a la paz y hacen tránsito hacia la vida civil, generando oportunidades que fortalezcan sus capacidades y puedan desenvolverse plenamente como ciudadanos. En: [Ruta de reintegración \(reincorporacion.gov.co\)](https://www.reincorporacion.gov.co)

ETCR de Carrizal (Remedios), 68 en La Plancha (Anorí), 114 en Santa Lucía (Ituango) y 185 en Llano Grande (Dabeiba).

La adscripción de los excombatientes a estos lugares los convirtió en beneficiarios directos de los programas y proyectos definidos en el marco del acuerdo y puestos en marcha por la ARN y otras instancias encargadas de la implementación de los demás puntos pactados. Además, los definió como objeto de protección especial por parte de las Fuerzas Armadas, se convirtieron en áreas de interés para la implementación de los proyectos contemplados en los PDET¹⁴, y se designaron como zonas priorizadas para la atención de la cooperación internacional.

En 2020, debido a la importancia para el proceso de reincorporación de esta figura jurídica, el gobierno nacional determinó que de los 24 ETCR instalados inicialmente, 13 se incluyeran dentro del ordenamiento territorial de los respectivos municipios, mientras 11 serían reubicados o disueltos debido a las dificultades para garantizar la seguridad de los excombatientes, el acceso a servicios públicos y sociales básicos, a la desconexión con los nodos de desarrollo (cabeceras municipales y centros poblados), y a la dificultad para la gestión, arriendo y/o compra de los predios para la instalación de los espacios (Montoya, 2023.)

Conforme a esas nuevas directrices, en Antioquia, la transformación de estos lugares sucedió así: el PTN Vidrí ubicado en Vigía del Fuerte fue transformado en ETCR y en 2018 fue disuelto. La Zona Veredal Santa Lucía convertida en aETCR fue disuelta en 2020, y trasladada a Mutatá en donde se encuentra hoy el aETCR Mutatá o Becuarandó.

El PTN La Plancha en Anorí se transformó en aETCR, la ZVTN de Llano Grande que se encuentra en el municipio de Dabeiba se transformó en aETCR y la ZVTN de Carrizal del municipio de Remedios se transformó igualmente en ETCR, los cuales siguen ocupados al cierre de este trabajo de investigación.

Reflexionar sobre la estabilidad y funcionalidad de estos lugares, implicó en esta investigación, primero, considerar las dificultades para alcanzar la ejecución esperada durante los 7 años de implementación, las cuales, el Instituto Kroc presenta muy oportunamente, mediante la generación de los informes de medición e implementación de AFP. Según el séptimo informe, para el total del país, al cerrar el año 2023, el 32% de las disposiciones completaron su implementación,

¹⁴ Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios priorizados en el punto 1 del AFP.

el 19% estaba en estado intermedio, el 39% estaba en estado mínimo y el 10% restante aún no había iniciado su implementación (Echavarría Álvarez, 2022).

Y segundo, aunque retomándolos, es necesario superar los datos estadísticos sobre el cumplimiento o incumplimiento de las acciones definidas dentro del acuerdo, y pensarse más este proceso de transición que vive el país en clave de lo que debe implicar la puesta en marcha de la paz territorial. Esta categoría, como se ha tratado de presentar en los capítulos precedentes, apareció como una incorporación novedosa en el marco de los acuerdos de paz adelantados hasta ahora en el país, y trajo la problemática estructural de la tenencia de la tierra y el ordenamiento territorial al centro del debate nacional, lo que supuso que las necesidades económicas, políticas, sociales y culturales particulares de los territorios y las comunidades fueran tenidas en cuenta y que, como lo sugiere el AFP, se garantizara la sostenibilidad socioambiental y se diera una implementación de las diferentes medidas de manera integral y coordinada, y con la participación activa de la ciudadanía (Pimienta Betancur et al., 2021: 204).

Es clave, comprender que, lo territorial como factor activo de esta construcción de paz, reconoce que las violencias en el marco del conflicto armado se expresaron de manera espacialmente diferenciada, y por tanto Colombia en el posacuerdo deberá procurar y avanzar hacia “horizontalizar territorialmente los Acuerdos”. Sin embargo, siguiendo a estos autores, lo que el transcurso del tiempo ha demostrado “es la verticalidad de la política de paz incapaz de descifrar las realidades regionales y locales” (Pimienta Betancur et al., 2021: 204). Es decir, existe entre el enfoque territorial esbozado en el acuerdo y lo que se enuncia casi a diario en los discursos en el marco institucional como pura “retórica política”, y lo que acontece a diario en Urabá, grandes y estructurales diferencias, que deberán ser incluidos como parte fundamental de los incumplimientos en la implementación del acuerdo y del proceso de reincorporación, estos no deben considerar únicamente los análisis estadísticos, sino también las interpretaciones integrales que lleguen hasta lo más profundo de la idea de paz.

-Las Nuevas Áreas de Reincorporación –NAR-

El incumplimiento concreto a los excombatientes en el marco del proceso de reincorporación se ha dado mayoritariamente en cuestiones relacionadas con las condiciones de seguridad, la adecuación de los lugares y en la consolidación de alternativas económicas

sostenibles. Esto ha suscitado por lo menos tres reacciones entre los excombatientes: la primera, es la desertión del proceso de reincorporación; la segunda, que aquellos que habitan estos lugares reclamen una mayor presencia institucional y con ello, garantías que les permita permanecer en el proceso de reincorporación de manera colectiva; y la tercera, la adecuación y consolidación por medio de la autogestión de nuevos lugares y emprendimientos económicos. El traslado del aETCR de un lugar a otro, guiado esencialmente por la iniciativa propia de los excombatientes ha dado pie a la conformación de los nuevos lugares de reagrupamiento denominados *Nuevas Áreas de Reincorporación*, una forma de ocupación espacial, organizativa, económica y cooperativa que, aunque no tiene un marco jurídico en el acuerdo de paz, ni el gobierno les reconoce como tal (Forero, 2020), han sido aceptadas de forma informal por algunas instituciones como el SENA, la ARN y la Defensoría del Pueblo. Según esta última:

Las NAR son el resultado de la dinámica que ha asumido la salida paulatina de excombatientes de los ETCR. Su conformación tuvo como antecedentes los denominados nuevos puntos de reagrupamiento (NPR) y otras estructuras que no han sido reconocidas formalmente por el gobierno, pero que cumplen y han cumplido la función de ser receptoras de excombatientes que por diversas razones salieron de los antiguos ETCR (Defensoría del Pueblo, 2020: 13).

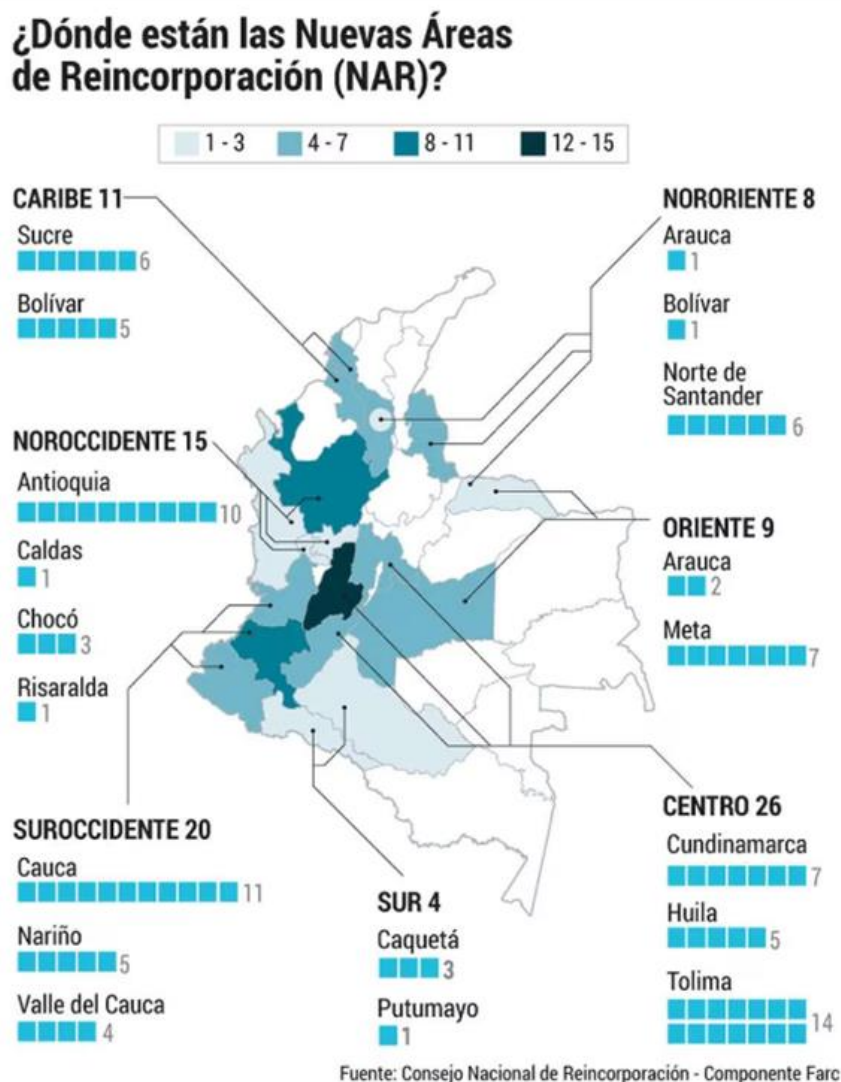
Según (Forero, 2020), en ese momento en Colombia existían 93 NAR, las que en respuesta a la poca funcionalidad de los aETCR han modificado la geografía de la reincorporación en Colombia. En total dentro de los aETCR no había más de 3.000 excombatientes, mientras que el número total de personas que dejaron las armas en el marco del proceso de desarme del AFP fue alrededor de 14.102 (ARN, 2023), es decir, para el 2020, menos del 30% de los excombatientes continuaban en estos lugares transicionales. El componente FARC-EP en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), ha identificado que un porcentaje importante de quienes han salido de los espacios territoriales están asentados en alrededor de 93 NAR en 17 departamentos del país (Forero, 2020).

En la (Figura 11), puede observarse que la localización de estas no dista mucho de aquellos lugares definidos en el marco del acuerdo para la instalación de las Zonas Veredales y los Puntos de Normalización. Puede notarse también que son Tolima, Cauca y Antioquia los departamentos en los que hay una mayor cantidad de NAR, coincidiendo con lo expresado ya líneas arriba, de cómo esas regiones que históricamente han hecho parte de las geografías de la guerra son

receptoras hoy de las infraestructuras de paz, entendidas aquí como lugares transicionales, en los que los excombatientes de las FARC-EP han iniciado el tránsito hacia la vida civil.

Figura 11

Nuevas Áreas de Reincorporación en Colombia



Nota. Fuente <https://www.elspectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/la-realidad-de-las-nuevas-areas-de-reincorporacion-de-excombatientes-de-las-farc-articulo/>

Para el caso de Antioquia, según las fuentes recientes consultadas, se han creado 5 Nuevas Áreas de Reincorporación, 4 en la ruralidad y una en Medellín: Mandé (Urrao), La Fortuna (Mutatá), San José de Apartadó, Godó (Dabeiba), San Francisco (Yondó) y el NPR urbano en Medellín.

-Los casos de la NAR San José de León y el ETCR Mutatá (Becuarandó).

Considerando los procesos de conformación y transformación de estos lugares durante este tiempo de posacuerdo, se realizó una descripción de la NAR San José de León y del aETCR Mutatá-Becuarandó. Estos son lugares transicionales que, aunque han estado atravesados por los incumplimientos y dificultades de la puesta en marcha del acuerdo y del proceso de reincorporación han permanecido dentro del proceso como un acto de resistencia y de convicción en la construcción de una paz duradera.

Para caracterizarlos, se presentarán 3 momentos en los que se dará cuenta del proceso de conformación, funcionamiento y transformación de cada uno. Inicialmente se hace referencia a la instalación de estos lugares en Tierralta, Córdoba y Santa Lucía, Ituango, y se da cuenta de las razones por las que estos primeros intentos de consolidar lugares transicionales no resultaron viables. En segundo lugar, se plantean las razones descritas por los y las excombatientes sobre por qué se eligió a Mutatá como el municipio para la construcción de los segundos espacios. En el tercer momento, se realiza una descripción en la que se da cuenta de las dinámicas, el funcionamiento y los retos que enfrentan hoy cada uno de estos lugares.

Al final, se plantean unas líneas de análisis socioespacial de estos lugares transicionales en las que se aborda críticamente el concepto de paz territorial, los distintos procesos de conformación de estos espacios y su relación con la materialización de los mismos, la importancia geográfica de Mutatá tanto en una perspectiva bélica como de construcción de paz y la perspectiva de cómo la emergencia de estos espacios ha implicado la configuración de nuevas espacialidades de paz y con ello de reconfiguraciones socioespaciales a nivel local.

3.2. De Gallo a San José de León: ¿incumplimientos? Las dificultades de transicionar en el PNN Nudo de Paramillo.

- Primera consolidación del espacio: los incumplimientos y dificultades del posacuerdo.



Fotografía 5 ETCR Gallo, Tierralta, Córdoba

Fuente¹⁵: PVD PLUS Tierralta, 2017

En la Vereda Gallo del municipio de Tierra Alta se instaló la ZVTN (Ver Fotografía 5) y posterior ETCR Gallo, en la que se asentaron algunos de los excombatientes del Frente 58 de las FARC-EP hasta el 30 de septiembre de 2017. Este lugar se ubicó en el sur de Córdoba, cerca de los centros urbanos más importantes de este departamento: Valencia y Montería (su capital), la represa Urrá (uno de los primeros proyectos hidroeléctricos del país) y el Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo (PNN Nudo de Paramillo), área geográfica importante para la estrategia bélica en la región.

En Gallo, se dio el proceso de desarme, y se asentaron 110 excombatientes con sus familias. Allí se construyeron en el marco de lo pactado en el acuerdo por parte del gobierno colombiano las viviendas provisionales para todos, se instalaron las infraestructuras comunes como la escuela, la cancha y la caseta comunal. Sin embargo, en 2018 luego de casi dos años de estadía allí, no habían

¹⁵Tomado de: <https://www.facebook.com/100067185632334/videos/cr%C3%B3nicas-de-paz-etcr-gallo-tierralta/807110282797033/>

logrado llevarse a cabo proyectos productivos que posibilitaran su permanencia. Esto debido a que, como lo expresó Joberman Sánchez¹⁶ esta es una vereda que se encuentra dentro del Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo, una unidad territorial reglamentada como área protegida debido a su importancia geoestratégica; lo que implica unas limitaciones en el uso del suelo, especialmente en aquellos referidos a actividades productivas.

Por otra parte, según él mismo, se dieron en ese contexto unas condiciones sociales complejas. En primer lugar, existe un litigio por la tenencia de la tierra entre Parques Naturales y la Empresa Urrá que no permitía la negociación/compra del predio para cederlo definitivamente a los excombatientes y además existen unas tensiones históricas por la tenencia de la tierra entre indígenas y colonos, que se intensificaron con la instalación de este ETCR.

Luego del desarme de las FARC-EP, se dio una reconfiguración en las geografías de la guerra y las territorialidades bélicas de esta parte del país. La salida de este actor armado, con presencia histórica en la región, dio pie a que allí los otros grupos armados presentes antes, durante y tras la implementación del AFP, reconfiguraran su dinámica bélica, un proceso que implicó la disputa por el dominio territorial y con esto la intensificación de las acciones violentas que podrían poner en peligro la seguridad de los excombatientes. Por último, fue difícil para la institucionalidad, lograr proporcionar al espacio las condiciones de infraestructura pública y social como energía, agua y gas de forma permanente.

Ante estas condiciones, los excombatientes allí asentados de forma individual y/o conjunta fueron dejando el espacio en búsqueda de mejores condiciones. Según Sánchez, inicialmente muchos excombatientes se retiraron del espacio de forma individual y se desplazaron hacia sus lugares de origen o donde sentían que tenían posibilidades de reincorporarse a la vida civil, principalmente hacia San José de Apartadó, Valdivia, Medellín, Ituango, Montería y Tierralta. En una nota periodística, este, confirmó que:

Sesenta (60) de los excombatientes asentados en este aETCR, lo abandonaron y se trasladaron a Urabá, debido a que no había garantías para el abastecimiento de alimentos, servicios públicos (agua y energía), servicios sociales como la escuela, o para poner en marcha proyectos productivos que viabilizara su supervivencia en el espacio (El Herald, 2017).

¹⁶ Conocido también por su nombre de “monte” como Rubén Cano o “Manteco”, fue combatiente durante 32 años, llegó a ser alto mando del Frente 58 y es hoy uno de los principales líderes del proceso de reincorporación en San José de León y Urabá.

-El tránsito hacia Mutatá: construir algo en donde nos conocen y conocemos.

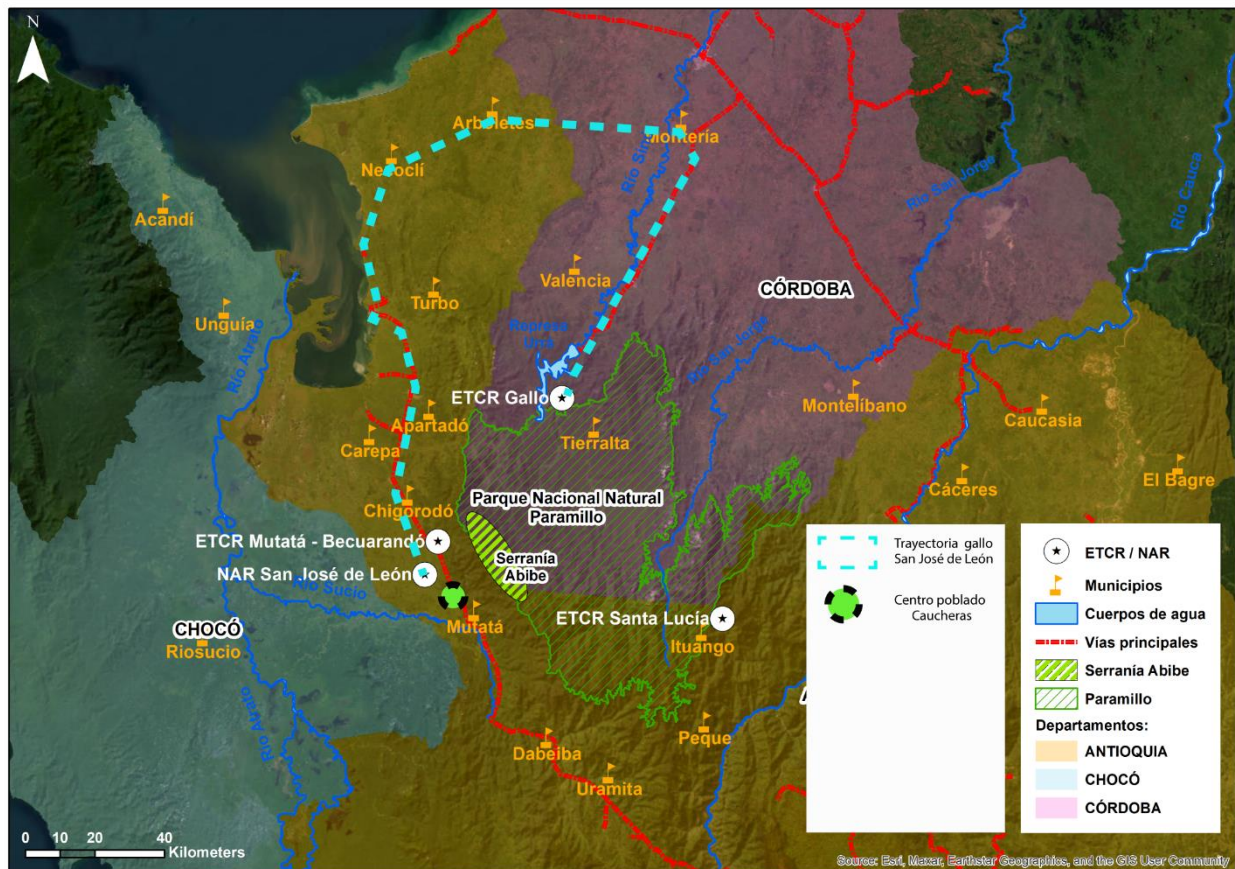
Ante estas condiciones socioambientales y las restricciones que la ubicación geográfica de este ETCR representó para lograr establecer proyectos productivos que viabilizaran su sustento y la conectividad con la región en el marco del proceso de reincorporación, los excombatientes en una decisión colectiva que fue informada al Gobierno, definieron emprender un proceso de reubicación, hacia un lugar que les ofreciera las condiciones propicias para continuar con el complejo proceso de reincorporación.

Entre los 56 excombatientes que se acogieron a esta decisión, se recaudaron 56 millones de pesos (1 millón por excombatiente), del dinero entregado por el gobierno en el marco de la etapa de desarme, un fondo comunitario conformado con el fin de lograr la compra de un predio para la instalación del nuevo lugar para la reincorporación, aunque la decisión fue informada y acompañada por el gobierno, este fue un proceso liderado por el grupo de excombatientes, dándole así un carácter de autogestión, que tenía como objetivo principal lograr superar los tiempos (más lentos) del cumplimiento de lo pactado para la implementación de estos lugares transicionales y afianzarse en la voluntad de retornar hacia la vida civil en un espacio propio en el que pudieran tener, por un lado, mayor control sobre sus acciones, y de otro, la sensación de seguridad y permanencia en el tiempo.

Estos excombatientes y 29 de sus familiares partieron de Tierralta el 30 de septiembre de 2018, acompañados de comisiones de verificación de la ONU y el Ejército Nacional hacia Urabá, una región conocida tanto geográfica como socialmente para quienes hicieron parte del Frente 58, pues fue esta su zona de incidencia durante décadas, además, en esta región nacieron y crecieron varios de los hoy excombatientes que conformaron este grupo. Llegaron el 1 de octubre exactamente a Mutatá, luego de haber recorrido cerca de 240 kilómetros.

Figura 12

Trayectoria Gallo-San José de León



Nota. Elaboración propia, 2024.

De Gallo llegaron a Tierralta y de ahí, tomaron la carretera que conecta con Arboletes, en Antioquia, desde donde siguieron la vía doble calzada que del Golfo de Urabá (Necoclí) conduce hacia la ciudad de Medellín. Como puede observarse en la

Figura 12, la ubicación de este espacio en Córdoba y la de Urabá, coinciden en la cercanía al PNN Nudo de Paramillo, y ambas ubicaciones se encuentran dentro de lo que se definió antes, como el área de incidencia de este frente en particular. A Mutatá, lograron llegar como colectivo exFARC, pero también con el acompañamiento institucional con quienes concertaron la seguridad.

Al finalizar ese mismo año (2018), y luego de semanas de búsqueda de predios, lograron la compra en la vereda San José de León de un lote de 21 hectáreas en la que se inició la construcción de la Nueva Área de Reincorporación. Sobre el proceso de consolidación de este espacio transicional, vale la pena destacar la relevancia que tuvo la participación de otros actores de la región, entre los que se encuentra la Misión de Verificación de la ONU, la Junta de Acción Comunal de San José de León, la Alcaldía de Mutatá, la Gobernación de Antioquia, Proantioquia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Gobierno de Suecia, los cuales contribuyeron y participaron, por ejemplo en la construcción de la carretera, de un acueducto comunitario, la adecuación del terreno y la construcción de las casas.

Sobre este momento de consolidación y la definición de Mutatá como el municipio para dar continuidad al proceso de reincorporación, se considera relevante destacar los siguientes aspectos. La llegada de estos excombatientes a Mutatá en el marco del posacuerdo, como la de las FARC-EP a Urabá en los años 70, se dio porque existen allí unas condiciones de favorabilidad. San José de León está ubicada cerca a la vía que de Medellín conduce a Urabá, haciendo de este un lugar más accesible, con mayores posibilidades de conexión a la infraestructura pública y social, a la institucionalidad misma, y de llevar a cabo actividades productivas para la subsistencia en las que no se encuentran las limitantes en el uso del suelo como las del PNNNP; además, es una región geográfica que conocen, en la que se sienten cómodos y donde obtuvieron una aceptación tanto institucional como social.

Conjuntamente, aunque la decisión del traslado de este ETCR, fue liderado por el grupo de excombatientes en respuesta a las dificultades geográficas y ambientales de Gallo, este fue un hecho avalado y acompañado por la institucionalidad, que de ninguna forma podría ser entendido como la deserción de estos del proceso de reincorporación o como el fracaso absoluto por el incumplimiento estatal, sino más bien, como las dinámicas propias de un proceso complejo de posacuerdo que en la práctica debe implicar la generación de respuestas que hagan viable y sostenible este proceso de construcción de paz. Al respecto Néstor Puerta, quién acompañó el proceso de instalación de estos en Mutatá, en la entrevista realizada el 20 de marzo de 2023 sugirió:

En estos excombatientes había un convencimiento de dejar las armas, de cambiar. Ellos creían en el proceso de paz, de eso estoy seguro. A pesar de todos los incumplimientos ellos encontraron la manera de resistirse y seguir ahí con ese sueño de construir algo diferente. (N. Puerta, comunicación personal, 2023).

- “Recoger maderas para construir nuestras casas”: las condiciones actuales de San José de León.

Las NAR, son el reflejo de que hay una intención que permanece entre los excombatientes de continuar y sostenerse en la idea de virar hacia el camino desconocido de la paz; y han permitido comprender cómo en la práctica las relaciones sociales pueden impactar y reconfigurar las dinámicas socioespaciales de un lugar, dado que, estos espacios construidos para permitir el tránsito de los excombatientes de la vida armada a la civil, están atravesadas determinadamente por la posibilidad de construir una infraestructura material, pero también y fundamentalmente una base social que sostenga estos procesos.

Para hacer posible la llegada de estos excombatientes a Mutatá, viabilizar la compra del predio, acondicionar materialmente el espacio con vías de acceso, viviendas y demás infraestructura pública y social, y sobre todo para garantizar la posibilidad del desarrollo de este en el tiempo, ha sido vital, incluso previo al asentamiento, realizar encuentros, conversaciones y acuerdos entre los diversos actores presentes en la región, entre los que se han destacado: la Alcaldía de Mutatá, la Gobernación de Antioquia, la ARN, las organizaciones sociales de las veredas La Fortuna, San José de León y Caucheras principalmente, la de algunos actores empresariales como Proantioquia y EPM, la de actores de cooperación internacional como el Gobierno de suiza, el Instituto Kroc, Juntos Construyendo Futuro, y algunos académicos como la Universidad de Antioquia. Y la puesta en marcha de negociaciones con actores armados al margen la ley con poder en la región.

A continuación, se presentan de forma descriptiva lo observado acerca del funcionamiento actual de la NAR San José de León, partiendo de las visitas realizadas a Mutatá y a este espacio, durante las cuales se lograron observar algunas dinámicas socioespaciales y obtener una interpretación propia de las complejidades del proceso de reincorporación y de la configuración de este tipo de espacios.



Fotografía 6 Vía de ingreso a San José de León, 2023

Fuente: registro propio, junio de 2023, primera visita.

A la vereda La Fortuna y a la NAR San José de León se llega por la “Carretera al Mar” que conecta a Medellín con Urabá. Desde la llegada de los excombatientes de las FARC-EP, el camino para ingresar al caserío ya no tiene que hacerse a pie o en bestia únicamente, hoy se puede en moto o en carro, porque ahora es de “asfalto” y es “recto” gracias a la pavimentación que se logró con la llegada de la NAR y el apoyo de los demás actores de la región (Ver Fotografía 6).

Como al ingreso, al interior del “caserío” la vía también es pavimentada, hay placa huella (ver Fotografía 7) hasta la última vivienda, hay un hotel (aquí vienen o hay personas de otras partes), las cantinas están cerradas, pero están, son dos grandes; la infraestructura para el servicio social como las escuelas, las canchas, el centro de atención a primera infancia son todas amplias y construidas con adobe y cemento, en las casas los pisos tienen baldosa, en todas hay baño, cocina, los techos son de zinc y Eternit la mayoría, estas son todas distintas, en la distribución, algunas son de una planta otras de dos, en las fachadas y los colores que han usado, no hay homogeneidad, cada uno la ha construido a su gusto, a su medida y dentro de sus posibilidades.



Fotografía 7 NAR San José de León, junio 2023

Fuente: registro propio, junio de 2023, primera visita.

En San José hay una gran cantidad de motos, las personas permanecen en su mayoría dentro de sus viviendas, la cancha y demás lugares comunes estaban vacíos. Durante las visitas realizadas, siempre hay dentro de la NAR presencia de profesionales en representación de diversos actores institucionales como de la ARN, de la Diócesis de Apartadó, de la Universidad de Antioquia y de la Fundación Juntos Construyendo Futuro, quienes realizan de forma constante actividades asociadas a programas y proyectos para la reincorporación política y económica de los excombatientes.

La dinámica de San José ha variado significativamente desde su instalación. En este espacio, las puertas parecen estar abiertas, allí ingresan sin aviso vendedores de quesos, de pescado, de “menjurjes” o “ungüentos” a base de coca y de marihuana, recorren el total del caserío a pie o en moto, tocan las puertas, conversan con los habitantes, de vez en cuando logran vender algo, se sientan en las tiendas y/o las cantinas a tomarse una gaseosa o una cerveza, hay además un hotel y en los excombatientes hay siempre una alta disposición a ofrecer su casa, una habitación para hospedar a quienes llegamos de afuera. Los ingresos de personas foráneas no son solo esporádicos, hay en la actualidad viviendo allí arrendados y como propietarios personas que no son

excombatientes ni familiares de estos. Posterior a la pandemia (2021) han llegado personas de la región o amigos y conocidos de los firmantes y sus familias para adquirir lotes dentro de este predio o han rentado viviendas construidas por firmantes que hoy están desocupadas.

El hecho de que esto ocurra ha ido de a poco modificando las realidades de San José, ya no es solo un lugar para o de los excombatientes, las fronteras parece que fueran cada vez más porosas y que la inmersión de estos a la vida común, a la civil, fuera cada vez más profunda y permanente.

Sobre el funcionamiento actual de este espacio, es importante detallar algunas consideraciones observadas acerca de la dinámica organizativa de esta. En San José de León existen unos liderazgos claros y claves, que desde el inicio en Gallo han sostenido unidos a los excombatientes y han logrado la gestión no sólo de la movilización hacia Mutatá sino de la compra del predio y la gestión de programas y proyectos que ha aportado a la permanencia de estos en el proceso de reincorporación. Joberman Sánchez y Franco, quienes fueron alto y medio mando en el frente 58 de las FARC-EP han transformado esa capacidad de liderar militarmente en la de apoyar, coordinar y jalonar socialmente el proyecto de este espacio transicional.

Por ejemplo, cuando llegaron a San José los firmantes no sabían construir casas, entonces Rubén contrató a personas que, si sabían para hacer las dos primeras, se ponen los excombatientes con Rubén a aprender y así es como hacen ellos mismos el resto. En este proceso, es Rubén el primero en levantarse a recoger madera para la construcción de las casas, y, sin embargo, la última casa que se hace es la de él (Puerta, N. Entrevista propia, 2023).

Tanto para los actores académicos, como los institucionales y para los excombatientes ha sido clave en el “éxito” de esta experiencia en San José de León la presencia de estos líderes, el reconocimiento de ellos, y su posicionamiento frente a las entidades gubernamentales. Este tipo de liderazgo ha hecho que las relaciones entre excombatientes y el gobierno sean cada vez más horizontales, hay una apropiación del acuerdo, un conocimiento sobre el territorio que ha hecho de la participación de estos excombatientes en los escenarios políticos una con capacidad de incidencia y de gestión. Sobre el rol de esos liderazgos, un colaborador de la ARN mencionó:

Una cosa es un liderazgo político y social y otro es el liderazgo militar. Una cosa es el líder que participa, escucha, gestiona y aporta (este es más comunitario), y otra aquel que se cree líder por la fuerza, por el deber, por mandar y que está atravesado más por acciones y pensamientos individualistas” (Colaborador ARN, Entrevista propia, 2023).

En definitiva, luego de conocer este espacio mediante las visitas realizadas, de observar el tipo de infraestructura construida, y considerando su funcionamiento interno y las características regionales arriba enunciadas, puede decirse que este fue construido con el objetivo de asentarse permanentemente ahí. Al respecto, un profesional de la ARN entrevistado mencionó:

Hay allí una clara apropiación del espacio, debido principalmente a que, ese predio fue comprado por ellos y eso les quitó la incertidumbre, esa sensación de transición que tenían en las zonas veredales y luego en otros ETCR del país (Informante de la NAR, 2023).

Para los excombatientes de San José, es importante enunciarse como los dueños del predio, como personas que poseen tierra, una cuestión que es fundamental, para ellos, en el marco del proceso, y que trae de vuelta esa cuestión estructural y macro de la tenencia de la tierra y su relevancia en la constitución de los procesos políticos en Colombia.

Este proceso de autogestión ha permitido que la NAR se sienta propia, debido no sólo a que predialmente se tiene la escritura, sino a que se ha dado allí un esfuerzo conjunto que ha derivado en la creación de una infraestructura, es decir, de las viviendas, del hotel, de la cancha, de la vía, del aula comunal, de la escuela, pero que refiere también a la construcción de un tejido social y cotidiano con quienes se relacionan, la puesta en marcha de una dinámica propia entre los excombatientes en el lugar, pero también entre estos, los vecinos y los demás actores.

Por su parte, Ever Álvarez¹⁷ manifiesta que:

La construcción de la NAR San José de León ha sido un proceso que, por haber tenido una mayor autonomía en su concepción, ha implicado un grado más alto de responsabilidad por parte de los excombatientes, quienes, por ejemplo, tuvieron que llegar a construir el lugar, a hacer las casas, abrir y hacer las vías, a dividirse funciones y roles, en este lugar se paga arriendo, servicios, entonces hay que responsabilizarse y emprender.

3.3. De Santa Lucía a Becuarandó: incumplimientos y dificultades de tránsito a la paz en medio del conflicto armado.

El ETCR Santa Lucía inició su historia de reincorporación al otro lado de la joya geográfica de esta región, el PNN Nudo de Paramillo. Santa Lucía es una vereda del municipio de Ituango, en

¹⁷ Ever Álvarez, Coordinador Barómetro Regional Noroccidente de la Iniciativa Barómetro del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz

la que se encuentra uno de los accesos que conectan la región del Bajo Cauca Antioqueño con el Paramillo, y es además uno de los límites con el departamento de Córdoba y a los ríos San Jorge y Cauca.

En este espacio, que inicialmente fue una ZVTN donde se efectuó la etapa de desarme, se instalaron alrededor de 280 excombatientes, la mayoría de ellos exintegrantes del Frente 18 de las FARC-EP. En el año 2017 este se convirtió en un ETCR y se inició con la adecuación material, esto es, la construcción de infraestructura para la implementación de espacios colectivos (aula educativa, caseta comunal, puesto de salud) e individuales (viviendas) y el desarrollo de proyectos y programas en pro de brindar acompañamiento al proceso de reincorporación de estos excombatientes.

Desde ese mismo año (2017), en este lugar transicional se inició con la construcción colectiva de proyectos productivos para dinamizar la economía interna, fortalecer los lazos comunitarios y viabilizar a largo plazo el regreso de estas personas a la vida civil. Durante 3 años, entre 2017 y 2020, el gobierno nacional desembolsó alrededor de 1.200 millones de pesos para proyectos productivos como parte de la reincorporación económica de los excombatientes, entre los que resalta la adecuación de potreros y la compra de ganado para un proyecto conjunto de ganadería, la compra de gallinas para la venta de huevos y la adecuación de pozos para el cultivo de truchas.

Aunque en Santa Lucía, como en el resto del país, el proceso de la reincorporación ha significado grandes retos, en este caso se habían dado las condiciones suficientes para proyectar una vida “estable” en Ituango, sin embargo, luego de un año y medio de estar asentados allí apareció un factor determinante que impactó directamente a los excombatientes y sus familias y derivó en el desplazamiento de estos hacia Mutatá y en el consecuente desmantelamiento de este ETCR.

Debido a que, esta es una región relevante para la guerra por su localización estratégica, a pesar del desarme de las FARC-EP las disputas armadas por el dominio territorial y el control de las vías de conexión con el Paramillo entre los actores armados que en ese momento tenían presencia en esa región (AGC y disidencias de las FARC-EP) continuaron. La presencia de esta dinámica bélica, superpuesta a este naciente lugar transicional y las dinámicas de paz que lo sustentan, generó tensión. Durante el tiempo de conformación de este ETCR se dieron amenazas constantes que pusieron en peligro las condiciones de seguridad de los excombatientes y sus familias que resultaron en el asesinato de estos. En junio de 2020, se dio en Ituango la masacre de

3 personas entre ellas un excombatiente y el hijo de un excombatiente, pertenecientes a este ETCR, hecho de violencia que sirvió como causa determinante para solicitar el traslado. Para estos, esta reubicación fue un desplazamiento forzado, en respuesta a la incapacidad estatal de garantizar las condiciones de seguridad y la vida. Para referirse a esta situación, Rosa, una de las excombatientes entrevistadas para esta investigación, relató:

Resulta y sucede que cuando esas personas decidieron volver a coger las armas ya el paramilitarismo estaba en las veredas y en los territorios donde antiguamente mandaban las FARC, entonces ahí se vino un problema porque las personas que desertaron pretendían retomar esos territorios, y no fue así, se empezó a crear un complot y un montón de problemas y fueron más duras las dificultades para nosotros como excombatientes. A nosotros nos tocó salir (...) todo eso nos pasó y muchas veces, como le digo yo, intentaron atacar la policía que había en ese entonces cuidándonos, después empezaron a matarnos a nosotros los excombatientes, y luego empezaron a matar a los hijos y familiares de los excombatientes, entonces los líderes decidieron juntarse con personas del gobierno y ahí fue donde las personas del gobierno decidieron que para podernos ubicar en otra parte tendríamos que buscar otras tierras, porque no íbamos a aguantar la violencia que se estaba dando allá en contra de nosotros (Rosa, comunicación personal, 2023).



Fotografía 8 Desmonte del ETCR Santa Lucía

Fuente: Tomado del portal de caracol noticia.

A partir del 2020 se inició con la activación de las rutas establecidas para la disolución de este ETCR y el traslado de los excombatientes (ver Fotografía 8) y las familias allí asentadas. Aunque el desplazamiento de estos se da en medio del acuerdo y con la voluntad y el compromiso

de quienes habitaban este lugar (el gobierno nacional y el partido político COMUNES), al final la percepción de los excombatientes es que han sido objeto del flagelo del desplazamiento forzado, pues, fueron condiciones externas a ellos, las que los obligaron a dejar atrás un lugar que por años fue su hogar, y que se encontraba en una región conocida. La mayoría de los excombatientes del ETCR Román Ruíz son ituanguinos e hicieron parte del Frente 18 de las FARC-EP con incidencia en esa región.

Cuando conversamos sobre el traslado de este lugar, la profesora de la Universidad de Antioquia, Marta Valderrama, planteó, “lo que pasó en Ituango es un caso emblemático de desplazamiento forzado. No puede ser leído de otra forma. El tema determinante aquí fue la seguridad, y que el estado no les garantizó la vida”. (M. Valderrama, comunicación personal, 2024). Situación que provoca fracturas en el proceso que son difíciles de reparar.

-El tránsito hacia Mutatá: un desplazamiento forzado

Ante estas demandas de los excombatientes se inició con la búsqueda de un nuevo lugar en el que se pudieran dar las condiciones para el asentamiento, esto es, que fuera más central, que la institucionalidad tuviera la capacidad de llegar con la infraestructura pública y social, que la comunidad estuviera en la capacidad de recibirlos y en este caso en particular que el gobierno pudiera garantizar la protección y seguridad de los excombatientes. Manolo, líder de la aETCR, enumera las causas del traslado desde Ituango hacia Mutatá: primero, la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad en el área; segundo, la limitada productividad de los predios proporcionados para la aETCR, lo que afectaba los proyectos de los excombatientes; tercero, la familiaridad con Urabá y Mutatá, áreas donde operaron durante la guerra; y finalmente, la presencia de la NAR de San José de León, reconocida como una “experiencia exitosa” por los excombatientes (Semana, 2020).

Durante el proceso de definición de hacia dónde trasladarse, los excombatientes en Ituango se acercaron a la experiencia de la NAR San José de León, en Mutatá, teniendo en cuenta que era concebida como un caso exitoso a nivel nacional. El hecho de que ellos estuvieran asentados en este municipio reflejaba unas condiciones sociales, institucionales, políticas y geográficas favorables que hicieron que se iniciara con la exploración de la posibilidad de construir allí un

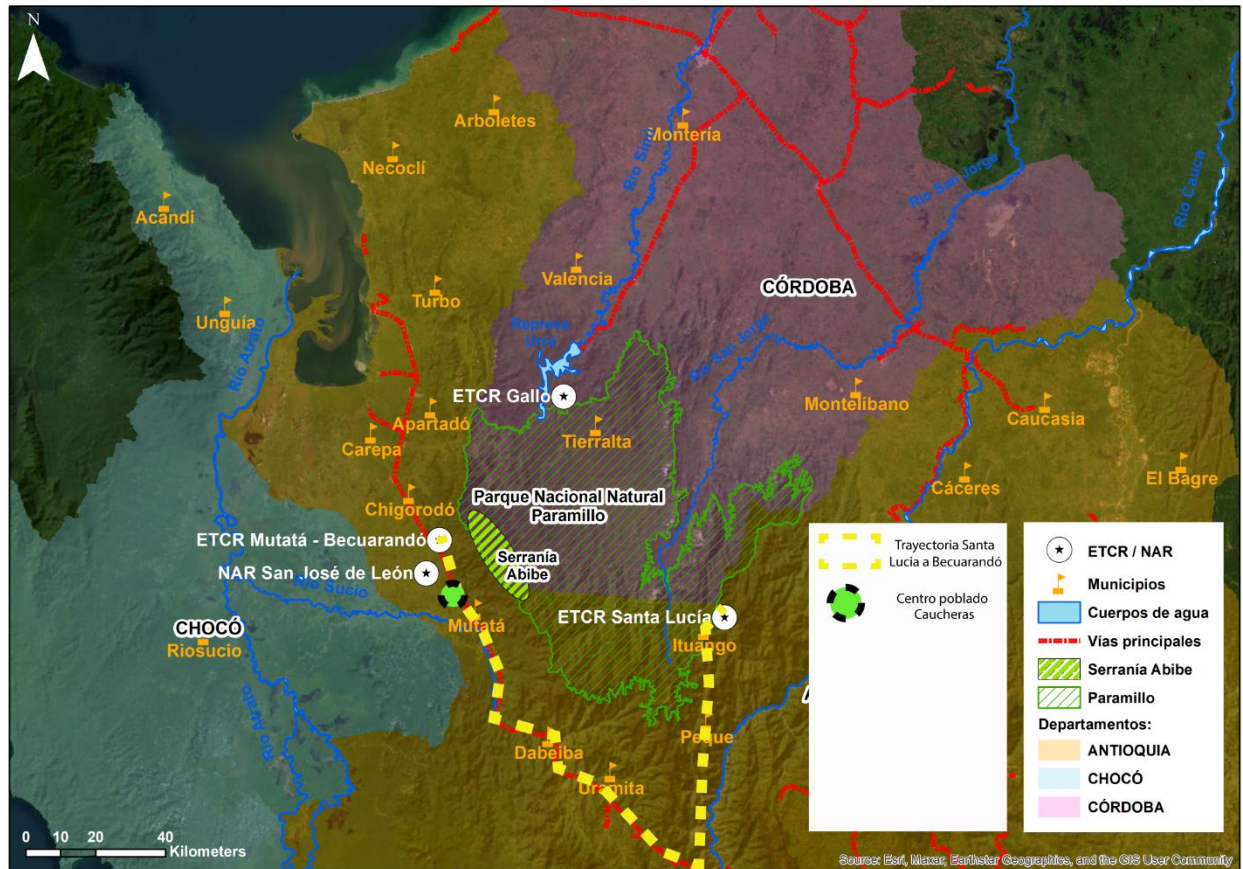
nuevo un nuevo lugar transicional. Fue así como liderado por la ARN se realizó la gestión de un predio, que pudiera rentarse para construirlo allí.

Para ese momento, los líderes de la NAR San José de León se encontraban adelantando una negociación para la compra de un predio adicional, estos al enterarse de la necesidad de traslado de los excombatientes desde Ituango, definieron ceder ese trámite para que se dispusiera para la construcción del nuevo ETCR Mutatá- Becuarandó. Sobre toda esta etapa, Rosa, excombatiente entrevistada relató:

Luego de los asesinatos, los líderes salieron a buscar tierras, y dieron con esto aquí en Mutatá, porque acá nos aceptaron como excombatientes y bueno en otras tierras que buscaron pues no nos aceptaron por el simple hecho de ser excombatientes, la alcaldesa de Mutatá aceptó y las personas también nos aceptaron, las personas de acá de la vereda y también los de la NAR de San José de León, quienes tuvieron un rol muy importante porque el líder de allá nos acogió unos días mientras nosotros podíamos armar nuestros cambuches acá (Rosa, comunicación personal, 2023).

A inicios del año 2021, el Gobierno nacional por medio de la ANT accedió al predio de Becuarandó, ubicado en la Vereda La Fortuna en el municipio de Mutatá, el cual fue dispuesto para que los 63 excombatientes y sus familias continuaran allí con el proceso de reincorporación.

En medio de los protocolos establecidos para prevenir el contagio del COVID19, estos inician con el traslado hacia Mutatá, saliendo de Santa Lucía hacia el casco urbano de Ituango y de allí hasta la vía de San Cristóbal, corregimiento de Medellín desde donde tomaron la vía que de esta ciudad conduce hasta Mutatá.



Fotografía 9. Trayectoria Santa Lucía-Becuarandó

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Como puede observarse en la Fotografía 9, la ubicación de este espacio en Ituango y la establecida en Mutatá, coinciden con la cercanía al PNN Nudo de Paramillo, y ambas ubicaciones se encuentran dentro de lo que se definió antes, como el área de influencia de este frente en particular.

-Desplazarse a un lugar provisional: las condiciones en Becuarandó.

Becuarandó¹⁸, el predio en el que se reinstaló el aETCR Mutatá, está ubicado en la vereda La Fortuna y posee 132 hectáreas. A su llegada, los excombatientes realizaron las actividades necesarias para la construcción de una vía de acceso (Ver Fotografía 10), que conecta la Vía al Mar con el caserío, esta, aunque no está pavimentada es una infraestructura que ha sido relevante para los excombatientes y la comunidad de la vereda, pues ha posibilitado el ingreso de motos y vehículos cuatro por cuatro facilitando la conectividad de estos con los polos de desarrollo como las cabeceras municipales de Mutatá y Chigorodó.



Fotografía 10 Vía de ingreso a Becuarandó

Fuente: registro propio, 2024.

Este “caserío” como ellos mismos lo nombran, está dividido en dos “barrios”: hay un asentamiento inicial en el que hay 21 viviendas asignadas y unos “ranchos”¹⁹ construidos por los excombatientes, y otro más al fondo en el que se encuentra la mayor parte de la infraestructura

¹⁸ Becuarandó que traduce en lengua Emberá, río de aguas amarillas o aguas de maíz.

¹⁹ Infraestructuras construidas por los mismos habitantes del espacio, predominantemente de plástico y maderas.

pública: el puesto de salud, la escuela y 40 viviendas asignadas. En total en este ETCR, en el momento en que se realiza este trabajo de investigación, viven 123 personas entre los firmantes de paz y sus familias («Agencia para la Reincorporación y la Normalización», s. f.).

La división en dos barrios se debe a tres cuestiones fundamentales. Primero a la topografía, segundo, la existencia de unas zonas protegidas que limitan el tipo y extensión de la construcción, y tercero a la existencia de un pequeño río, que en la mayor parte del año es solo un hilillo de agua, pero que en temporada de lluvias alcanza un gran caudal. El río los divide en dos.



Fotografía 11 Becuarandó.

Fuente: registro propio, 2024.

En Becuarandó, hay más una sensación de humedad, parece que el paisaje (selvático) estuviera más expuesto, más cercano, no hay cemento en ningún lado, todas las viviendas son de madera, son las que les dio el Estado, las “provisionales”, porque se supone que llegarán unas mejores (de eso hace 5 años), a estas no se les puede realizar ninguna adecuación o modificación porque pierden la garantía, esta es una limitación sobre las viviendas que les da a los excombatientes la sensación permanente de que esas casas no son de ellos, y hace muy complejo el proceso de apropiarse, no sólo de las viviendas sino también del espacio en general. Ver Fotografía 11.

Cuando fui por primera vez a Becuarandó, participé en un convite para embellecer el parque del caserío, en el que se realizaron actividades para deshierbar, pintar y limpiar. Ese día casi todos se reunieron para trabajar, la música estaba a alto volumen, sonaban unos vallenatos que no hablan de amor o desamor, sino de todo el proceso que implica la comercialización de la coca, había ron y cerveza en las mesas que están afuera de la cantina.

Durante el recorrido realizado, en compañía de uno de los funcionarios de la ARN y de una de las lideresas del espacio (durante las visitas que realicé a este espacio nunca hice un recorrido sola), logré ver la homogeneidad en las casas, todas son iguales, ninguna es de ellos, se nota, todas son de madera, igual que la infraestructura social. Cuando se está ahí, da la impresión de estar visitando un campamento, un lugar provisional.

A propósito de esto, Ever Álvarez sugiere que, “las viviendas están en contravía del modelo de la apropiación de la tierra, este parece ser un espacio concebido por otros, “las instituciones”, que no necesariamente ha correspondido *al espacio vivido*, es decir, a las dinámicas y necesidades que se viven a diario”.

Durante las visitas realizadas a Becuarandó, aunque siempre encontré presencia institucional, de profesionales de la ARN, la Alcaldía de Mutatá y de Juntos Construyendo Futuro, nunca observe que personas externas al lugar transicional y al proceso de reincorporación estuvieran recorriendo o haciendo parte de las actividades que allí se llevan a cabo. No se dan tampoco circuitos de comercialización local con mucha regularidad, dado que, cada una de las familias de excombatientes que residen allí mensualmente reciben una “remesa” con los productos alimentarios básicos y según los mismos, aunque son muy limitados, deben ser suficientes pues no poseen muchos recursos económicos adicionales como para comprar en Mutatá o Chigorodó muchas más cosas que las ofrecidas por el gobierno.

En cuanto al funcionamiento interno, se han hecho visibles dos liderazgos dentro este ETCR, el de Daniela y el de Valentín, dos personas que en el marco del proceso de paz han asumido este rol para lograr servir como enlaces entre el grupo de excombatientes que representan y las autoridades gubernamentales, y así, aportar mediante la gestión de programas y proyectos que puedan beneficiar al total de la comunidad de este lugar. Sin embargo, existen presiones y tensiones respecto a estos liderazgos que es posible detectar en la conversación con ellos y con los demás excombatientes.

Según la visión de uno de los profesionales de la ARN entrevistado, en Becuarandó ha costado realizar el cambio de “Chip” entre los liderazgos militares y los sociales, que son los que se requieren en la actualidad. Se ha dado una transición lenta en ese sentido, y aunque han aparecido nuevos líderes con características que podría decirse son más propias para afrontar los restos de este proceso de reincorporación, ha sido difícil que aquellos que habían tenido el poder durante décadas mientras las FARC-EP estuvo en combate cedan esos lugares para un relevo. Esto ha significado, al interior del grupo de excombatientes algunas tensiones y para quienes han asumido el rol de gestionar dificultades y presiones en el relacionamiento.

En las conversaciones informales y también durante las entrevistas realizadas con los excombatientes en Becuarandó se habla mucho del Estado, de lo que ha dado, pero sobre todo de lo que no, de los incumplimientos, de lo que hace falta, hay una espera, una relación que se enuncia casi como de dependencia, hay un lazo que no se suelta, es una comunidad que continúa sin duda bajo el marco estricto del acuerdo de Paz. En consonancia con esta interpretación, la profesora Beatriz Arias ²⁰ comentó:

Es un espacio institucionalizado, es un espacio que está cobijado por todo el proceso jurídico y estatal, también hay una dinámica distinta allí en la que cuando externos se acercan a las personas que lo habitan suelen responder con “usted cómo va a ayudar” “qué nos van a dar”, es decir, tienen muy incorporados el discurso del asistencialismo estatal en que las relaciones se establecen es por ganar algo. (B. Arias, comunicación personal, 2022)

Vale la pena aclarar que, el traslado desde Ituango hacia Mutatá implicó dejar atrás, no sólo el riesgo para la vida que les implicaba continuar en esa región, sino también, interrumpir las actividades que realizaban en pro de la reincorporación y los proyectos productivos construidos durante los 3 años en Santa Lucía (de ganadería, pollos, café y peces). Este desplazamiento, fue percibido por los excombatientes como una interrupción en su proceso, y aunque intentaron continuar con algunos de las actividades económicas en Mutatá, esto no fue posible, primero porque no era viable el traslado del total de los animales, también porque las condiciones del espacio y el clima son muy distintas, y tercero porque no existía en Becuarandó las infraestructuras construidas para la recepción de los proyectos.

Todo esto implicó unas modificaciones en la dinámica productiva al interior del lugar, que fue desfavorable para los excombatientes quienes ya habían realizado inversiones a nivel individual

²⁰ Beatriz Arias, Docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia

y colectiva en esos proyectos. La llegada a Mutatá significó en ciertos sentidos iniciar nuevamente con el proceso, adecuarse a las nuevas dinámicas regionales, y proyectar nuevamente cómo construir estrategias para la gestión de ingresos económicos. Esto no ha sido fácil, a la fecha en que se realizó este estudio en Becuarandó, se habían realizado algunos intentos por construir proyectos productivos que no han funcionado del todo bien. Al 2023 existen algunas iniciativas individuales como, una cantina, un billar, un cultivo de peces y un sembrado de maracuyá; y uno colectivo, compuesto solo por mujeres, por medio del cual realizan actividades como ventas de artesanías, de productos de las huertas o algunos aceites para la hidratación.

En definitiva, todas estas situaciones derivadas del desplazamiento forzado que vivieron estos excombatientes han complejizado aún más este proceso de reincorporación. Todo esto ha causado que siga existiendo una “dependencia” de este grupo de excombatientes al proceso estricto de implementación del acuerdo y a que en Becuarandó haya una idea de que el gobierno tiene una deuda con ellos, por la incapacidad de cumplirles y garantizar su estadía en Santa Lucía.

Entre los excombatientes asentados en el ETCR Mutatá, existe el sentimiento de no poseer nada y de estar a la espera de algo que proviene de otra parte, algo que les será dado. Para acuñar una expresión de Auyero (2009), parecen ser "otro tipo de pacientes del Estado". Los Estados convierten a los ciudadanos en pacientes al someterlos a procesos lentos, donde reina la incertidumbre, la confusión y la arbitrariedad. Es cuando se hace esperar a la gente, cuando hay demora, pero no se destruye la esperanza; cuando hay una suspensión en el tiempo, pero no se decepciona totalmente. Sobre la relación entre estos excombatientes y el Estado, Rosa, entrevistada en 2023, sugiere:

Para mí esto de transitorio no tiene nada igual pues yo vuelvo y digo que uno debe de ir viendo por sus propios medios cómo va a salir adelante, porque toda la vida no nos podemos acoger, esperar o esperar a lo que el gobierno nos quiera dar o a lo que otra persona pueda hacer por nosotros (Rosa, comunicación personal, 2023)

En el mismo sentido, Daniela (excombatiente), durante una de las entrevistas realizadas, hizo una acotación con la que logró expresar bien, ese sentimiento de espera, y ese lugar de liminalidad, entre la incertidumbre y la esperanza, en la que se encuentran hoy en Becuarandó:

Pero, dígame, nosotros con un millón de pesos, que es lo que nos llega a los excombatientes (...) ¿con qué vamos a construir una casa? A nosotros nos toca quedarnos en esas casitas de tabla, y el día que se nos caigan encima, ahí si será ir a comprar un platico y armar un

rancho (...) Hoy, todos nos sostenemos de la renta que nos llega (...) De verdad, que la cosa se va volviendo muy complicada, si no somos capaces de mirar hacia el futuro (Daniela, comunicación personal, 2023).

3.4. Miradas socioespaciales de los lugares transicionales de paz: mi posicionamiento.

"Lo que nos mueve, lo que nos hace sentir, es también lo que nos mantiene en nuestro sitio"

Sara Ahmed, 2004

La “pertinencia” de este tipo de procesos de investigación, es un asunto que debe interrogar a la academia, implicar a las comunidades objeto de análisis, y existir en quien investiga. El interés de profundizar en lo que hasta aquí se ha abordado, está dado por supuesto en el lograr obtener un título académico, aportar en algo en los estudios de paz imprimiendo un sentido socioespacial en las reflexiones, movilizar de algún modo el conocimiento que albergan estos lugares transicionales y los excombatientes que los habitan, pero, también y sobre todo (como se mencionó en la introducción) en mí, como mujer colombiana. En lograr comprender mejor la realidad que habito, y a partir de allí construir elementos propios que, en la práctica, en los días por venir, me lleven a hacer parte de los procesos de base que han sostenido al posacuerdo y van nutriendo de sentido a la paz territorial.

Del recorrido conceptual, metodológico y vivencial realizado surgió información que posibilitó la construcción de reflexiones propias, las cuales, son planteadas como el aporte en clave socioespacial que esta investigación realiza frente a un tema actual y complejo: el posacuerdo en Colombia. Estas, serán presentadas por apartados, pues, aunque han surgido del mismo proceso analítico, en su centro contienen elementos que se considera importante diferenciar. Se aludirá a ellas de la siguiente forma: 1) la paz territorial: un encuentro que crea redes, 2) la apropiación espacial y su relación con la infraestructura, 3) las múltiples transiciones en el proceso de reincorporación.

-La paz territorial: un encuentro que crea redes.

Aunque el acuerdo planteó una visión de paz territorial enfocada en la integración y el desarrollo de regiones históricamente afectadas por el conflicto armado y en lograr abordar las raíces estructurales de este -la tenencia de la tierra- a través de la reforma rural, el ordenamiento territorial, la participación política y reincorporación de excombatientes, en la práctica, la implementación de este enfrenta desafíos significativos, entre los que se encuentran, la desconexión entre las políticas diseñadas a nivel nacional y su ejecución en las regiones en las que persisten violencias ejercidas por otros grupos armados y donde continúa habiendo una presencia estatal limitada.

Debido a estas particularidades territoriales, el avance en términos de reincorporación al interior de estos lugares transicionales ha sido variable, como se vio existen diferencias en los procesos de conformación, en las capacidades de gestión, en los niveles de apropiación de los lugares y en los tipos y avances en las múltiples transiciones que los atraviesa. Así que la realidad de estos lugares, y las prácticas de paz dadas en ellos, pone en evidencia la diferencia entre la normativa que ha planteado el enfoque territorial de paz en el AFP y las prácticas sociales y espaciales que están sucediendo en regiones como Urabá.

Pimienta, García y Álvarez (2021) al respecto sugirieron que, el enfoque territorial de paz, descrito en el documento del acuerdo, no ha logrado la horizontalización territorial, por el contrario, ha reproducido la verticalidad de la política de paz, que no logra responder a las realidades locales. Las estrategias planteadas para la implementación del acuerdo no han incluido realmente a los actores locales, por lo menos desde el diseño institucional del posacuerdo, en la toma de decisiones políticas, administrativas y económicas, ni se ha descentralizado (Cairo et al., 2018) u horizontalizado (Pimienta et al., 2021) la política en realidad.

La apuesta con la territorialización de la paz, estaba dada en la inclusión de una visión que permitiera, primero comprender la relación estructural existente entre la tenencia de la tierra y el conflicto armado en Colombia, segundo, entender que las violencias ejercidas en el marco del conflicto se plantearon de forma diferencial en el territorio nacional, proponiendo una visión socioespacial que se resume en la constitución de las geografías de la guerra (García et al., 2011) y tercero, se esperaba que, esta visión de la paz, permitiera reconfigurar las brechas históricas,

políticas, económicas y culturales existentes entre lo que se ha denominado centro-periferias (Serje, 2011).

Sin embargo, a 7 años después de la firma, la implementación de lo pactado territorial y diferencialmente en el acuerdo parece estarse aplicando desde la verticalidad y el centralismo de siempre (Pimienta et al., 2021), pues la vinculación real y efectiva de los actores locales en estas agendas sigue siendo muy limitada. El presupuesto normativo del acuerdo de construir políticas, programas, acciones de paz proyectadas y realizadas por todos parece haberse desvanecido en el tiempo. En respuesta a esto, los modelos para la medición de la implementación del acuerdo, se basan en la construcción y análisis de datos, que aunque muy significativos pues dan cuenta, algunas veces de interpretaciones críticas y reflexivas sobre el avance de lo pactado, poco permite conocer la percepción de los actores locales que están a diario consolidando las prácticas de paz que sostienen el acuerdo, parecen dejar por fuera, la perspectiva situada de quienes habitan o se relacionan con estos lugares transicionales, y la reconfiguración socioespacial que ha suscitado la aparición de estas nuevas territorialidades de paz. En respuesta esta realidad “institucional”, en la cotidianidad de estos lugares transicionales, se ha ido construyendo un sentido territorial de la paz que ha mantenido a los excombatientes en San José de León y Becuarandó. “Desde abajo”, desde los actores locales conocedores de las particularidades de su región, se han ido constituyendo redes y dando prácticas sociales y espaciales cotidianas que han dado una perspectiva situada que llena de sentido lo propuesto en el acuerdo pues es el reflejo de un enfoque territorial que ha sido apropiado por los múltiples actores haciendo de este un proceso realmente potente a nivel de sociedad. A continuación, se analizará cómo las prácticas que se están realizando en estos lugares transicionales hacen parte de acciones que han llenado de sentido a la paz territorial y lo que representa en el marco del posacuerdo que acontece en Colombia.

“La paz es esto, negrita, que estemos vos y yo aquí sentados. Usted de la Universidad hablando conmigo, que era del monte” (Conversación informal con excombatiente, 2022).

Escuchar estas palabras durante una conversación informal en Becuarandó, me tomó desprevenida. Primero, porque, aunque mi visita a este espacio la realicé con el objetivo de intentar responder el interrogante ¿qué entienden los excombatientes asentados en SJDL y Becuarandó por paz?, en ese momento del proceso de investigar, que es tan complejo, las respuestas parecían lejanas, imperceptibles e inconclusas. Además, en ese momento no me encontraba en lo que yo

consideraba, el papel de investigadora, uno que pensé, hasta ese instante que se restringía a los escenarios en que estaba realizando una entrevista, leyendo un texto sobre los temas de mi interés, realizando los recorridos de observación o en definitiva cuando estaba aplicando técnicas y estrategias que concebí en la metodología para el desarrollo de esta investigación. Segundo, porque esta no fue una respuesta a un interrogante que yo hubiera realizado a mi interlocutor, sino un sentimiento, una construcción propia (del excombatiente) que emergió de una conversación casual.

Me costó tiempo, y la conversación con colegas, amigos y mi asesor, comprender la verdadera relevancia que tenía esto, no solo para mi investigación sino para la transformación de mi propia idea de lo que podría significar en concreto ese anhelo de paz. Escuchar esto del excombatiente que me transportó desde la vía pavimentada hacia la entrada, me permitió comprender, primero, que el proceso de investigar nos atraviesa todo el tiempo, cuando se está dentro del quehacer investigativo parece no haber momento para la investigación y momentos para el resto de la vida, sino que se da una simbiosis que dura por lo menos, el tiempo que cuesta producir el resultado final, en este caso la escritura de este trabajo; y que la metodología es desbordada por los acontecimientos cotidianos como este. Los datos, la información, las razones que a veces se necesitan para argumentar el por qué continuar en esto, están en todas partes.

El eco que tuvieron estas palabras me ayudó a hilar y descifrar las resonancias que se fueron dando durante el proceso de construcción de la información. En una entrevista “formal” realizada a un excombatiente en 2023, en la que pregunté ¿usted considera que aquí (en el lugar transicional) se está construyendo la paz territorial?, este respondió:

Si. Aquí se está construyendo paz, porque nosotros vamos a otras comunidades a convites, a integrarnos en deportes. Hemos ido a La Fortuna donde hemos ayudado a construir una caseta, hemos pintado la escuela; en la otra vereda que se llama Chadó estuvimos también ayudando a hacer una caseta comunitaria y por muchas veredas, hemos estado integrándonos con las personas en convites, en deportes, fútbol y micro, etc. (Martín, comunicación personal, 2024)

Esta respuesta, me permitió conectar lo que para estos excombatientes significa la “paz” y como esto se relaciona de forma directa y permanente con la posibilidad práctica y real de juntarse con los otros. En la medida en que logré ir vinculando esa múltiples narrativas para la construcción de un propio sentido de la paz territorial, recordé el postulado de Courtheyn (2022), quien menciona que debe realizarse en los estudios sobre la construcción de paz, un esfuerzo por superar la posición

que acoge o deconstruye críticamente las definiciones dominantes sobre la paz, esas que parten esencialmente de la noción de una paz negativa que se constituye a partir de la ausencia de violencia física y/o la paz positiva, entendida como la ausencia de violencia simbólica y estructural (Galtung, 1964) y se arriesgue a aportar elementos desde otras perspectivas que debatan o amplíen los académicamente abalados.

Él mismo, a partir de su experiencia en la comunidad de paz de San José de Apartadó, propone un nuevo significado de paz: la paz es un proceso espacial en el que se crea y se vive con dignidad sin comprometer la de otras personas, lugares y seres (Courtheyn, 2022). A esta definición le agrega un concepto, que para esta investigación resulta potente conceptualmente, y que metodológicamente permitió clarificar y llenar de sentido la idea de paz que se había ido construyendo a partir de las diferentes entrevistas, conversaciones y lecturas realizadas. La paz, para este autor, es *transrelacional*, es decir, en ella están implícitas la dignidad arraigada, las formas particulares de solidaridad que supera la mera interconexión, y que construye mundos alternativos y relaciones de solidaridad (Courtheyn, 2022).

La paz se construye, no es un fin, no se llega a ella, y no debe seguirse un manual (aunque los haya) para hacer parte de un proyecto de paz. En los casos de Becuarandó y San José de León, esta se da cuando se consolidan procesos de resistencia ante las dificultades de la implementación, con el propósito de mantenerse en el camino creativo de construir una vida por fuera de las realidades violentas que los anteceden (Lederach, 2008), y de materializar, mediante las prácticas cotidianas proyectos que resignifican su relación con el lugar pero también, el pleno proyecto de vida (Peña, 2019). La paz, como lo expresó Liliana en la entrevista realizada en 2023:

Es poder ser amigos. Hacerle entender a la gente que a pesar de que nosotros venimos de otra parte, que venimos de una vida difícil, queremos cambiar y que es por eso que les ofrecemos nuestra amistad. Esta es la ocasión para demostrar que todos somos iguales, o para mí, todos somos iguales. Todos tenemos derecho a nuevas oportunidades en la vida, tenemos el derecho de hacer nuevas amistades, debemos tener la facilidad de poder hablar con cualquier persona, sin ego o culpa, sin pensar, es que yo fui eso, yo fui lo otro, y por eso me voy a creer, no, porque todos somos iguales. (Liliana, comunicación personal, 2023)

La paz, es poder estar juntos. En esta y otras conversaciones fue común encontrarse que a la pregunta sobre ¿cómo se está construyendo la paz? Se respondiera con expresiones que remiten a la posibilidad de encontrarse con otros, de construir conjuntamente, de ayudarse y convivir. El

camino hacia la reincorporación y el restablecimiento del tejido social es complejo, existen tensiones, resistencias, apatía, hay cimientos de estigmatización que no han desaparecido, heridas en las víctimas que siguen abiertas, incumplimientos administrativos y la persistencia de dinámicas bélicas que ponen en vilo la permanencia del posacuerdo, en fin, son múltiples los factores sociales, económicos y políticos que retan a diario a aquellos que como los excombatientes, continúan 8 años después, configurando redes de apoyo, que les permitan sostenerse en el proyecto de “volver a la vida civil”.

La territorialización de la paz aparece, cuando en contextos concretos como estos lugares transicionales se dan transformaciones pequeñas que al sumarse generan modificaciones en los sentidos de vida, y fundamentalmente, como lo sugirió Courtheyn, cuando se da la posibilidad de *transrelacionarse*. Estos procesos, según lo hallado en esta investigación, están sustentados, en parte, en la construcción de redes sociales particulares y descentralizadas compuesta por los diversos actores presentes en la región (alcaldías, comunidad La Fortuna, Comunidad SJDL, organizaciones nacionales e internacionales etc.), que han ido solidificando en la cotidianidad la posibilidad de permanecer y de transitar hacia esta nueva forma de vida sin armas, haciendo de esta paz no solo territorial sino también *transrelacional* (Courtheyn, 2022) y *relacional* (Lederach, 2008).

El “encuentro” entre la resistencia de los excombatientes, el deseo de vivir por fuera de la guerra, la responsabilidad individual y colectiva de resarcir el daño causado, de recomponer a aquellos a quienes en el marco del conflicto armado se les produjo tanto dolor, de restablecer un tejido social roto por la dinámica bélica de la que hicieron parte, como una apuesta de futuro en la que pueda garantizarse la no repetición en las víctimas y en ellos, con la resiliencia de las comunidades de La Fortuna y San José de León, las fortalezas organizativas y comunitarias de estas y la gestión institucional (pública y privada) y la de las organizaciones nacionales e internacionales presentes en esta región, es que se ha hecho posible la existencia y permanencia de estos lugares para las transiciones.

En otra de las entrevistas realizadas se realizó una mención, que recoge bien esta idea de paz expuesta hasta aquí:

“Para mí la paz es tener tranquilidad, poder compartir con las personas, ayudar, integrarse con comunidades, hacer actividades de una u otra manera siempre en colectivo y tener

derechos, y que nuestros derechos sean respetados, eso es paz para mí, tener derecho a la vida” Martín, comunicación personal, 2023.

- **La producción del espacio: la relación entre el tipo de infraestructura, el sentido de temporalidad y la apropiación socioespacial.**

“Estamos más seguros, pero es aún difícil imaginarnos el futuro, se vive la incertidumbre del día a día” (Daniela, 2023).



Fotografía 12. Vivienda en construcción NAR San José de León

Fuente: Registro propio, 2022

En este trabajo de investigación pudo identificarse que las formas de conformación de estos lugares (NAR o aETCR) y la infraestructura diseñada, influye de manera determinante en aspectos claves para los estudios socioespaciales como son la apropiación espacial, la configuración del sentido de lugar, el tipo y profundidad de las redes construidas con los demás actores presentes en la región, y el sentido de temporalidad. Entre San José de León y Becuarandó hay diferencias en el

proceso de conformación, esta es una cuestión que evidencia cómo en el marco de la puesta en marcha del acuerdo se han ido dando transformaciones que responden a los incumplimientos y dificultades para su implantación, pero también a la capacidad de los diversos actores involucrados en construir alternativas que los sostenga en el proceso.

El caso de San José de León, los excombatientes debieron sobreponerse a los limitantes socioambientales y construir estrategias para garantizarse la permanencia en la ruta de la transición. Tomar esa decisión, irse de Gallo, implicó desligarse de las “garantías” estatales, como la entrega de alimentos, la provisión de viviendas, la garantía al acceso de servicios públicos como agua y energía, y de servicios sociales como educación, atención psicosocial, etc., es decir, en cierto sentido fue tomar una ruta de mayor “independencia”.

En “el valle de las piedras”, como se nombró inicialmente el predio en el que hoy se instala la NAR, todos pusieron su parte, por ello, lo sienten propio. Fueron ellos quienes lo construyeron, entre todos han logrado tejer relaciones que superan la idea de colectividad interna que tienen como excombatientes “nosotros”, y se ha expandido hacia afuera. Con las comunidades vecinas de San José de León, La Fortuna y Caucheras han realizado múltiples encuentros con el interés de vincularse en actividades recreativas y de entretenimiento como celebraciones de días de la madre y el padre, del amor y la amistad, navidades, partidos de fútbol, etc., lo que ha fortalecido su relación. Han procurado crear y mantener diálogos constantes con los representantes de la alcaldía, gobernación, ARN y demás funcionarios de organizaciones nacionales e internacionales, con el objetivo de dar continuidad al proceso de reincorporación y también garantizar una participación que incida efectivamente en la identificación de necesidades, en la construcción de programas, y en la implementación de estos en los lugares transicionales, aportando así a la consolidación de relaciones más horizontales entre actores y a la territorialización real de las prácticas de paz.

En el caso del ETCR Mutatá (Becuarandó), aunque hubo también una reubicación del lugar transicional, este partió del incumplimiento directo, el Estado colombiano no les garantizó la seguridad y la vida. En estas condiciones, fue el gobierno quien lideró el proceso para que pudieran reubicarse en Mutatá y el responsable de conseguir el predio de Becuarandó en el que están ubicados, construir el “caserío” y las viviendas, y garantizar la conectividad, la alimentación, el acceso a los servicios públicos y sociales.

Las relaciones construidas entre este grupo de excombatientes y los actores externos (las comunidades vecinas y los representantes de la institucionalidad), aunque existe y es continua, no

tiene tanta profundidad como la construida en San José de León. Esto se debe, según lo identificado a dos razones principalmente. Primero, a que como quienes llegaron a Mutatá inicialmente fueron los excombatientes de San José de León, fueron estos quienes debieron desde cero ir cimentando un terreno de confianza, respeto y solidaridad ante la duda, el escepticismo y la estigmatización que había respecto a la llegada de los desmovilizados, al final se dio allí un complejo reencuentro entre víctimas y victimarios. Al proceso de restablecimiento del tejido social, sucedido en Mutatá, los excombatientes de Becuarandó llegaron en un momento un poco más avanzado, en este caso, podría decirse se dio fue una inserción a la dinámica ya liderada por la NAR.

Segundo, existe en el aETCR un sentido de provisionalidad, de estar en un lugar que no les pertenece y del que van a trasladarse en algún momento, además con el que previamente (a diferencia de los de San José de León) no se sentían tan vinculados territorialmente. Todo esto ha derivado en la construcción de unas relaciones que, aunque existentes, son menos constantes y profundas con las comunidades vecinas y más verticalizadas y de dependencia con los actores institucionales presentes en la región. Ver Fotografía 13.



Fotografía 13. Viviendas "caserío" ETCR Mutatá (Becuarandó)

Fuente: Registro propio, 2023.

Por otra parte, dado que este no ha sido concebido como un lugar permanente, sino para la transición hacia la vida civil, y hoy quienes lo habitan están a la espera de la adjudicación de predios individuales y/o colectivos para el asentamiento definitivo, se ha dado en Becuarandó un proceso de apropiación diferente. La provisionalidad del aETCR Mutatá, se manifiesta incluso en las viviendas, estas no pueden ser intervenidas, lo que restringe a sus habitantes a la capacidad de “apropiarse”, esto es, de personificarlas, modificarlas, ampliarlas, pintarlas, reconfigurarlas, de hacerlas suyas de manera permanente. Esta condición de las viviendas se replica en el predio rentado. En este caso, no deben realizarse construcciones “permanentes”, por lo que además de las construidas no hay otras infraestructuras creadas o adecuadas según las necesidades o preferencias de los excombatientes que habitan allí.

Según lo comentado por los profesionales de la ARN entrevistados, no ha sido posible, ni siquiera luego de 4 años, la instalación de las viviendas que en la planeación se habían definido

como permanentes para el aETCR. En las que habitan son las provisionales, son infraestructuras pensadas como una solución rápida para acogerlos luego de su traslado, pero se dio el compromiso de la construcción de unas más amplias y acordes a las necesidades de los excombatientes y sus familias. Hoy, los excombatientes ya ni siquiera esperan dichas adecuaciones.

Aunque para los firmantes el anhelo es que el Estado les cumpla y pueda cada uno recibir un predio en el cual proyectar individualmente sus vidas, en lugares distintos según el deseo de cada uno, la información institucional contrasta con esto, pues lo que se sugirió en el marco de esta investigación, es que la Agencia Nacional de Tierras -ANT- ahora tiene la propiedad del predio en el que se encuentra el ETCR, y se están realizando los trámites para lograr transferir la titularidad de esta tierra a los excombatientes. Cuestión que entra a aumentar la duda sobre si es este o no un lugar provisional.

Lo cierto es que, a hoy, en este lugar transicional, se ha configurado otro tipo de “*pacientes del estado*”, que como expresa Auyero (2009), refiere a aquellos que están a la espera de que llegue lo prometido, para dejar atrás el tránsito y realmente iniciar con la nueva vida. Esta idea de provisionalidad y de espera ha tenido implicaciones en el proceso de apropiación del espacio. Estar detenidos en la incertidumbre de si van a llegar los predios para cada uno, si por fin les van a cambiar los techos de teja de Zinc que les genera tanto exceso de calor, si de verdad van a cumplirles, si Mutatá será o no el municipio en el que se quedarán para siempre. Todo esto, ha hecho que para ellos sea más difícil lograr imaginarse el futuro, y construir una relación de pertenencia que los ligue definitivamente con el espacio. Rebeca, una de las excombatientes que hace parte del aETCR Becuarandó, expresó lo siguiente sobre el sentido de provisionalidad.

Nosotros contábamos con que esto iba a ser provisional, con que de verdad nos iban a hacer unas viviendas, Pero, últimamente la ARN nos dijo directamente que no hay recursos para vivienda. Entonces en este momento nos estamos haciendo la idea de que aquí nos toca quedarnos, y que cada uno tiene que ir mirando cómo va a construir su propia casa (...) nosotros nos estamos haciendo a la idea de que esto es definitivo porque el gobierno no nos va a dar más nada (Rebeca, comunicación personal, 2023).

Este relato de Rebeca evidencia lo confuso del momento de transicionalidad en el que se encuentran los excombatientes en Becuarandó y la poca información certera que tiene respecto a qué sigue y qué realmente pueden esperar, también, hace alusión a la necesidad y anhelo de estar en una vivienda que resulte más adecuada a sus necesidades y que sientan propia. Las

particularidades en este aETCR han hecho que el proceso de identificación con el lugar sea más lento y permitió comprender que la apropiación de un espacio está relacionada, por lo menos en este caso, con la sensación de permanencia y estabilidad.

En definitiva, es relevante para los procesos de reincorporación y en ese sentido de construcción de paz, que quienes se encuentran en transición como los excombatientes puedan “sentir”, como en el caso de San José de León que el espacio es propio, que hay capacidad de incidencia y de decisión sobre el mismo, que se ha construido por un esfuerzo colectivo. Esto les ha permitido, primero, la producción de un lugar en el que se refleja una visión de vida que es singular por parte de quienes se han asentado allí, es decir, además del asentamiento en un lugar se han dado procesos de apropiación y de construcción de identidades alrededor de estos.

Segundo, el desarrollo de una capacidad de gestión y relacionamiento en los excombatientes que ha permitido la construcción de redes más fuertes con la institucionalidad (nacional e internacional) y con la comunidad aledaña, que ha hecho material no solo la visión de una reincorporación a la vida civil sino también la posibilidad de reconfigurar los espacios que habían sido propios del uso de la guerra en lugares donde hoy han estado construyendo escenarios de convivencia. Lo que, si se interpreta a la luz de lo expresado por García y Aramburo, podría dar cuenta de la emergencia de una nueva “territorialidad de paz”.

Hacer parte del proceso de paz, estar adscritos en el proceso de reincorporación del AFP, implicó para los excombatientes un alto en el camino, detenerse e imaginarse una nueva forma de construir la vida, bajo la sombra de la incertidumbre que genera lo desconocido, pero que hoy ha constituido nuevas identidades y otras formas de relacionarse con el territorio. Aunque para Becuarandó y San José de León los procesos de apropiación, esto es, de generación de identidad con el espacio que habitan ha sido distintas, en ambos casos está ocurriendo, y ha significado la construcción de dos lugares que sirven como “nodos” (Massey, 1994) y en los que interactúan diversas formas, voces y sentidos, que los ha hecho propios.

Estos lugares transicionales, son marcos en los que han ocurrido múltiples transiciones, y en los que se han ido reconfigurado relaciones con los otros y con el espacio, de allí han emergido nuevas subjetividades y también se han ido forjado nuevos lazos identitarios y sentidos de pertenencia. Dentro de estos lugares están los excombatientes de las FARC-EP, pero, no están solos, las “fronteras” que los constituyen como lo sugirió Massey son porosas, aunque en ellas se sostiene una idea de “nosotros” entre los excombatientes, han sido atravesadas durante el tiempo

de reincorporación por la potencia de la interacción con los otros, sus conocimientos y capacidades, evidenciado que son lugares vinculados necesariamente a dinámicas externas y a realidades escalares en las que influye tanto lo local como lo global.

- “La incertidumbre del día a día”: el tipo de infraestructura y su relación con el sentido de temporalidad.

Ese sentido temporal, aquí nominado como de provisionalidad no está solo relacionado con las sensaciones de espera e incertidumbre en las que habitan los excombatientes o en las formas en que se han ido dando los sentidos de pertenencia y de lugar, sino también en el uso de los materiales con los que estos se han construido. La temporalidad está en las casas de madera, en las vías sin terminar, en el anhelo de una escritura de propiedad, en no poder realizar adecuaciones a las viviendas, en no ver posible una proyección económica que los sostenga a largo plazo allí, en la relación de dependencia estatal, pero también en las viviendas construidas para siempre en San José de León, en el acueducto comunitario que logró instalarse en La Fortuna, en las vías realizadas en ambos casos que conectan a las veredas con la doble calzada, en las nuevas aulas escolares, a las que tienen acceso los niños y niñas hijos de excombatientes y también los que residen en las comunidades locales. En fin, está en la experiencia que va creándose en la cotidianidad desde la relación de los múltiples actores y la infraestructura que ahora los rodea, que está en la tensión entre lo que parece ser duradero y estable y lo que puede cambiar y ser pasajero y que responde a cómo la gente construye esos significados y sentidos sobre las infraestructuras desde sus experiencias cotidianas.

En ambos casos, en San José de León y en Becuarandó, la apropiación espacial ha significado la producción material de infraestructuras que han modificado el entorno, el paisaje y han impactado la realidad social a nivel local. Además, pensar en la relevancia que tiene la infraestructura como elemento analítico para los estudios de las ciencias sociales, implica poder leerla en términos temporales, esto es, en el momento histórico particular en el que emergen, en este caso dentro de la implementación del acuerdo de paz y en la perspectiva temporal que se les ha asignado. Estos lugares, fueron construidos para la transición de los excombatientes hacia la vida civil, es decir, con la intención de que no fueran permanentes, sin embargo, estos están siendo paradójicamente incumplidos por el mismo gobierno.

Sin embargo, la realidad temporal de estos lugares transicionales ha desbordado la temporalidad propuesta por el gobierno en el acuerdo. En el caso de la NAR, aunque el objetivo de la construcción de un lugar para la reincorporación de los excombatientes hacia la vida civil permanece, desde el inicio la propuesta de provisionalidad que acompaña este lugar fue superada. En Becuarandó, la compleja realidad del proceso de implementación ha desvirtuado los tiempos establecidos, y ha puesto en cuestión no solo la durabilidad sino la credibilidad de los excombatientes en el proceso, haciéndolos vivir en medio de la incertidumbre.

Por otra parte, hay en la infraestructura construida para y por los excombatientes, dentro y fuera de los lugares transicionales otra relación que no puede desconocerse, y es cómo esto no solo los ha vinculado a las comunidades locales porque los beneficia también a ellos, sino porque la infraestructura ha servido como un tipo “dote” para lograr el acercamiento entre actores. En muchos contextos, tanto por los excombatientes como por las comunidades, estas han sido entendidas como parte del relato de la paz y como formas de resarcir los daños y el abandono de décadas. Como lo expresa Ramírez: “en los discursos y agendas de construcción de paz, la noción de reparación a las víctimas del conflicto armado se ha vuelto inseparable, cuando no un sinónimo, de la construcción de obras de infraestructura” (Ramírez Zuluaga, 2022:90).

Así que las vías, los acueductos, las aulas múltiples, las aulas comunales, etc., mencionadas durante el relato de esta investigación, no podrán ser entendidas solo como las “necesarias” para la construcción de estos lugares transicionales sino también como “puentes”, estrategias y respuestas materiales al proceso de reconciliación o por lo menos del intento por restablecer un tejido social que les permita a los excombatientes habitar estas regiones.

Esto, de a poco ha ido llenado no solo los discursos sino por los sentidos de la paz, haciendo que en contextos tan complejos como Urabá, la posibilidad de construir paz dependa de visiones de desarrollo local y económico, que prioriza los proyectos de infraestructura convirtiéndolos en instrumentos, que muchas veces carecen de sentidos prácticos, comunitarios y organizativos y son más del provecho de los discursos políticos e institucionales para referir al cumplimiento y/o al mejoramiento de las condiciones de estas regiones, cuestión que no es siempre cierta.

En definitiva, existe una relación entre la paz y la infraestructura, en la medida en que esta puede dar cuenta del proceso de apropiación social que posee un colectivo como el de los excombatientes con los lugares transicionales que han ido construyendo, también, porque ha servido como estrategia de acercamiento a las comunidades y de vinculación en procesos

organizativos que los convoque a ambos, pero también, porque a partir de esta puede darse cuenta de los incumplimientos por parte del Estado, de las complejidades de poner a la infraestructura como bandera de paz en un proceso que es de fondo político y social y porque, la necesidad de estas da cuenta de las desigualdades de estas comunidades, que por décadas han estado en la espera de infraestructura que les permitiera conectividad o acceso a servicios públicos y sociales responsables.

- **La seguridad de la paz: “saber que no nos van a matar”.**

“La paz es saber que no te van a matar” (Rebeca, comunicación personal, 2023.)

La seguridad es un aspecto clave que transversaliza todo el proceso de un posacuerdo, poder garantizar la vida, es sin duda el primero de los retos para el gobierno y la principal solicitud de los actores relacionados. La llegada de los excombatientes a Mutatá significó temores y tensiones a nivel comunitario, tanto por las dudas sobre el éxito del proceso, como porque la llegada de estos implicaba emprender el camino de intentar restablecer las relaciones entre quienes fueron víctimas y victimarios. Ha sido también un reto a nivel institucional, tener la capacidad de garantizar la vida de los excombatientes y ofrecer a las comunidades receptoras la seguridad de que la llegada de estos actores a la región no iba a implicar el aumento de las condiciones conflictivas aun presentes que pusieran en riesgo su seguridad.

Y por supuesto, es la principal solicitud y el más grande temor de los excombatientes “*que no nos maten*”. Aquí se realizará un análisis considerando la perspectiva al respecto de los excombatientes, teniendo en cuenta, el caso particular de Santa Lucía, en donde fueron objeto de violencia directa que terminó en el asesinato múltiple de firmantes y familiares de estos dentro del ETCR. Así, pues, las condiciones para la paz no implican solo la firma de un acuerdo entre los dirigentes de grandes organizaciones políticas, ni el despliegue único de infraestructura de desarrollo, ni diseñar rutas estratégicas para que los excombatientes luego del desarme regresen a la dinámica social, cultural, económica y política de la vida civil, sino también, y de forma especial desde las posibilidades técnicas, institucionales y de poder, garantizar la vida de quienes se acogen a este tipo de procesos. “Estar en paz, es sentirse seguro, es saber que no te van a matar” (Rebeca, 2023).

Como uno de los hallazgos de esta investigación, que aportó además a construir una comprensión en clave socioespacial de la forma en que se ha construido este proceso de paz y las acciones de su implementación, está el hecho de que este factor, el de la “seguridad”, está relacionado de forma directa con el por qué estos excombatientes eligieron reubicarse en Mutatá, luego de los procesos fallidos en Santa Lucía, Ituango, y en Gallo, Tierralta.

Mutatá es un municipio que, como se especificó en el capítulo 2, ha sido estratégico para la guerra en Colombia, e hizo parte de la incidencia de las FARC-EP durante medio siglo. En la actualidad, en esta región, se ha dado una reconfiguración socioespacial que no solo ha incluido las transformaciones resultado del ingreso de estos lugares transicionales y con ellos del despliegue institucional de organizaciones nacionales e internacionales, sino también, una reconfiguración de los órdenes bélicos locales, esto es, del dominio político y armado de una región que sigue siendo parte de un conflicto armado que genera presiones a la paz.

Pese a estas complejas condiciones, Urabá se posicionó como lo sugirió uno de los profesionales del Instituto Kroc como la “tierra prometida”. Según la información construida aquí, pensarse en este lugar como uno seguro para continuar con los procesos de reincorporación, tiene que ver paradójicamente con una visión que sigue estando en lógica de guerra, y que es por demás muy espacial. Urabá en general y Mutatá en particular, es una región geográfica y socialmente conocida por la mayoría de los excombatientes que integraron los Frentes 5, 58 y 18 de las FARC-EP, es, por tanto, un espacio en el que “saben cómo moverse”, y el que, según lo manifestado por Franco, excombatiente, hace parte de lo que, para ellos, en combate era la “zona de repliegue” (Serranía de Abibe, el Parque Natural Nudo de Paramillo, y los ríos en Mutatá que conducen hacia el Chocó). Estar en esta región, era pues, la posibilidad de replegarse en caso de que el acuerdo fracasara o como colectivo se definiera no continuar.

en Gallo y Santa Lucía, y ahora los establecidos en Mutatá, están ubicados alrededor del PNN Nudo del Paramillo, en todos los casos, están cercanos a ríos que fueron importantes para el transporte en el marco del conflicto, y en todo caso ninguno es externo a lo que antes se presentó como zonas de incidencia de las FARC-EP.

Por otra parte, en Urabá han existido condiciones sociales que durante años (desde la década de los 70), permitieron el ingreso y el sostenimiento de la guerrilla de las FARC-EP en la región. Aunque se sabe que, posterior al ingreso de los actores paramilitares y narcotraficantes a la región, en los años 90, se dio una intensificación del conflicto, y se produjeron acciones que afectaron directamente a la población civil (extorsiones, secuestros, desapariciones, torturas, asesinatos y desplazamientos), lo que transformó el vínculo societal establecido entre esta territorialidad insurgente y las territorialidades socioculturales (García y Aramburo, 2011). Sin embargo, esta sigue siendo una región en la que los excombatientes perciben condiciones sociales en las que sería posible realizar el proceso de transitar hacia la vida civil, como la disposición de algunas comunidades para permitir la construcción de estos lugares transicionales dentro de sus veredas o corregimientos, y asumir la cercanía cotidiana con excombatientes, y también la institucionalidad (alcaldía y gobernación), quienes asumen no solo el reto político y de orden público sino también las complejidades administrativas que esto significa.

En definitiva, lograr materializar estos lugares transicionales en Mutatá no ha sido una cuestión carente de complejidades. Además, de las dos razones antes expuestas, lograr la construcción de estos lugares en una región donde persiste el conflicto, según las fuentes institucionales (ARN, Alcaldía) y los relatos de los excombatientes, implicó negociaciones, esta vez a nivel local, entre los diversos actores (armados, económicos, políticos y organizativos)²¹, para lograr las condiciones sociales y políticas, que permitieron la llegada de estos excombatientes a La Fortuna, la construcción de redes que han dinamizado y hecho perdurable este proceso de reincorporación, y sobre todo, la seguridad de los excombatientes y sus familias.

En Mutatá, por lo menos hasta el momento en que se realizó esta investigación, no se han presentado muertes de excombatientes o familiares por razones políticas, y existe entre estos una

²¹ Aunque en las distintas entrevistas realizadas a profesionales de la ARN, Alcaldía, excombatientes, profesores universitarios, cuando se les indagó sobre por qué Mutatá, expresaron de forma concordante que, en parte esta decisión está sustentada en la realización de acuerdos internos, ninguno dio detalle sobre los actores propios vinculados en estas negociaciones. Por lo que, este, aunque es un asunto de gran relevancia no logró presentarse en esta investigación a gran profundidad.

percepción de seguridad, por lo menos física. En una de las entrevistas realizadas a “Ñoño” excombatiente, habitante en el ETCR Mutatá, respecto a las conversaciones tenidas sobre este tema, mencionó:

Cuando estábamos en el monte y en Santa Lucía (Ituango) se vivía una zozobra. Esta zozobra se debía a que uno sentía que lo iban a matar, y es que, empezaron a matar a muchos compañeros incluso dentro del caserío (ETCR Santa Lucía), entonces uno mantenía asustado, intranquilo, la experiencia fue maluca, estábamos siempre pensando en quién será el siguiente, a uno le daba miedo salir. Ahora que ya llegamos a este espacio (ETCR Mutatá), por lo menos hasta el momento, todo es más tranquilo, entonces la experiencia es más buena, a ninguno de nosotros nos han amenazado o matado, salimos al pueblo, conversamos con la gente, ahí vamos haciendo la vida (Rafael, comunicación personal, 2024).

- **“Ya no somos los que éramos antes”: las múltiples transiciones en el proceso de reincorporación.**

El recorrido realizado hasta aquí permitió que entendiera de fondo lo difuso y polisémico del concepto de paz territorial (Cairo, 2018). Existen múltiples formas de comprenderlo y teorizarlo, tanto por parte de los centros académicos como por el Estado, las ONG, los movimientos sociales, las organizaciones de víctimas, etc., pero, también, y fundamentalmente lo difuso de esta noción está dada en las diversas formas en que se está realizando en la práctica. La paz territorial se ha imaginado y materializado en acciones cotidianas, muchas veces no muy grandes o demasiado visibles, dentro de las dinámicas propias de cada región del país. La territorialización de la paz se está dando no solo porque se han instalado políticas o procesos de reincorporación, restitución, reconciliación o reparación en contextos locales que los condicionan, sino también porque estos se están haciendo desde las potencias y las necesidades que emergen de las capacidades organizativas y de incidencia instaladas en los actores de cada uno de estos contextos.

En estos lugares transicionales, esto está sucediendo, cada día, de a poco, en un proceso complejo, no lineal, que ha requerido de resistencia, imaginación, creatividad, riesgo y resignificación. La dejación de las armas, para quienes la realizaron, fue un acto que podría decirse representó el punto de partida de un proceso de transición, sin embargo, esta fue una apuesta sobre

todo política, que planteó a nivel de país la disposición de la guerrilla (FARC-EP), en el marco de las negociaciones, de transitar hacia otras formas de hacer parte del poder político, esta vez, participando dentro de las dinámicas democráticas y partidistas, de allí, surgió la conformación del partido político Comunes, que según lo descrito en su página oficial “Lucha por las transformaciones estructurales de la sociedad, para hacer realidad los sueños de una Colombia en paz, con democracia y justicia social y ambiental”.

Ahora, aunque la dejación de las armas es un paso fundamental, sin el que el acuerdo no hubiera sido posible, existen unas condiciones posteriores que son las que lo han sostenido aún después de las dificultades que se han dado para el cumplimiento a cabalidad de este, entre estas están, las múltiples transiciones que ocurren dentro de la transición política, que, tal y como se comprende aquí, supera las transformaciones en las “formas” de hacer política, y se vinculan más bien a los múltiples cambios que se dan a nivel individual y en estos lugares también, colectivamente. Es esto, en parte, lo que hace que los excombatientes permanezcan en la decisión de dejar las armas y construir un nuevo proyecto de vida.

La transición política, es también la transición emocional, familiar, cultural, económica, gastronómica y corporal, que se está dando en las experiencias diarias, dentro y fuera de los lugares transicionales, en conjunto y de forma individual (internamente), pero también, en las relaciones que se restablecen o construyen con los que los rodean, se está dando en los excombatientes, pero también en los otros actores, que han sido partícipes de cambios a nivel local que los han puesto de frente ante unas nuevas realidades, y que, en el caso de las comunidades, les ha posibilitado también emprender su propio viaje hacia la verdad y la reparación.

En estos lugares, se ha dado la complejidad propia de la *liminalidad* (Castillejo, 2021), se ponen de frente a diario las tensiones entre el pasado vivido y el futuro imaginado, entre los desencuentros, y las nuevas redes constituidas que parten de la capacidad de los actores de imaginarse en relación con quienes fueron adversarios (Lederach, 2008); las limitaciones y los errores cometidos en la implementación y lo que finalmente se ha hecho “lo realizable” (Castillejo, 2021), entre la espera y la esperanza, entre el miedo y la voluntad de arriesgarse a imaginarse y construir nuevas formas de vivir.

En San José de León y en Becuarandó, existen, aunque inacabados, proyectos territoriales (Peña, 2018), que dan cuenta no sólo de la visión de un futuro, aunque difuso, sino también de la resignificación de los territorios y de las nuevas formas en que estos actores se están relacionando

con ellos. El futuro, está construido de lugares propios, en los que puedan realizarse proyectos productivos que sostengan una economía familiar que les permita vivir en buenas condiciones, están dados también en la consolidación de redes sociales, en la reparación del tejido social, en la posibilidad de vivir en familia, en la puesta en marcha de proyectos comunitarios que aporten al desarrollo social y económicos de los contextos en los que se vive.

Dentro de estos lugares transicionales, existen quienes desean continuar un camino individual, retornar a los lugares donde alguna vez tuvieron la vida con sus familias y continuar con las actividades tradicionales realizadas por sus padres (agricultura, ganadería, carpintería etc.), hay un anhelo de “saltar la página”, de regresar a lo que se era antes de la guerra, otros, también a la espera de la asignación de la tierra prometida en el acuerdo, se han planteado una vida juntos, continuar como colectivo y construir proyectos económicos comunes (proyecto ganadero, sembrados de maracuyá, de palma etc.) colectivos, con los que puedan generar ingresos propios que los libere de la dependencia estatal y les permita construir en libertad su nueva vida.

Sin embargo, todas estas apuestas por imaginarse geográfica y moralmente (Lederach, 2002; Peña, 2018), la vida por fuera de las armas no está siendo sencillo, las presiones que sobre el funcionamiento y perdurabilidad de estos lugares están ejerciéndose por la falta de cumplimiento estatal, por las dinámicas de conflicto que prevalecen en estos contextos, por procesos de reconciliación complejos e inagotados y por proyectos de intervención económica, psicosociales insuficientes ha hecho que, en lugares como estos, la transición hacia la vida civil, signifique, como lo expresó la profesora Valderrama “el aumento de la población rural, pobre, violentada y desplazada de Colombia” (M. Valderrama, comunicación personal, 2023).

Las condiciones en las que se encuentran los excombatientes hoy son similares a las precarias situaciones en las que viven gran parte de la población campesina en Colombia, pues, aunque la consolidación de estos lugares transicionales en contextos como el de Urabá ha significado la construcción de infraestructura solicitada por décadas por las comunidades locales, como las vías y las aulas escolares, esto, no ha derivado directamente en el mejoramiento en la calidad de vida de quienes históricamente se han asentado en esta zona, ni ha garantizado condiciones de bienestar económicos y social dentro del ETCR y la NAR.

Pese a estas realidades complejas, dentro de estos lugares se da la transición, una que es movimiento, concreta y material. En estos lugares transicionales, puede percibirse, es visible, es narrada y real. En el Gráfico 2 se muestran algunas de las transiciones que atraviesan los

excombatientes de estos lugares, que se nombraron en las entrevistas realizadas o emergieron en las lecturas. Estas son diversas, están conectas entre sí, las unas derivan de, dependen o constituyen a otras, haciendo del proceso de transitar un asunto multidimensional, complejo, cotidiano, no lineal y liminal, para seguir a Castillejo (2021).

En relación con este hallazgo, Marta Valderrama, quien acompañó el proceso de los excombatientes del Frente 18 en la instalación inicial en Santa Lucía y posteriormente el traslado hacia Becuarandó, expresó sobre el proceso de reincorporación: “el paso de la vida en armas a la civilizada tuvo muchas dificultades, había mucha recurrencia a la vida en armas, en lo que decían y en cómo actuaban” (M. Valderrama, comunicación personal, 2023)

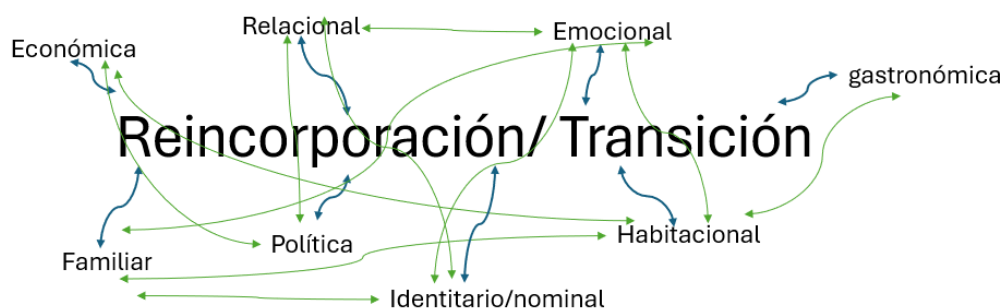


Gráfico 2 Múltiples transiciones

Fuente: registro propio, junio de 2023, primera visita.

La transición política ha sido entendida como el paso de la vida combativa a la civil, en el medio de esta ocurrió el desarme, la constitución del Partido Comunes y también la constitución de estos lugares para la transición. Se han dado transformaciones en las formas de habitar lo doméstico, pasar de vivir en “el monte” o “el rancho en el monte” a las casas de madera que les dio el “estado” en Becuarandó, y las casas en adobe, cemento y varilla que construyeron en un acto de autogestión en San José de León. Esta implicó, modificaciones en el “tipo” arquitectónico de los lugares donde vive y en el acceso a servicios públicos y sociales básicos y la posibilidad de convivir y reconstruir los lazos con sus familias. Ha permitido además el acceso a cascos urbanos (Mutatá y Chigorodó), y a vías de conexión con grandes ciudades del país.

La transición económica, es sin duda una de las complejas. En el marco del AFP se plantearon entre las dinámicas para el sostenimiento del lugar y la reincorporación a la vida civil, el establecimiento de proyectos productivos colectivos e individuales. Según el séptimo informe del Instituto Kroc, al finalizar el 2023, la ARN registraba 5.733 proyectos productivos aprobados y desembolsados, de los cuales 5.607 son individuales y 126 son colectivos. Estos proyectos benefician a 2.774 mujeres y 7.950 hombres firmantes del AFP, lo que significa que el 76,1% (10.724) de la población acreditada se encuentra vinculada a un proyecto productivo.

Estos datos dan cuenta, primero que los proyectos territoriales construidos dentro del proceso de reincorporación por los excombatientes están directamente relacionados con la capacidad de gestionar recursos que les permita sostenerse la vida civil y segundo que, considerando, los datos específicos ofrecidos sobre los proyectos colectivos y los individuales, en la actualidad, existe una predominancia de aquellos que prefieren imaginarse una vida por fuera de las dinámicas comunes establecidas dentro de los lugares transicionales porque están ya realizando el proceso de reincorporación individualmente o porque aun estando dentro de estos, el deseo es lograr la construcción de proceso propios que los desvincule, por lo menos económicamente, de las dinámicas colectivas.

Aunque, es clara la relevancia de los proyectos productivos en el marco de la supervivencia de los lugares transicionales, en los casos específicos que aquí se analizan, el sostenimiento y perdurabilidad de estos ha sido complejo. Al indagar por la existencia y funcionalidad de estos en Becuarandó, Jaime, un excombatiente entrevistado respondió:

Acá estamos volviendo a empezar de nuevo, ya no hay proyectos productivos colectivos, eso se acabó cuando nos desplazaron de Ituango, como eso, como desplazados, nos tocó dejarlo todo. No había como traernos los animales, acá la tierra es distinta, lo que daba allá, acá no. Yo le digo, nosotros estamos empezando de nuevo, sin saber hasta cuándo es que nos quedamos acá (Jaime, comunicación personal, 2023).

En San José de León hoy existen muy pocos proyectos productivos colectivos, algunos proyectos piscícolas y un pequeño sembrado de plátano. Por otra parte, allí se han creado comercios como carnicerías, tiendas, cantinas, hoteles y transporte de mototaxi que ha dinamizado economías familiares o propias, y algunos excombatientes se encuentran laborando con las diversas instituciones presentes en estos espacios o en fincas cercanas en actividades de agricultura y como jornaleros.

En Becuarandó la diversificación de la economía es menor. Hay un proyecto pequeño de cacao, que, aunque inició como algo común hoy está a cargo exclusivo de uno solo de los firmantes, hay en el predio colectivo sembrado, aunque poco cacao y arroz, y existe una organización de mujeres, “Amaranta”, que mantiene la idea de proyectos colectivos, en la que se han generado productos locales que se comercializan en los mercados campesinos realizados en Mutatá, Apartadó y Chigorodó. Y algunos pocos, que han logrado vincularse laboralmente con las organizaciones presentes en el espacio y otros que realizan trabajos informales como jornaleros en fincas aledañas.



Fotografía 14 Participación del grupo Amaranta en el mercado campesino de Chigorodó, 2024.

Fuente: registro propio, 2024.

El resto son proyectos individuales, una cantina, un billar, hay dos o tres, que han logrado comprar motos, y realizan carreras como mototaxistas, solo dos personas tienen contratos esporádicos para jornalear en fincas cercanas. En todo caso, la situación económica de estos excombatientes es compleja, pese a que reciben la asignación de recursos mensuales, la diversificación de los ingresos ha sido un paso difícil de dar en el contexto que habitan. Sobre la realidad económica que enfrentan dentro de estos lugares transicionales, Liliana expresó:

Con la renta básica mensual da para sostenerse económicamente una sola persona, gracias al señor todavía nos llega, sin ella no sé cómo haríamos, pero es insuficiente. Lo digo por mí, porque soy madre cabeza de hogar, soy sola tengo cinco hijitos, ahora, tengo que sostenerme con eso (asignación mensual) porque no tengo empleo (Liliana, comunicación personal, 2023).

Para los excombatientes se han dado también tránsitos en lo emocional -Reincorporación afectiva-, un aspecto que se ha referido ya por autores como Juan Pietro (2012) quien plantea la importancia de concebir estos procesos de reincorporación, no solo desde la relevancia que poseen las dimensiones económicas y políticas, sino también las necesidades afectivas de los excombatientes, esto es, a la relevancia de construir dentro de las acciones previstas en este tipo de acuerdo, aquellas que aporten al acompañamiento emocional, el diseño y acompañamiento en los procesos de perdón (individual) y reconciliación (con la sociedad), y al establecimiento de un sentido de pertenencia, todos, elementos claves para garantizar una reincorporación exitosa y sostenible. A nivel emocional, al interior de estos lugares, ocurren muchas cosas.

Dejar las armas, implicó de entrada dejar atrás unas disposiciones que, aunque corporales están relacionadas con un posicionamiento en el mundo y cómo nos relacionamos con los otros. Hubo poder en portar un arma, las relaciones entonces estaban mediadas por el miedo, la tensión, la violencia, el dominio y la intimidación, así que, el desarme implicó dejar unas disposiciones corporales, unas formas de relacionarse con otros, que se han ido deconstruyendo, o como lo sugiere Castillejo (2021) desmontando. El proceso de reincorporación ha permitido que aquellos que no habían logrado compartir con sus familias lo hagan y aquellos a quienes no les había sido posible maternar y paternar estén hoy conformando nuevas familias. Al respecto Berta, excombatiente, en la entrevista realizada en 2023, comentó:

Nos reencontramos nuevamente con nuestras familias, muchas de nosotras luego de salir del campo tuvimos hijos y estamos compartiendo con ellos que nunca habíamos tenido esa experiencia (Berta, comunicación personal, 2023).

Estos tránsitos que aquí nombro como emocional, relacional y familiar están directamente vinculados. A ellos están asociados múltiples transformaciones, entre los que interesa destacar uno que refiere a cuestiones de género y que permite observar cómo el proceso de transformación en estos espacios se vincula a las prácticas cotidianas y no esta expresada solo en la esfera de lo público, sino que ocurren y reinterpretan las formas de habitar lo privado o doméstico. Con el

tránsito del monte a los lugares transicionales se dieron unas modificaciones en cómo se asumen las feminidades y masculinidades. Así lo sugiere la profesora Marta Valderrama,

Hubo una distorsión o reajuste en los roles femeninos y masculinos. Teniendo un peso mayor para las mujeres. Cuando estaban en la organización, los roles eran similares para las personas de ambos géneros. Cuando salieron del monte se volvieron tradicionales, las mujeres se fueron a las casas, a realizar las actividades de cuidado de un hogar, y a vivir esas maternidades aplazadas. Muchas de ellas, se dedicaron a hacer familia que era lo que no tenían (M. Valderrama, comunicación personal, 2023).

Los procesos de transitar no son siempre progresivos, lineales o exentos de tensiones y complejidades. Se han dado al interior de estos lugares, transformaciones que han reconfigurado las dinámicas de colectividad o individual que las precedía, una ruta que pone de frente la incómoda incertidumbre de lo que hasta entonces es desconocido. Relacionarse sin armas, implica resignificar las formas de poder, encontrar otras herramientas que permitan la conexión con otros, ver a quienes fueron adversarios como amigos, y a sus víctimas como iguales, en fin, la deconstrucción de paradigmas políticos y emocionales instaurados en la vida de guerra.

Emocionalmente han transitado también en una transformación que de a poco ha dejado a tras la idea de pertenecer todos a una misma organización, a estar todos bajo un mismo mando, una única idea, y objetivo común: la revolución. La vida civil, les ha permitido una reconstrucción de la individualidad, de la subjetivación que muchas veces los ha hecho sentir en soledad, pero también, en libertad.

Conocer las experiencias de San José de León y Becuarandó, ser testiga de las transformaciones que ocurren a diario, de los procesos de cooperación y resistencia que han hecho perdurables estos espacios pese a los incumplimientos y los retos que tiene el posacuerdo en Colombia, permitió identificar que sí están dándose en la práctica procesos de construcción de paz, que además son diferenciales y territoriales, pues dependen sobre todo de lo que se está imaginando y ha sido posible materializar en la cotidianidad por los actores que los habitan y aquellos con quienes se han constituidos de redes de apoyo.

La paz, se está construyendo y sosteniendo con lo que se puede, y aunque el proceso pretendió consolidar unas estrategias generales para la “transición política” de los excombatientes, en la práctica, el proceso es desigual, contradictorio, tiene diversos ritmos como lo evidencian los casos de San José de León y Becuarandó, que aunque asentados en la misma vereda de Mutatá son

la representación de la manera en que cuestiones políticas, económicas y sociales influyen en el proceso, haciendo de esta una construcción atravesada por numerosas variables que pulsan entre las posibilidades/imposibilidades institucionales, y las necesidades/construcciones de los excombatientes.

“Ya no somos, lo que éramos antes”, como lo sugirió Valentín (excombatiente) en una de sus intervenciones en un Comité Territorial de Reincorporación en Mutatá. Eso puede percibirse, hay capacidad en quienes se encuentran en estos lugares de imaginar/crear un camino que, aunque enraizado en el mundo real y en las experiencias de vida, están siendo capaz de construir lo que los conduce hacia la idea del buen vivir. Para seguir a Lederach (2008), es este un proceso en el que se construye un sentido de lugar, ese que es dado por las personas que los producen y habitan y que son el reflejo de la capacidad de imaginar lo inesperado, aunque sea desde la incertidumbre: “un lugar de paz”.

4. Conclusiones.

En un país como Colombia donde el conflicto armado ha hecho parte de la configuración de regiones como Urabá, la violencia y las dinámicas sociales, económicas y políticas que derivan de ella son lo conocido; la paz, en cambio, es un misterio. Es por ello, que acuerdos como el pactado entre la otrora guerrilla de las FARC-EP y el estado colombiano, les exigen a los diversos sectores que componen la sociedad imaginarse, crear y arriesgarse para construir una nueva y enigmática realidad, la de la paz.

En el marco del acuerdo de paz pactado entre las FARC-EP y el gobierno, la implementación del enfoque territorial ha significado el despliegue de una infraestructura que se traduce en políticas, programas y acciones que viabilicen por lo menos, institucionalmente, lo pactado en la negociación y que incluyan una visión diferencial de los distintos contextos en los que se han puesto en marcha. Sin embargo, este es un país que continua en conflicto, en el que existen aún actores armados al margen de la ley, paramilitares, delincuenciales e insurgentes, que controlan espacialmente parte del territorio nacional, en el que los procesos de reincorporación se están dando a la par de los de reparación a víctimas, esto es, donde el restablecimiento del tejido social está en proceso, y donde la capacidad institucional sigue siendo débil en muchas regiones del país.

Además, son los mecanismos, enmarcados dentro de la visión institucional los que han restringido la participación genuina de las comunidades afectadas en la toma de decisiones relacionadas con la paz territorial. Aunque en este se reconoce la importancia de la participación ciudadana, en la realidad, las voces de las comunidades locales son a menudo marginadas o ignoradas en favor de intereses políticos o económicos, lo que ha generado tensiones y también la

necesidad de construir procesos de resistencia que sostengan a los excombatientes, comunidades y demás organizaciones involucradas en el deseo de permanecer haciendo parte del proceso de construir paz.

La paz territorial, entendida aquí como la apuesta práctica y la apropiación de este acuerdo por parte de los distintos actores de la sociedad se está haciendo como se puede, y desde distintas direcciones. No solo el gobierno nacional ha puesto su parte (con las falencias que ha tenido al respecto), sino que las comunidades locales y los excombatientes de las FARC-EP han resistido a las dificultades de la implementación generando estrategias para sostenerse dentro del proceso, las cuales se han convertido en prácticas cotidianas de actores concretos en contextos específicos, que parten de sus propias fortalezas y de sus carencias y necesidades. Es esto lo que ha territorializado la paz y resignificado las relaciones sociales con el espacio.

La paz se construye en las prácticas cotidianas, por tanto, es un asunto mucho más dinámico y complejo que lo que puede enunciarse en un papel o en un discurso político. En este, están involucrados una multiplicidad de actores y procesos que van más allá de la simple firma de documentos. En muchos de estos lugares transicionales, esta se construye a través de la labor cotidiana de líderes comunitarios, organizaciones de base y redes de solidaridad que trabajan incansablemente para sanar las heridas del conflicto y construir un futuro más inclusivo y equitativo.

En lo que respecta a las formas en que se vinculan las condiciones socioespaciales a la construcción de paz, puede decirse que son las mismas características geográficas y sociales que hicieron de la región de Urabá, particularmente Mutatá, una zona estratégica para el emplazamiento de las FARC-EP y el control territorial, las que ahora sustentan la construcción de la paz en esta región. La conectividad y accesibilidad con centros urbanos y de desarrollo (Apartadó, Turbo, Medellín) junto con el reconocimiento geográfico y social de los excombatientes, han permitido desarrollar nuevas formas de estar en estos territorios. Las prácticas cotidianas que han configurado durante el proceso de reincorporación, las múltiples transiciones diarias y la construcción de redes sociales han resignificado su relación con el espacio, y es esto último, lo que aquí se ha entendido como una reconfiguración socioespacial a nivel local, en un contexto en el que sigue dándose una compleja guerra.

La presencia de los excombatientes en Mutatá se debe a que existen allí condiciones sociales e institucionales que han hecho posible no solo la construcción de los lugares transicionales sino

su perdurabilidad, pero también a unos factores espaciales que han sido determinantes como su estratégica ubicación geográfica, a que es esta una región que conocen, al sentido de seguridad que les otorga estar respaldado por las formaciones geográficas (Serranía de Abibe y PNN Nudo del Paramillo) que en la guerra les sirvió para el repliegue, el resguardo y la defensa, a que, en este municipio, al contrario de lo que ocurría en Santa Lucía (Ituango) y Gallo (Tierralta) existen mejores garantías de conectividad no solo con rutas importantes como la doble calzada que conecta al mar en Urabá con Medellín, sino también las facilidades de acceder a los centros urbanos y con ellos a los servicios públicos y sociales mínimos, y a que, hay un reconocimiento de la dinámica social y política de esta región.

Esta realidad social y espacial de Mutatá es lo que ha permitido la disposición institucional a nivel local y departamental para que se dieran las condiciones técnicas, logísticas, y administrativas para la construcción de estos lugares, además de que ha influido en que la participación activa de las comunidades en el restablecimiento de relaciones y la inclusión de los excombatientes en actividades prácticas como la construcción conjunta de infraestructuras y la creación de empleo han sido fundamentales. En definitiva, son estas acciones, que trascienden el marco retórico o institucional, que van emergiendo de forma orgánica como respuestas al avance, complejidades y necesidades propias de estos procesos de reincorporación que se ha dado lo que aquí se ha nombrado como “prácticas diarias que territorializan la paz”.

La pregunta ¿por qué Mutatá?, resultó ser un hallazgo socioespacial, que permitió identificar la importancia del componente geográfico no solo en las dinámicas de guerra, sino también en las propuestas de paz. La comprensión profunda de cómo las características geográficas han influido históricamente en el conflicto permite una revalorización de estas mismas características, reconociendo que la identificación de estas como potencias puede influir en la construcción de un proceso de paz más sostenible y duradero.

En relación con lo antes sugerido y para conectar finalmente los resultados de esta investigación con el interrogante que la ha transversalizado, a saber, ¿la presencia de estos lugares transicionales ha implicado la reconfiguración socioespacial en Mutatá? Aquí se plantea que en Mutatá se está dando una reconfiguración socioespacial a nivel local debido a la instalación de lugares transicionales. Pues esto, ha implicado una resignificación de las relaciones entre los actores y el territorio que habitan, y se manifiesta en cambios en las acciones cotidianas. Esta transformación se refleja en las nuevas formas de convivencia y colaboración entre

excombatientes, comunidades locales, la institucionalidad presente a nivel local, departamental y nacional y con los demás actores presentes (económicos, internacionales, religiosos etc.), que desarrollan acciones conjuntas y crean redes sociales más sólidas que deben ser leídas como indicadores de cambio en la dinámica socioespacial.

La reconfiguración socioespacial en Mutatá es un proceso en curso, complejo, dinámico e inacabado, el cual se está dando por la superposición en un mismo espacio de diversas territorialidades y por las transformaciones ocurridas al interior de cada una de estas luego de firmado el acuerdo y la puesta en práctica de la desmovilización y el proceso de reincorporación de los excombatientes. Ello significó para la región de Urabá, la salida de uno de los principales actores armados del conflicto y ello la reconfiguración de la dinámica bélica de la región, la transformación en varios actores de las territorialidades socioculturales que dentro del acuerdo han iniciado procesos de restablecimiento de derechos y de reparación como víctimas ocupando nuevos espacios de participación e incidencia, una mayor presencia estatal e institucional y con ello un despliegue de servicios sociales y públicos, y por supuesto el ingreso de los excombatientes como un nuevo actor, y como promotores de unas nuevas territorialidades de paz.

Todo esto, ha tenido implicaciones cotidianas y estructurales en la Mutatá de forma particular, pero que logran irradiar al total de la región. Esta superposición, se traduce muchas veces en cooperaciones y relaciones de solidaridad, pero también en tensiones como resultado de la puesta en marcha de estos lugares transicionales en un contexto en el que persiste una dinámica conflictiva que genera presiones sobre el proceso de paz en general y los esfuerzos de reincorporación dados en San José de León y Becuarandó en particular.

Referencias

- Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. (2016).
- Agencia para la Reincorporación y la Normalización. (s. f.). Agencia para la Reincorporación y la Normalización. <https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Paginas/Los-ETCR.aspx>. Ruta de reintegración (reincorporacion.gov.co)
- Álvarez, E. (2021). Urabá, de la pacificación al encuentro con la paz territorial. Universidad de Antioquia.
- Arias, B. (2022). Entrevista [Comunicación personal].
- Auyero, J. (2009). *Pacientes del Estado. Un reporte etnográfico sobre la espera de la gente pobre*. Universidad de Buenos Aires.
- Biblioteca Abiera del Proceso de Paz colombiano. (s. f.). Biblioteca Abierta del Proceso de Paz colombiano. <https://bapp.com.co/recursos/juegos/mapa-zvtn/>
- Cairo, H. (2019). Geografías de la paz y geografías pacifistas en la Guerra Fría: Una diferenciación conceptual y ético-política. *ACME: an international journal for critical geographies*, 18(6), 1167-1183.
- Cairo, H., Oslender, U., Piazzini, E., Rios, J., Koopman, S., Montoya, V., Rodríguez, F., & Zambrano, L. (2018). “Territorial Peace”: The Emergence of a Concept in Colombia’s Peace Negotiations, *Geopolitics. Geopolítica*, 23(2), 464-488.
- Casteñada, M., & González, A. (2016). Expropiación y conflictos por el uso del suelo en el municipio de Mutatá, subregión de Urabá de 2016. *Pluriverso*, 7.

- Castillejo. (2017). *La ilusión de la justicia transicional: Perspectivas críticas desde el Sur Global* (1.^a ed.). Universidad de los Andes.
- Castillejo, A. (2015). *La imaginación social del porvenir: Reflexiones sobre Colombia y el prospecto de una comisión de verdad* (2015.^a ed.). CLACSO.
- Castillejo, A. (2021). El dispositivo transicional: De las administraciones de la incertidumbre a las nuevas socialidades emergentes. *Papeles del CEIC*, 1, 1-15.
- Courtheyn, C. (2022). *Comunidades de paz: Geografías performativas de dignidad ecológica en Colombia*. Universidad del Rosario.
- Daniela. (s. f.). Entrevista [Comunicación personal].
- Echavarría Álvarez, J. (2022). *Siete años de implementación del Acuerdo Final: Perspectivas para fortalecer la construcción de paz a mitad de camino*. Diciembre 2020 a noviembre 2023. Instituto Kroc. https://curate.nd.edu/articles/report/Siete_años_de_implementación_del_Acuerdo_Final_perspectivas_para_fortalecer_la_construcción_de_paz_a_mitad_de_camino/25651275
- Forero, S. (2020, junio 16). La realidad de las nuevas áreas de reincorporación de excombatientes de las Farc. <https://www.elspectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/la-realidad-de-las-nuevas-areas-de-reincorporacion-de-excombatientes-de-las-farc-article/>
- Frente 5 de las Farc, protagonista de la guerra. (2012). <https://verdadabierta.com/frente-5-de-las-farc-protagonista-de-la-guerra-en-antioquia/>
- García, C., Aramburo, C., Barajas, D., Valderrama, D., & Espinosa, N. (2011). *Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueño, 1990-2008*. Cinep-Odecofi.
- González, F. (2020). *Más allá de la coyuntura. Entre la paz territorial y la paz con legalidad*. Pictograma Creativos.
- Guber, R. (2012). *La etnografía: Método, campo y reflexividad*. Siglo XXI.

- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). *Ethnography: Principles in practice*. Routledge.
- Jimenez, C. (2016). Justicia territorial para la construcción de paz. *Bitácora*, 59-66.
- Jose. (s. f.). Entrevista a excombatiente [Comunicación personal].
- Lederach, J. P. (2008). *La imaginación moral, el arte de construir la paz*. Norma.
- Martínez, C. (2007). El método de estudio de caso: Estrategia metodológica de la investigación científica. *Revista Científica Pensamiento y Gestión*, 23.
- Massey, D. (s. f.). *Space, Place and gender* (University of Minnesota Pres).
- Montoya, V. (2023.). Espacialidades emergentes en Colombia tras el acuerdo final. Desafíos para la geografía de la paz en la experiencia de los ETCR en Antioquia y Chocó.
- Ñoño. (2024). Entrevista [Comunicación personal].
- Parque Nacional Natural Paramillo. (s. f.). <https://www.parquesnacionales.gov.co/nuestros-parques/pnn-paramillo/#:~:text=El%20PNN%20Paramillo%20constituye%20el,Sever%20en%20el%20Urab%C3%A1%20antioque%C3%B1o>.
- Peña, L. B. (2019). Paz territorial: Conectando imaginación moral e imaginación geográfica. *CAPAZ*, 9-21.
- Pietro, J. (2012). Guerra, paces y vidas entrelazadas: Coexistencia y relaciones locales entre víctimas, excombatientes y comunidades en Colombia. Universidad de los Andes.
- Pimienta Betancur, A., García Sánchez, A., & Álvarez, E. (2021). Conflicto armado y construcción de paz territorial en el gran Urabá. Una aproximación desde los actores locales. En *Incertidumbres de la paz: Entre el incumplimiento del Acuerdo y las luchas sociales en su defensa* (pp. 203-226). CLACSO.
- Pizarro Leongómez, E. (1991). “Elementos para una sociología de la guerrilla en Colombia”. *Análisis Político*, 12, 8.

Plan Marco para la Paz: Un paso adelante, dos atrás. (2017, septiembre 29).

<https://verdadabierta.com/plan-marco-para-la-paz-un-paso-adelante-dos-atras/>

Plazas Zonas Veredales Transitorias de Normalización. (s. f.). Ministerio de Salud.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/abece-plazas-zonas-veredales.pdf>

Puerto, N. (2023). Entrevista [Comunicación personal].

Ramírez Zuluaga, L. A. (2022). Concurrencia de acuerdos y visiones en la provisión de infraestructuras como forma de reparación a víctimas y de construcción de paz en el Oriente antioqueño.

Revista Colombiana De Antropología, 58(2), 77-104.

<https://doi.org/10.22380/2539472X.2122>

Rosa. (2023). Entrevista con Rosa [Comunicación personal].

Schmitt, C. (1932). El concepto de lo político (Primera Edición). Alianza Editorial.

Serje, M. (2011). El revés de la nación: Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie.

Universidad de los Andes.

Tuan, Y.-F. (1972). Space and place. The perspective of experience. Universidad of Minnesota

Press.

Uribe de Hincapié, M. T. (1992). Urabá: Región o territorio: Un análisis del contexto en la política,

la historia y la etnicidad. Universidad de Antioquia.

Valderrama, M. (2023). Entrevista con Marta Valderrama [Comunicación personal].

Validación del informe analítico sobre el paramilitarismo en el Urabá Antioqueño, el sur de

Córdoba, el bajo Atrato y el Darién. (s. f.). Comisión de la Verdad.

https://micrositios.centrodememoriahistorica.gov.co/validacion_informe_uraba/que-es-el-informe-analitico-sobre-el-paramilitarismo-en-el-uraba-antioqueno-el-sur-de-cordoba-el-bajo-atrato-y-darien/

Versión colectiva del Frente 5 de las Farc- EP en el Caso 04 (Urabá) Junio 17 de 2021 (2021).

<https://www.youtube.com/watch?v=sMni3dLmPIA&t=1303s>

Yin, R. (1989). *Case Study Research: Design and Methods*. Sage.

Yin, R. (1994). *Case Study Research: Design and Methods*. Sage Publications.